

INE/CG558/2022

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DE LA COALICIÓN “VA POR AGUASCALIENTES”, INTEGRADA POR LOS PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, ASÍ COMO DE SU OTRORA CANDIDATA A LA GUBERNATURA DE AGUASCALIENTES, LA C. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2021-2022 EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, IDENTIFICADO COMO INE/Q-COF-UTF/159/2022/AGS

Ciudad de México, 20 de julio de dos mil veintidós.

VISTO para resolver el expediente **INE/Q-COF-UTF/159/2022/AGS**.

A N T E C E D E N T E S

I. Escrito de queja. El veintiséis de mayo de dos mil veintidós, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización escrito suscrito por el diputado Mario Rafael Llergo Latournerie, en su calidad de representante propietario de Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual presenta queja en contra de la Coalición “Va por Aguascalientes”, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional y su candidata a la gubernatura de Aguascalientes, la C. María Teresa Jiménez Esquivel, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 en el estado de Aguascalientes, denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización. (Fojas 01 a 31 del expediente).

II. Hechos denunciados y elementos probatorios.

De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se

**CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/159/2022/AGS**

transcribe la parte conducente de los hechos denunciados y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por la quejosa en su escrito de queja.

“HECHOS:

1.- En fecha 07 de octubre de 2021, el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes aprobó el acuerdo CG-A-66/21, por el que se dio inicio al proceso constitucional electoral en el Estado de Aguascalientes para elegir a la persona que será Titular del Poder Ejecutivo local para el periodo 2022-2027.¹

2.- El 20 de octubre del 2021, el Consejo General del INE mediante el acuerdo INE/CG1601/2021, aprobó ejercer la facultad de atracción para determinar fechas únicas de conclusión del periodo de precampañas y para recabar apoyo de la ciudadanía para las candidaturas independientes, durante los procesos electorales locales 2021-2022 en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.

3.- El 29 de octubre del 2021, el Consejo General del IEEAGS aprobó el acuerdo CG-A-68/21 por el que se modificó la agenda electoral del proceso electoral local 2021-2022.

4.- El Instituto Electoral del Estado de Aguascalientes, en relación con la homologación de plazos acordados con el Instituto Nacional Electoral, determinó que el periodo de campaña será del día 03 de abril de 2022 al 01 de junio de 2022, tal y como se puede corroborar en el siguiente enlace:
<https://www.ieeags.mWdocs/AgendaElectoral/AGENDA%20ELECTORAL%2020214.pdf>

*5.- El ocho de 8 de enero de la presente anualidad es aprobado en sesión extraordinaria por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes el acuerdo identificado con clave alfanumérico **CG-R-01/22, Por el que se resuelve la solicitud de registro del Convenio de Coalición "Va por Aguascalientes", que celebran los Partidos Políticos, Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática, para el proceso electoral local 2021-2022**, para contender en la elección de la Gubernatura del Estado de Aguascalientes, a celebrarse el próximo 5 de junio de 2022.*

6.- Por su parte el 25 de marzo de 2022, en sesión especial, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes aprobó la "RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE LA CUAL SE ATIENDE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATURA

¹ <https://www.ieeags.mWdocs/AgendaElectoral/AGENDA%20ELECTORAL%2020214.pdf>

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/159/2022/AGS

PRESENTADA POR LA COALICIÓN "VA POR AGUASCALIENTES", AL CARGO DE LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, PARA CONTENDER EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2021-2022" identificada con el alfanumérico CG-R-06/22, en cuyo punto segundo refiere:

"SEGUNDO. Este Consejo General aprueba el registro de la C. María Teresa Jiménez Esquivel postulada al cargo de Gobernadora Constitucional del estado de Aguascalientes por la coalición denominada VA POR AGUASCALIENTES, en términos de/ considerando DÉCIMO QUINTO de la presente resolución."

Determinación que obra enlace web:

https://www.ieeags.mx/media/sesiones/2022-04-07/CG-R-06/22/CG-R-06/22/resoluci%C3%93N_DE_REGISTRO_CANDIDATURA_VA_POR_AGUA_1bOa6I9.PDF

Con lo cual está acreditada la calidad de candidata de la C. María Teresa Jiménez Esquivel.

Al tenor de lo anterior, se procede a denunciar lo siguiente

OMISIÓN DE REPORTE DE GASTOS DE CAMPAÑA

A continuación, listo los gastos de campaña que han favorecido a la C. María Teresa Jiménez Esquivel y a la coalición "VA POR AGUASCALIENTES" y que no han sido reportados a esta autoridad como erogaciones, al tenor de lo siguiente:

PRIMERO.- Video publicado el pasado 20 de mayo del presente año, en la red social YouTube, a través del medio de comunicación "**LATINUS**", denominado "Loret Capítulo 83" "Hoy, los audios de funcionarios del gobierno federal que revelan el uso de programas sociales en la compra de votos para Morena..." en el cual el periodista Carlos Loret de Mola, difundió el citado video, el cual puede ser visto a través de los siguientes enlaces:

<https://www.youtube.com/watch?v=SD76uyayZFo>

https://twitter.com/latinus_us/status/1528406354846687232?s=20&t=cTKFQN9ZfijC8vQL7XG8ug

<https://twitter.com/CarlosLoret/status/1528141187420499968?s=20&t=cTKFQN9ZfijC8vQL7XG8ug>

<https://twitter.com/CarlosLoret/status/1527757256179302402?s=20&t=cTKFQ N9ZfjJC8vQL7XG8ug>

Y en el cual, del minuto 8:55 al minuto 15:53, emite la siguiente propaganda político electoral para favorecer a la C. María Teresa Jiménez Esquivel, candidata de la Coalición "VA POR AGUASCALIENTES" integrada por el PAN, PRI y PRD a la gubernatura en el estado de Aguascalientes, al tenor del contenido literal siguiente:

"Carlos Loret de Mola: Mucho se ha hablado de cómo el gobierno de López Obrador usa los programas sociales que son de todos los mexicanos para beneficiar a morena mucho se ha hablado de cómo extorsiona y chantajea a los beneficiarios de esto hay de estos programas sociales diciéndoles la mentira de que si no votas por morena van a perder los apoyos hoy en latinos les vamos a presentar evidencia de esto que es que es un delito electoral grabaciones de funcionarios federales organizando esta trampa testimonios de servidores de la nación contando como los obligan a chantajear a la gente, es el caso Aguascalientes en un reportaje de Gerardo Mejía.

Jesús, coordinador servidores de la nación: Desde que arrancó el proceso electoral la Las precandidaturas o candidaturas de morena en precampañas a todos los servidores de la nación se nos ha pedido que apoyemos a Nora Ruvalcaba se nos ha estado solicitando que a través de las bases de datos que nosotros tenemos de la lista de beneficiarios vayamos a visitar a los beneficiarios y de esta manera podamos coaccionar el voto y como lo hacemos pues diciéndoles prácticamente palabras más palabras menos que si ellos no votan a favor de morena se les van a quitar esos programas sociales.

Reportero: Morena utiliza los padrones de los programas sociales federales y la estructura de la Secretaría de Bienestar para coaccionar el voto a favor de la candidata a la gubernatura de Aguascalientes Nora Ruvalcava Gámez.

Denuncias de servidores de la nación y dos audios en poder de Latinus muestran cómo se ha instruido a servidores públicos para movilizar el aparato de gobierno federal con fines electorales rumbo a los comicios del 5 de julio los servidores de la nación entrevistados aseguran que deben convencer a 300 personas por semana utilizando el padrón de beneficiarios de programas sociales en

Aguascalientes todo de acuerdo al tamaño de la colonia o de la sección que les corresponde para ir generando una especie de pirámide que va aumentando la cantidad de personas a las que se les pide votar por morena. Karla servidora de la nación: A cada persona nosotros tenemos que estarles hablando para convencerlos de qué ellos como beneficiarios puedan convencer a sus mismos familiares a que voten por Nora para eso y para que no les vayan a quitar su apoyo porque nos dicen que les digamos que si cambia de color probablemente se les pueda quitar el apoyo a ellos, que por eso debemos votar por la candidata Nora Ruvalcaba.

Reportero: *Antes de convertirse en candidata de morena Nora Ruvalcaba era delegada de programas para el desarrollo del gobierno federal en Aguascalientes, Y tenía bajo su control los padrones de beneficiarios de la Secretaría de Bienestar en la entidad. Los servidores de la nación señalan que quienes operan esta movilización para conseguir votos son las funcionarias federales Berenice Romo subdelegada de la Secretaría de Bienestar en Aguascalientes y Enriqueta Vilchis Hernández coordinadora de programas bienestar en distritos locales de los servidores de la nación en esta entidad los servidores de la nación aseguran que ellas trabajan en conjunto con Aldo Ruiz Sánchez, coordinador operativo territorial de Morena, y Gil Gutiérrez, consejero nacional de ese partido.*

Blanca, servidora de la nación: *Es contra la ley lo que estamos haciendo y de hecho a veces lo hacemos en el horario de la mañana que no se debería de hacer, pero lo hacemos y tenemos que mandar ubicación en donde estamos y a qué hora empezamos puede ser desde la mañana hasta la tarde noche nosotros estamos yendo a visitar los beneficiarios por órdenes de la licenciada Bere Romo y Gil Gutiérrez.*

Reportero: *Todos ellos se coordinan con el senador de morena José Alejandro Peña Villa quien de acuerdo con los servidores de la nación es el responsable de estas tareas en los seis estados donde habrá elecciones en junio. En un audio de WhatsApp del pasado 18 de abril se escucha Vilchis Hernández coordinadora de programas del bienestar de distritos locales Instruir a funcionarios federales de cómo operar.*

Enriqueta Vilchis: *Ustedes que hacer la siguiente labor primero definir sus colonias segundo ver el número de beneficiarios que tienen esas colonias para ahí está restando porque usted me tiene*

que presentar ese informe hay que ir a visitar a la gente para empezar la concientizar a invitarla a participar por eso es importante que también tomen en cuenta todas las propuestas de la maestra Nora para que esos sean nuestras herramientas para convencer a nuestros posibles o nuestros beneficiarios y que se haga una cadena, ustedes me tienen que poner ahí sus convencidos y yo eso lo voy a hacer en una base de datos porque la tengo que estar mandando cada viernes.

Reportero: *La operación comenzó desde diciembre del año pasado en un audio en poder de Latinus Jesús Ricardo Barba Parra entonces representante de morena del órgano electoral de Aguascalientes pidió movilizar los padrones del programa sociales en favor de su partid. En una reunión con servidores de la nación Barba Parra resaltó que en las elecciones del 2021 morena no llego ni a 100, 000 votos en Aguascalientes cuando existen 175, 000 beneficiarios de programas federales en ese estado, ante esto en diciembre del año pasado los apuro a conseguir votos.*

Jesús Ricardo Barba Parra: *Muchas gracias por haber venido Ricardo Barba sus órdenes el motivo de la reunión es muy concreto que la 4T aterrice bien en Aguascalientes eso como podemos hacerlo con la gobernatura, fuera automático el apoyo tendríamos 175,000 apoyos de que nos preocupamos, pero no está funcionando así no va a funcionar así y tan es así les digo esos 175,000 beneficiarios y morena no llego ni a 100,000 en la elección de 2021 entonces andamos haciendo mal las cosas.*

Reportero: *A propuesta del presidente Andrés Manuel López obrador (SIC) el uso de programas sociales con fines electorales fue incorporado en el catálogo de delitos graves en el artículo 19 de la Constitución hoy coaccionar el voto a través de los programas sociales amerita prisión preventiva oficiosa y es un delito equiparable con el secuestro y feminicidio.*

Jesús, Coordinador Servidores de la Nación: *Hemos platicado directamente con el presidente nacional Mario Delgado en el que se nos ha dicho se nos ha obligado a buscar los convencidos a los promovidos a los beneficiarios y ellos a su vez nos den cinco personas más de beneficiarios y que de esa manera se pueda construir una red tan grande que no pueda ver quien detenga a morena.*

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/159/2022/AGS

De lo que se desprenden conceptos de gasto por la producción, edición y difusión del vídeo de referencia.

SEGUNDO. Que, desde el inicio de la campaña del presente proceso electoral en el estado de Aguascalientes, se han difundido mensajes SMS en apoyo a la C. María Teresa Esquivel y contra de la C. Nora Ruvalcaba Gámez, candidata a la Gubernatura del estado de Aguascalientes por el partido político MORENA, en los cuales se señala lo siguiente:

“En la Secretaria del Bienestar nos duelen las afirmaciones de Nora Ruvalcaba al asegurar que esta área es un nido de corrupción, INGRATA”, “Mientras Nora Ruvalcaba usa el tema del agua contra sus adversarios ella llena su alberca con cien mil litros todos los fines de semana”, “Nora nos traicionó con la Villa Blanca, vida de lujos es contra la austeridad republicana que pregona AMLO y sus principio no mentir, nos traicionar y no robar”, “Latinus Nora Ruvalcaba engaña a Aguascalientes LA CÁRCEL minuto 8:55 <https://latinus.us/2022/05/19/loret-capitulo-83/amp/>”, “Presidente ordena investigar y encarcelar a Servidores de la Nación en Aguascalientes, no habrá impunidad honestidad, no traicionar”, “Repartir tarjetas valiéndose de la necesidad del pueblo es una compra de voto descarada. Que investigue la Fiscalía y se aplique todo el peso de la Ley: AMLO”, “No podemos ser cómplices de un fraude y esto lo tenemos que hacer todos los ciudadanos, en los municipios, en los estados agregó el presidente López Obrador”.

Los mensajes anteriores han sido remitidos a diversos usuarios de celular, provenientes de los números 43885, 56836 y 59895. Dichos mensajes se aportan, desde este momento, como pruebas técnicas a esta autoridad administrativa en el apartado de pruebas.

*En el caso que nos ocupa relativo a la difusión de propaganda mediante mensajes de texto SMS y lonas en contra de la C. Nora Ruvalcaba Gámez, candidata a la Gubernatura del estado de Aguascalientes por el partido político MORENA, conllevan un llamado implícito a **no votar en favor de MORENA**, por lo que se puede concluir que hay elementos objetivos que permiten determinar que se está en presencia de una estrategia propagandística dirigida a beneficiar a la C. María Teresa Jiménez Esquivel, candidata de la Coalición "VA POR AGUASCALIENTES" y a los partidos políticos que la integran PAN, PRI y PRD.*

Además, se denuncia por esta vía los conceptos erogados por la contratación de empresas y costos relacionados con la producción de esos mensajes SMS.

TERCERO. *Que, desde el inicio de la campaña electoral del presente proceso electoral en el estado de Aguascalientes, se han colocado diversas lonas en todo el estado de Aguascalientes con propaganda en contra de la C. Nora Ruvalcaba Gámez, candidata a la Gubernatura del estado de Aguascalientes por el partido político MORENA, en las que se señala lo siguiente: “**EN ESTA COLONIA ODIAMOS A MORENA DENUNCIAREMOS AL 911**”. Dichas lonas se aportan, desde este momento, como pruebas técnicas a esta autoridad administrativa en el apartado de pruebas.*

Por todo ello, esta autoridad electoral debe considerar este tipo de propaganda como propaganda de campaña, que lleva inherente la erogación de gastos por la producción de las referidas lonas.”

Elementos probatorios ofrecidos por la parte quejosa:

“PRUEBAS

1.- DOCUMENTAL PÚBLICA, *la certificación de la autoridad electoral competente, en donde conste la existencia y contenido de las ligas descritas en el cuerpo del presente escrito.*

Em (sic) este sentido, solicito a esta autoridad electoral, lleve a cabo la certificación del video publicada el pasado 20 de mayo del presente años, en la red social YouTube, a través del medio de comunicación “LATINUS”, denominado “Loret Capítulo 83” “Hoy, los audios de funcionarios del gobierno federal que revelan el uso de programas sociales en la compra de votos para Morena...”; en el cual el periodista Carlos Loret de Mola, difundió el citado video, el cual puede ser localizado en las siguientes direcciones electrónicas:

<https://www.youtube.com/watch?v=SD76uyayZFo>

https://twitter.com/latinus_us/status/1528406354846687232?s=20&t=cTKFQN9ZfijC8vQL7XG8ug

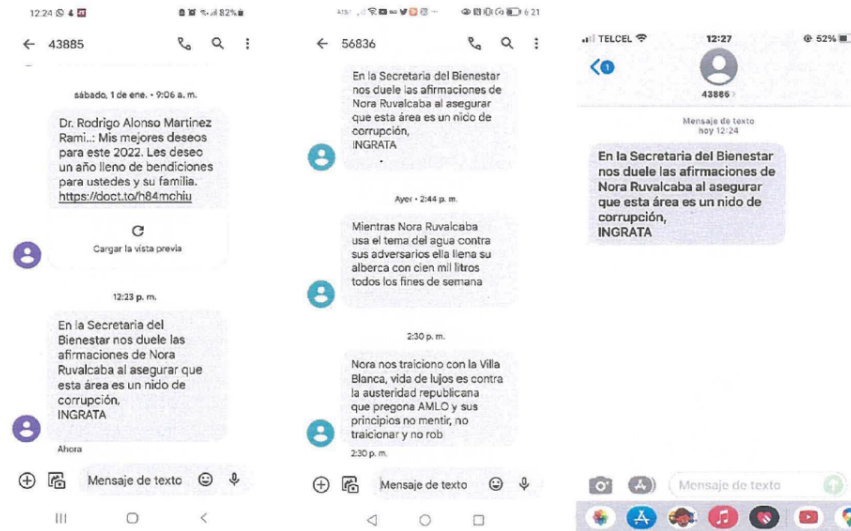
<https://twitter.com/CarlosLoret/status/1528141187420499968?s=20&t=cTKFQN9ZfijC8vQL7XG8ug>

<https://twitter.com/CarlosLoret/status/1527757256179302402?s=20&t=cTKFQN9ZfijC8vQL7XG8ug>

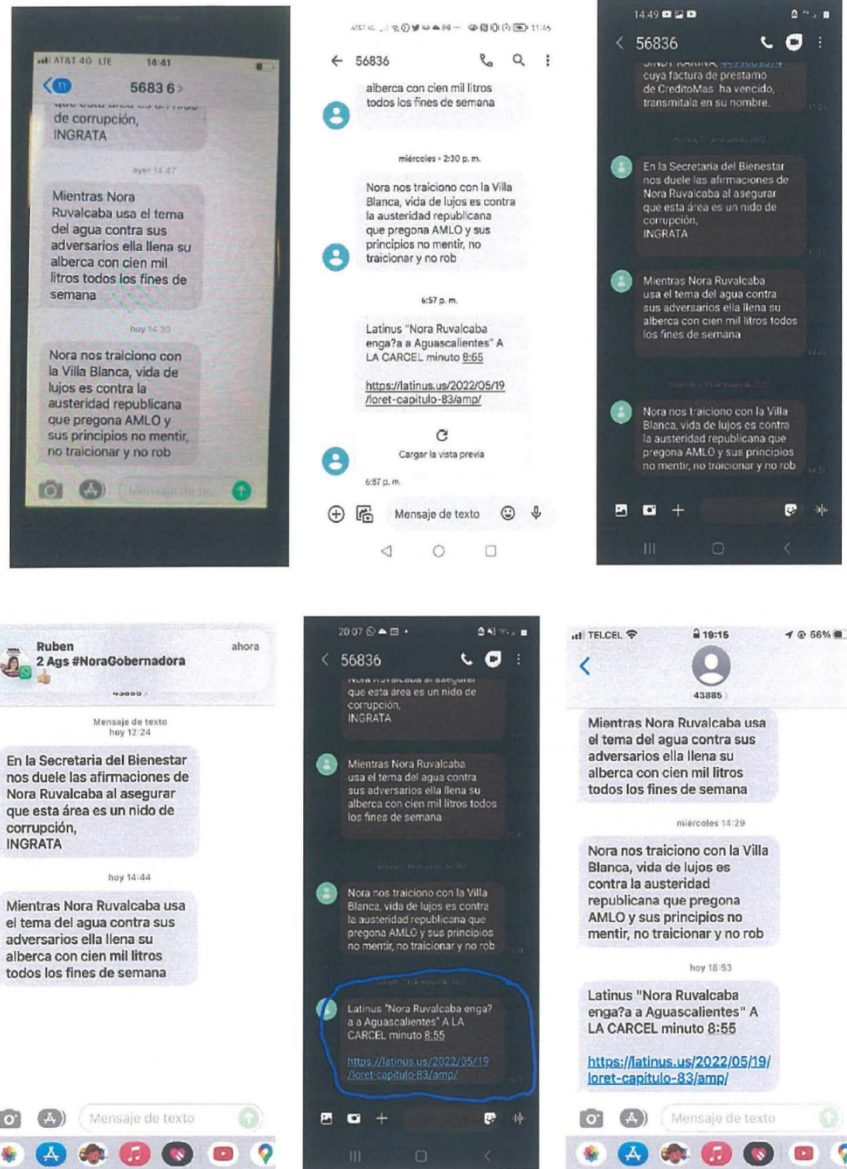
CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/159/2022/AGS

Y en el cual, del minuto 8:55 al minuto 15:53, emite la siguiente propaganda político electoral para favorecer a la C. María Teresa Jiménez Esquivel, candidata de la Coalición “VA POR AGUASCALIENTES” integrada por el PAN, PRI y PRD a la gubernatura del estado de Aguascalientes. Por lo que solicito, se investigue y requiera a la empresa YouTube y a la empresa Latinus, a efecto de determinar su responsabilidad, quienes las contrataron y cuál es el origen de los recursos con los que se está financiado dicha propaganda negra y/o calumniosa denunciada en la presente queja.

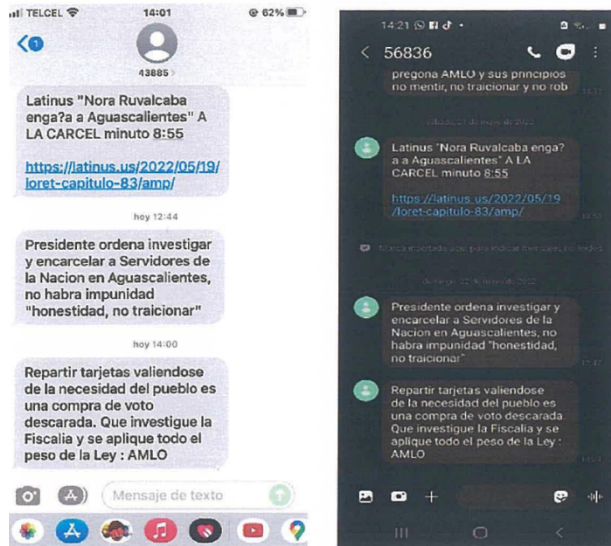
2. INSTRUMENTAL TÉCNICA. Consistente en diversas imágenes que contienen los mensajes de texto denunciados con contenido de propaganda electoral negra y/o calumniosa; las cuales son las siguientes:



CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/159/2022/AGS



**CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/159/2022/AGS**



Por lo anterior solicito a esta autoridad electoral, investigue a través de la policía cibernética los números telefónicos 43885, 56836 y 59895 de donde se está enviando los mensajes de texto denunciados, a efecto de determinar la empresa responsable, su contratación y el origen de los recursos con los que se está financiando la propaganda negra y/o calumniosa denunciada en la presente queja.

3. INSTRUMENTAL TÉCNICA. Consistente en diversas imágenes que contienen las lonas con contenido de propaganda electoral negra y/o calumniosa; las cuales son las siguientes:

LONA 1.-



CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/159/2022/AGS

San Miguel el Alto 314 esquina con Rincón de Romos en el Fraccionamiento San Francisco del Arenal del distrito VI

https://www.google.com.mx/maps/@21.9096768,-102.3042818,3a,75y,148.42h,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1sQu_GAIBTP19YaKGWJqrWJw!2e0!6shhttps:%2F%2Fstreetviewpixwla-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DQu_GAIBTP19YaKGWJqrWJw%26cb_cliente%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D150.30489%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i16384!8i8192

Coordenadas: 21.90969, -102.30432

LONA 2.-



Av. Adolfo López Mateos a un costado de Family Garden en el Fraccionamiento Reserva San Cristóbal del distrito VI.

https://www.google.com.mx/maps/@21.9421022,-102.3055729,3a,75y,214.58h,94.41t/data=!3m7!1e1!3m5!1smHHGTdH9IbLI9v5WjAVYGQ!2e0!6shhttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DmHHGTdH9IbLI9v5WjAVYGQ%26cb_cliente%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D265.92517%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i16384!8i8192

Coordenadas: 21.942107, -102.305834

LONA 3.-



CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/159/2022/AGS

San Jorge 199 esquina con San Clemente en el Fraccionamiento San Cayetano del distrito VI. AGS. AGS.

https://www.google.com.mx/maps/@21.9016238,-102.3091092,3a,75y,69.06h,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1s5BbFcy106wFARio5CWqh8A!2e0!6shhttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3D5BbFcy106wFARio5CWqh8A%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D67.58607%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i16384!8i8192

Coordenadas: 21.901617, -102.309100

LONA 4.-



Piracanto 602 esquina con Abedul del Fraccionamiento Las Arboledas del distrito Vi.- AGS. AGS.

https://www.google.com.mx/maps/@21.90051888,-102.3049533,3a,75y,216.19h,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1suBGWLj94bdzeKPx183vqlQ!2e0!6shhttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DuBGWLj94bdzeKPx183vqlQ!26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D214.17194%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i16384!8i8192

Coordenadas: 21.90051, -102.30496

LONA 5.-



CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/159/2022/AGS

Av. Héroe de Nacozari norte 1292, frente al puente peatonal en la Colonia Gremial del distrito XI.- AGS. AGS

<https://www.google.com.mx/maps/@21.8946959,-102.2860282,3a,75y,359.93h,90.83t/data=!3m6!1e1!3m4!1sEdZ7ujQJ6GLNQ7shwqCYzA!2e0!7i16384!8i8192>

Coordenadas: 21.89503, -102.28617

LONA 6.-



Av. Luis Gil 120 frente a la puerta sur del Fraccionamiento Las Cavas.-

<https://www.google.com.mx/maps/@21.93.11719,-102.2929237,3a,75y,171.19h,91.57t/data=!3m6!1e1!3m4!1sBgv9jHNxldLi0vz6hgxiNw!2e0!7i16384!8i8192>

Coordenadas: 21.931173, -102.293034

Por lo anterior solicito a esta autoridad electoral, investigue a través de la Junta Local del INE en Aguascalientes la colocación y distribución de las lonas denunciadas, a efecto de determinar la empresa responsable, su contratación y el origen de los recursos con los que se está financiando la propaganda negra y/o calumniosa denunciada en la presenta queja.

4. PRESUNCIONAL, en su doble aspecto, legal y humana en todo lo que favorezca a los legítimos intereses de mi representado, en tanto entidad de interés público.

5. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en todo lo que favorezca a los intereses de mi representado.”

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/159/2022/AGS

III. Acuerdo de inicio de procedimiento de queja. El veintiocho de mayo de dos mil veintidós, se acordó integrar el expediente de mérito, asignar el número de expediente **INE/Q-COF-UTF/159/2022/AGS**, registrarlo en el libro de gobierno, iniciar el trámite y sustanciación, notificar su recepción al Secretario del Consejo General de este Instituto, al Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización, así como a las personas incoadas. (Fojas 32 a 34 del expediente).

IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio de procedimiento de queja.

a) El veintiocho de mayo de dos mil veintidós, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 35 a 38 del expediente).

b) El treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, se retiraron del lugar que ocupan en este instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de inicio, la cédula de conocimiento y, mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Fojas 39 y 40 del expediente).

V. Notificación del inicio de procedimiento de queja al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El veintiocho de mayo de dos mil veintidós, mediante el oficio INE/UTF/DRN/13106/2022 se informó al Secretario del Consejo General de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito. (Fojas 41 a 45 del expediente).

VI. Notificación de inicio de procedimiento de queja a la Presidencia de la Comisión de Fiscalización. El veintiocho de mayo de dos mil veintidós mediante el oficio INE/UTF/DRN/13107/2022, esta autoridad informó a la Presidencia de la Comisión de Fiscalización, el inicio del procedimiento de mérito. (Fojas 46 a 50 del expediente).

VII. Notificación del inicio de procedimiento al partido Morena. El veintiséis de junio de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/14616/2022, se notificó al Representante de Finanzas del partido Morena sobre el inicio del procedimiento. (Fojas 336 a 342 del expediente).

VIII. Solicitud de certificación a la Dirección del Secretariado de este Instituto.

a) El treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/13272/2022, se solicitó a la Dirección del Secretariado de este Instituto, certificara el contenido alojado en 14 (catorce) direcciones electrónicas, así como la inspección ocular y levantamiento de cuestionarios en 6 (seis) domicilios distintos. (Fojas 54 a 60 del expediente).

b) El tres de junio de dos mil veintidós, mediante oficio INE/DS/1070/2022 la Dirección del Secretariado de este Instituto remitió: el acuerdo de admisión de fecha primero de junio de la presenta anualidad respecto de la solicitud descrita en el inciso anterior, bajo el expediente de oficialía electoral INE/DS/OE/242/2022; y el acta circunstanciada por lo que hace a la certificación de catorce direcciones electrónicas INE/DS/OE/CIRC/211/2022. (Fojas 77 a 90 del expediente).

c) El veinticuatro de junio de dos mil veintidós, mediante oficio INE/DS/1243/2022 la Dirección del Secretariado de este Instituto remitió las actas circunstancias INE/OE/JD/AGS/01/CIRC/004/2022, OE/006/03-06-2022 y INE/OE/JD/AGS/03/CIRC/005/2022, dictadas dentro del expediente INE/DS/OE/242/2022 respecto de la inspección ocular y levantamiento de cuestionarios. (Fojas 205 a 333 del expediente).

IX. Razones y Constancias

a) El veintiocho de mayo de dos mil veintidós, a través de una búsqueda en el navegador de internet conocido como “Google”, se hizo constar el domicilio de la persona moral “Digital Beacon Programatic Services S.A. de C.V.” mejor conocida como “LatinUS”. (Fojas 51 a 53 del expediente).

b) El veintiuno de junio de dos mil veintidós, se hizo constar que, derivado de la búsqueda a través del navegador de internet mejor conocido como “Google” fue posible localizar el domicilio correspondiente a la persona moral Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V., y/o ATT&T Comercialización Móvil, S. de R.L. de C.V., mejor conocida como “AT&T”. (Fojas 192 a 194 del expediente).

c) El veintiuno de junio de dos mil veintidós, se hizo constar que, derivado de la búsqueda a través del navegador de internet mejor conocido como “Google” fue posible localizar el domicilio correspondiente a la persona moral Pegaso PCS, S.A. de C.V., mejor conocida como “Movistar”. (Fojas 195 a 197 del expediente).

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/159/2022/AGS

d) El veintisiete de junio de dos mil veintidós, se hizo constar que, derivado de la búsqueda a través del navegador de internet mejor conocido como “Google” fue posible localizar el domicilio correspondiente a la persona moral Desarrollos y Construcciones del Centro, S.A. de C.V. (Fojas 406 a 408 del expediente).

e) El veintisiete de junio de dos mil veintidós, se hizo constar que, derivado de la búsqueda a través del navegador de internet mejor conocido como “Google” fue posible localizar el domicilio correspondiente Family Garden en Aguascalientes. (Fojas 409 a 411 del expediente).

f) El veintinueve de junio de dos mil veintidós, se hizo constar que, derivado de la búsqueda a través del navegador de internet mejor conocido como “Google” fue posible localizar el domicilio correspondiente a la persona moral Concepto Móvil S.A. de C.V. (Fojas 594 a 596 del expediente).

g) El seis de julio de dos mil veintidós, se hizo constar que, derivado de la búsqueda a través del navegador de internet mejor conocido como “Google” fue posible localizar el domicilio y cuenta de correo electrónico correspondiente a la persona moral 001TECH SL, también conocida como LABS MOBILE. (Fojas 941 a 945 del expediente).

h) El once de julio de dos mil veintidós, se hizo constar que, de la búsqueda en el Padrón de Afiliados a partidos políticos, específicamente por lo que hace a los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, no fue posible advertir el registro del C. Aldo Cuitláhuac Ugarte Mercado. (Fojas 1080 a 1084 del expediente).

i) El once de julio de dos mil veintidós, se hizo constar que, de la búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización específicamente en el Registro Nacional de Proveedores no fue posible advertir el registro de del C. Aldo Cuitláhuac Ugarte Mercado, mientras que de la persona moral AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V. si fue posible advertir su registro. (Foja 1085 a 1094 del expediente).

X. Solicitud de información al Representante Legal y/o Apoderado Legal de Digital Beacon Programatic Services S.A. de C.V. mejor conocida como LatinUS.

a) El tres de junio de dos mil veintidós mediante oficio INE/UTF/DRN/13245/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó información al Representante Legal y/o Apoderado Legal de Digital Beacon Programatic Services, S.A. de C.V. mejor

conocida como LatinUS, respecto de la difusión de un video. (fojas 91 a 98 del expediente).

b) El siete de junio de dos mil veintidós se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización, mediante el cual el C. Christian González Guadarrama en representación legal de Digital Beacon Programatic Services, S.A. de C.V., da respuesta al requerimiento formulado. (Fojas 99 a 136 del expediente).

XI. Solicitud de información a la Dirección General de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes.

a) El seis de junio de dos mil veintidós se notificó el oficio INE/UTF/DRN/13428/2022, mediante el cual se solicitó información a la Dirección General de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes. (Fojas 141 a 148 del expediente).

b) El diez de junio de dos mil veintidós se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el oficio INE/UTF/AGS/047/2022, suscrito por el Enlace de Fiscalización de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Aguascalientes, mediante el cual remite el oficio SSP/DGPC/4989/2022 suscrito por el Ing. Balam García Rivera en su carácter de Director General de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública de Aguascalientes, mediante el cual da respuesta al requerimiento realizado. (Fojas 159-165 del expediente).

XII. Solicitud de información al Instituto Federal de Telecomunicaciones.

a) El seis de junio de dos mil veintidós, se notificó el oficio INE/UTF/DRN/13429/2022, mediante el cual se solicitó información relacionada con la difusión de mensajes SMS al Instituto Federal de Telecomunicaciones. (Fojas 137 a 140 del expediente).

b) El diez de junio de dos mil veintidós, se recibió a través de correo institucional el oficio IFT/212/CGVI/0607/2022 suscrito por la Coordinadora General de Vinculación Institucional del Instituto Federal de Telecomunicaciones, mediante el cual se da respuesta al requerimiento de mérito. (Fojas 151 a 156 del expediente).

XIII. Solicitud de información a la Guardia Nacional.

a) El tres de junio de dos mil veintidós se notificó el oficio INE/UTF/DRN/13430/2022, mediante el cual se solicitó información relacionada con

la difusión de mensajes SMS a la Guardia Nacional. (Fojas 579 a 582 del expediente).

c) El dieciséis de junio de dos mil veintidós se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el oficio GN/UPEC/DGC/5681/2022, suscrito por el Inspector Jefe Jorge Jesús Borrego Álvarez en su calidad de Titular de la Dirección General Científica de la Guardia Nacional, por el cual remite el informe suscrito por el Ing. Héctor Manuel Catemaxca de Dios en su calidad de oficial adscrito al Centro Nacional de Respuestas a Incidentes Cibernéticos de la Dirección General Científica de la Guardia Nacional mediante a través del cual se da respuesta al requerimiento formulado. (Fojas 164 a 188 del expediente).

XIV. Solicitud de información al Representante Legal y/o Apoderado Legal de Radiomóvil DIPSA, S.A. de C.V.

a) El veintidós de junio de dos mil veintidós se notificó vía correo electrónico el oficio INE/UTF/DRN/14452/2022 y su anexo, mediante el cual se solicitó información al Representante Legal y/o Apoderado Legal de Radiomóvil DIPSA, S.A. de C.V. (Fojas 203 a 204 del expediente).

b) El veinticuatro de junio de dos mil veintidós se recibió vía correo electrónico el escrito de la misma fecha, suscrito por el Representante y/o Apoderado Legal de Radiomóvil DIPSA, S.A. de C.V., mediante el cual solicita una prórroga para atender el requerimiento de mérito. (Fojas 394 a 397 del expediente).

c) El veintisiete de junio de dos mil veintidós, mediante acuerdo la Unidad Técnica de Fiscalización forma otorgó una prórroga a la persona moral el Representante y/o Apoderado Legal de Radiomóvil DIPSA, S.A. de C.V., para atender el requerimiento formulado. (Fojas 398 a 400 del expediente).

d) El veintisiete de junio de dos mil veintidós se notificó vía correo electrónico el oficio INE/UTF/DRN/14593/2022 y su anexo, mediante el cual se hace de conocimiento el acuerdo por el que se otorga una prórroga al Representante Legal y/o Apoderado Legal de Radiomóvil DIPSA, S.A. de C.V. (Fojas 401 y 405 del expediente).

e) El veintinueve de junio de dos mil veintidós se recibió vía correo electrónico el escrito, suscrito por el Representante y/o Apoderado Legal de Radiomóvil DIPSA, S.A. de C.V., mediante el cual da respuesta al requerimiento de mérito. (Fojas 588 a 592 del expediente).

XV. Solicitud de información al Representante Legal y/o Apoderado Legal de Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V. y/o ATT&T Comercialización Móvil, S. de R.L. de C.V.

a) El veintidós de junio de dos mil veintidós se notificó el oficio INE/UTF/DRN/14453/2022, mediante el cual se solicitó información al Representante Legal y/o Apoderado Legal de Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V. y/o ATT&T Comercialización Móvil, S. de R.L. de C.V. (Fojas 477 a 491 del expediente).

b) El veintiocho de junio de dos mil veintidós se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el escrito sin fecha, suscrito por la Apoderada Legal de Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V. y/o ATT&T Comercialización Móvil, S. de R.L. de C.V., mediante el cual solicita una prórroga para atender el requerimiento de mérito. (Fojas 500 a 538 del expediente).

c) El veintinueve de junio de dos mil veintidós se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el escrito suscrito por la Apoderada Legal de Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V. y/o ATT&T Comercialización Móvil, S. de R.L. de C.V., mediante el cual da respuesta al requerimiento de formulado. (Fojas 539 a 578 del expediente).

d) El once de julio de dos mil veintidós se notificó vía correo electrónico el oficio INE/UTF/DRN/15257/2022, mediante el cual se solicitó información a la Apoderada Legal de Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V. y/o ATT&T Comercialización Móvil, S. de R.L. de C.V. (Fojas 1106 a 1113 del expediente).

e) El trece de julio de dos mil veintidós, se recibió un escrito de fecha once de julio de dos mil veintidós, suscrito por la Apoderada Legal de Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V. y/o ATT&T Comercialización Móvil, S. de R.L. de C.V., mediante el cual solicita una prórroga al requerimiento de formulado. (Fojas 1164 a 1221 del expediente).

f) El trece de julio de dos mil veintidós, se recibió escrito suscrito por la Apoderada Legal de Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V. y/o ATT&T Comercialización Móvil, S. de R.L. de C.V., mediante el cual da respuesta al requerimiento formulado en el diverso INE/UTF/DRN/15257/2022. (Fojas 1252 a 1310 del expediente).

XVI. Solicitud de información al Representante Legal y/o Apoderado Legal de Pegaso PCS S.A. de C.V.

a) El veinticuatro de junio de dos mil veintidós se notificó el oficio INE/UTF/DRN/14454/2022, mediante el cual se solicitó información al Representante Legal y/o Apoderado Legal de Pegaso PCS, S.A. de C.V. (Fojas 492 a 499 del expediente).

b) El treinta de junio de dos mil veintidós se notificó vía correo electrónico el oficio INE/UTF/DRN/14700/2022 y su anexo, mediante el cual se insistió sobre la solicitud de información realizada al Representante Legal y/o Apoderado Legal de Pegaso PCS, S.A. de C.V. (Fojas 597 a 602 del expediente).

c) El treinta de junio de la presente anualidad, se recibió el escrito suscrito por el Representante Legal y/o Apoderado Legal de Pegaso, PCS S.A. de C.V., mediante el cual atiende el requerimiento de mérito. (Foja 673 a 674 del expediente).

XVII. Solicitud de información Representante Legal y/o Apoderado Legal de Desarrollos y Construcciones del Centro, S.A. de C.V.

a) El veintinueve de junio de dos mil veintidós se notificó el oficio INE/UTF/DRN/14634/2022, mediante el cual se solicitó información al Representante Legal y/o Apoderado Legal de Desarrollos y Construcciones del Centro, S.A. de C.V. (Fojas 855 a 877 del expediente).

b) El cuatro de julio de dos mil veintidós se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el escrito mediante el cual el Representante Legal de Desarrollos y Construcciones del Centro, S.A. de C.V. dio respuesta al requerimiento de mérito. (Fojas 754 a 770 del expediente).

XVIII. Acuerdo para emplazamientos. El veinticinco de junio de dos mil veintidós, mediante acuerdo la Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización acordó emplazar a través del Sistema Integral de Fiscalización a los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y a su otrora candidata a la gubernatura del estado de Aguascalientes, la C. María Teresa Jiménez Esquivel. (Fojas 334 a 335 del expediente).

XIX. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al Partido Acción Nacional.

a) El veinticinco de junio de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/14612/2022 se notificó el inicio del procedimiento y emplazó al Partido Acción Nacional corriéndole traslado con la totalidad de elementos que integran el escrito de queja. (Fojas 343 a 354 del expediente).

b) El veintiocho de junio de dos mil veintidós, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el escrito número RPAN-0246/2022 signado por el representante del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que da contestación al emplazamiento, en el tenor siguiente: (Fojas 436 a 470 del expediente).

“(…)

IMPROCEDENCIA DE LA QUEJA o DENUNCIA:

*Previamente a realizar la contestación correspondiente a la presente queja que ahora nos ocupa, esta Autoridad Electoral deberá de realizar el correspondiente análisis de las fracciones I, y II del numeral 1. del artículo 30 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en adelante Reglamento de Procedimientos Sancionadores, a la luz de lo previsto en el artículo 440, numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en virtud de que de la simple lectura, dicha queja actualiza las fracciones antes referidas del Reglamento de Procedimientos Sancionadores, ya que los hechos narrados en la misma, resultan notoriamente inverosímiles, encontrando éstos su base en meras conjeturas personales y apreciaciones subjetivas, sin que se acredite conducta imputable a la denunciada, así mismo, los hechos narrados por el quejoso, deben ser considerados como frívolos, toda vez que los hechos referidos resultan por demás falsos e inexistentes, aunado a la carencia y omisión en la presentación de las pruebas idóneas y mínimas para acreditar la veracidad de su dicho, sin que de igual manera, se acredite conducta ilegal imputable a la denunciada, o a la de los partidos políticos integrantes de la Coalición "Va Por Aguascalientes", es decir, el Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y/o Partido de la Revolución Democrática, es decir, la quejosa de manera por demás deficiente, denuncia hechos que no se encuentran soportados debidamente conforme a derecho, siendo por tanto factible, **que ésta autoridad determine a la luz del artículo 31, numeral 1, fracción I y II del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, el desechamiento correspondiente respecto a la queja planteada por la***

evidente frivolidad en su contenido y hechos narrados claramente inverosímiles, para lo cual me permito transcribir a continuación los artículos antes referidos:

(...)

Así mismo, de una interpretación mutatis mutandi, al criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación en la jurisprudencia 20/2009, de rubro PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. EL DESECHAMIENTO DE LA DENUNCIA POR EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL NO DEBE FUNDARSE EN CONSIDERACIONES DE FONDO, se desprende que el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, está facultado para someter a la aprobación de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el desechamiento de la queja presentada sin prevención alguna, entre otras causas, cuando del análisis del escrito de queja, se observe y colija que los hechos narrados en el referido escrito, resulten notoriamente inverosímiles aunado a que de igual manera, los hechos denunciados se consideren frívolos, sin que sea procedente realizar juicios de valor acerca de la legalidad de los hechos, a partir de la ponderación de los elementos que rodean esas conductas y de la interpretación de la ley presuntamente conculcada.

(...)

CONTESTACIÓN A LOS HECHOS PLANTEADOS:

1.- En relación al correlativo hecho 1, se manifiesta que ni se afirma, ni se niega por no ser hecho propio.

2.- En relación al correlativo hecho 2, se manifiesta que ni se afirma, ni se niega por no ser hecho propio.

3.- En relación al correlativo hecho 3, se manifiesta que ni se afirma, ni se niega por no ser hecho propio.

4.- En relación al correlativo hecho 4, se manifiesta que ni se afirma, ni se niega por no ser hecho propio.

5.- En relación al correlativo hecho 5, que se contesta es cierto.

6.- En relación al correlativo hecho 6, éste se contesta en dos momentos, primeramente, se contesta como CIERTO, única y exclusivamente en cuanto a lo refiero en la transcripción siguiente:

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/159/2022/AGS

"6.- Por su parte el 25 de marzo de 2022, en sesión especial, el Consejo General del Instituto Estatal electoral de Aguascalientes aprobó la "RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE LA CUAL SE ATIENDE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATURA PRESENTADA POR LA COALICIÓN "VA POR AGUASCALIENTES", AL CARGO DE LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE AGUASCALEINTES, PARA CONTENDER EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2021-2022" identificada con el alfanumérico CG-R-06/22, en CUYO punto segundo refiere:

"SEGUNDO. Este consejo General aprueba el registro de la C. María Teresa Jiménez Esquivel postulada al cargo de Gobernadora Constitucional del estado de Aguascalientes por la coalición denominada VA POR AGUASCALIENTES, en términos del considerando DÉCIMO QUINTO de la presente resolución."

Con lo cual está acreditada la calidad de candidata de la C. María Teresa Jiménez Esquivel. "

Ahora bien, en cuanto a lo demás contenido en el correlativo hecho 6, es decir, aquello que la quejosa refiere como supuestos gastos de campaña que han favorecido a la denunciada y a la coalición "Va Por Aguascalientes" de la cual la denunciada fungió como candidata a la Gubernatura, ahora candidata electa, y que el mismo quejoso, denuncia por supuestamente no haber emitido el correspondiente reporte a esta autoridad como erogaciones, me permitiré primeramente transcribir lo denunciado, para posteriormente abordarla de la siguiente manera:

I.- En la parte que el quejoso refiere:

"PRIMERO.- Video publicado el pasado 20 de mayo del presente año, en la red social YouTube, a través del medio de comunicación "LATINUS", denominado "Loret Capítulo 83" "Hoy, los audios de funcionarios del gobierno federal que revelan el luso de programas sociales en la compra de votos para Morena..."; en el cual el periodista Carlos Loret de Mola, difundió el citado video, el cual puede ser visto a través de los siguientes enlaces:

(...)

Y en el cual, del minuto 8:55 al minuto 15:53, emite la siguiente propaganda político electoral para favorece a la C. María Teresa Jiménez

Esquivel, candidata de la coalición "VA POR AGUASCALIENTES" integrada por el PAN, PRI y PRD a la gubernatura en el estado de Aguascalientes, al tenor del contenido literal siguiente:

(...)

De lo que se desprenden conceptos de gasto por la producción, edición y difusión del video de referencia.

II.- En la parte que el quejoso refiere:

"SEGUNDO.- Que, desde el inicio de la campaña del presente proceso electoral en el estado de Aguascalientes, se han difundido mensajes SMS en apoyo a la C. María Teresa Esquivel y contra de la C. Nora Ruvalcaba Gómez, candidata a la Gubernatura del estado de Aguascalientes por el partido político MORENA, en los cuales se señala lo siguiente:

(...)

Los mensajes anteriores han sido remitidos a diversos usuarios de celular, proveniente de los números 43885, 56836 y 59895. Dichos mensajes se aportan desde este momento, como pruebas técnicas a esta autoridad administrativa en el apartado de pruebas.

En el caso que nos ocupa relativo a la difusión de propaganda mediante mensajes de texto SMS y lonas en contra de la C. Nora Ruvalcaba Gómez, candidata a la gubernatura del estado de Aguascalientes por el partido político MORENA, conllevan un llamado implícito a no votar en favor de MORENA, por lo que se puede concluir que hay elementos subjetivos que permiten determinar que se está en presencia de una estrategia propagandística dirigida a beneficiar a la C. María Teresa Jiménez Esquivel, candidata de la Coalición "VA POR AGUASCALIENTES" y a los partidos políticos que la integran PAN, PRI Y PRD.

Además, se denuncia por esta vía los conceptos erogados por la contratación de empresas y costos relacionados con la producción de esos mensajes SMS.

III.- En la parte que el quejoso refiere:

"TERCERO.- Que, desde el inicio de la campaña electoral del presente proceso electoral en el estado de Aguascalientes, se han colocado diversas lonas en todo el estado de Aguascalientes con propaganda en contra de la C. Nora Ruvalcaba Gómez, candidata a la Gubernatura del estado de Aguascalientes por el partido político MORENA, en las que se señala lo siguiente: "EN ESTA COLONIA ODIAMOS A MORENA DENUNCIAREMOS AL 97 7 Dichas lonas se aportan, desde este

momento, como pruebas técnicas a esta autoridad administrativa en el apartado de pruebas.

Por todo ello, esta autoridad electoral debe considerar este tipo de propaganda como propaganda de campaña, que lleva inherente la erogación de gastos por la producción de las referidas lonas

Es preciso primeramente hacer mención respecto el video referido con anterioridad, en la fracción I del presente, mismo que incluso el mismo quejoso transcribe el contenido literal del mismo, según en los tiempos en que éste manifiesta importante realizar, es decir del minuto 8:55 al minuto 15:53, reitero como falso, aunado a que además de ser su redacción obscura, imprecisa e incierta, el quejoso omite señalar circunstancias de tiempo, modo y lugar, y sobre todo se observa la omisión en el señalamiento del nombre de la persona responsable de dicha producción, edición y difusión del video, materia de la supuesta conducta infractora que refiere, situación que genera oscuridad e incertidumbre al no establecer de manera clara y precisa quien es la persona que el quejoso refiere como responsable de la producción, edición y difusión del video referido, lo cual deja a la suscrita en total estado de indefensión para controvertir o dar respuesta al hecho que se contesta; además de obviar el hecho de que no es la denunciada la responsable de ello, impero la omisión de su precisión correspondiente, debiendo por ende de valorar esta autoridad, la ambigüedad con la que la quejosa realiza la correspondiente narrativa, siendo incluso por demás subjetiva.

De igual manera, sucede lo mismo con los supuestos mensajes de texto que refiere la quejosa, toda vez que respecto de ellos, la quejosa en la relatoria del hecho correspondiente, es omisa en cuanto a la aportación de información, para precisar que dichos mensajes son autoría o en su caso, se originan de números telefónicos de la denunciada, situación que de hecho, no lo es así, aunado además que la quejosa omite en precisar, en el caso de que así fuera, y que de hecho, no lo es, que los números telefónicos que la quejosa refiere como remitores de tales mensajes de texto, provienen de una empresa que en su caso, hubiera sido contratada por la denunciada, situación que insisto, no lo es así; aunado además de que la quejosa es omisa en la especificación de circunstancias de tiempo, modo y lugar en la relatoria del hecho correspondiente.

Así mismo, en relación a las lonas referidas por la quejosa, en las cuales incluso refiere la ubicación de las mismas, es preciso referir que la quejosa es de igual manera omisa en la especificación de circunstancias de tiempo, modo y lugar en la relatoria del hecho correspondiente.

Ahora bien, en el entendido de que dichas acciones no pertenecen a la denunciada, ni a la coalición "Va por Aguascalientes", debiendo por ende,

operar a favor de la denunciada y salvaguardarse el principio de presunción de inocencia, dado que si en el caso, no existe algún hecho que justifique o de sustento a la queja, pues los hechos resultan claramente tendenciosos, y tratan de generar un perjuicio indebido a la denunciada, por lo que desde luego debe declararse la inexistencia de violación alguna.

Por las razones que las informan, resultan aplicables al caso que nos ocupa, las siguientes jurisprudencias:

"Novena Época; Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo: II, Septiembre de 1995; Tesis: VI.20. J/26; Página: 381

ACCION. NECESIDAD DE PRECISAR LOS HECHOS EN QUE SE FUNDA. Los actores de un juicio, al ejercitar determinada acción y reclamar alguna pretensión de los demandados, están obligados a precisar los hechos en que se fundan, a fin de que tales demandados puedan preparar sus defensas y excepciones, así como aportar las pruebas consiguientes para destruir los aludidos hechos; de no proceder en los términos indicados, aun cuando en el curso del procedimiento lleguen a comprobarse hechos no expuestos en la demanda, no puede fundarse una sentencia en ellos, por no haber sido materia de la litis planteada.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo directo 22/90. Félix Salazar Bonilla. 7 de febrero de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.

Amparo directo 239/92. José Alberto López Camarillo. 26 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel, Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.

Amparo directo 532/93. Lauro Cedeño Delgado. 5 de noviembre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.

Amparo directo 625/93. Bancomer, S.A. 16 de febrero de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzuefa. Secretario: Gonzalo Carrera Molina.

Amparo directo 28 1/95. Jovita María de Lourdes Pacheco Gutiérrez. 9 de agosto de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.

Octava Época; Instancia: CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Tomo: 22-24, Octubre-Diciembre de 1989

Tesis: 1.40.C. J/8; página: 149

PRUEBA, MATERIA DE LA. SOLO LA CONSTITUYEN LOS HECHOS CONTROVERTIDOS. *Conforme al artículo 281 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, las partes deben asumir la carga de la prueba de los hechos constitutivos de sus pretensiones. El artículo 278 de tal código faculta al juzgador para valerse de cualquier medio de prueba para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos. El texto de estas disposiciones permite afirmar que la materia de prueba se encuentra constituida solamente por los hechos que aparecen contenidos en los escritos que fijan la litis. Por otra parte, el artículo 87 del propio cuerpo legal previene que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y las contestaciones. En consecuencia, si determinado hecho no fue invocado por las partes, no existe punto fáctico que probar, y aunque con las probanzas aportadas por los litigantes quedara demostrado ese hecho omitido, al no haber sido mencionado en los escritos que fijaron la litis, no es admisible tomarlo en consideración en el pronunciamiento de la sentencia, porque de hacerlo, el fallo sería incongruente y conculcatorio de la última de las disposiciones citadas.*

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 789/88. Fernando Nájera Romero y coags. 26 de febrero de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata, Secretario: Luis Arellano Hobelsberger.

Amparo directo 106/85. Banca Serfín, S.N.C. 23 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretario: Luis Arellano Hobelsberger.

Amparo directo 1914/88, Manuel Rey Ortigón. 7 de julio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Marcela Hernández Ruiz.

Amparo directo 2769/88. Danilo Ragogna Puiatti. 22 de septiembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretario: J. Refugio Ortega Marín.

*Amparo directo 1324/89. Victoria Eugenia Lozano Gutiérrez. 4 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria:
Aurora Rojas Bonilla.*

*"Partido Revolucionario Institucional
vs.*

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco Tesis XXXI/2001

OBJETO DEL PROCESO. UNA VEZ ESTABLECIDO NO ES POSIBLE MODIFICARLO POR ALGÚN MEDIO PROCESAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).- *El sistema procesal adoptado por la legislación electoral jalisciense es el de litis cerrada, el cual no permite que se varíe el objeto del proceso —que se conforma con la causa de pedir y la pretensión— una vez que se ha establecido mediante la presentación de la demanda, por lo que el derecho del actor para establecer ese objeto, precluye con el ejercicio de la acción, conclusión a la que se arriba, toda vez que el artículo 395 impone al actor la carga de formular sus pretensiones en la demanda, así como la de establecer la causa de pedir (fracción V del citado artículo), y no existe otra disposición de la que se pudiera desprender la posibilidad de adicionar el objeto del proceso por el actor, por la autoridad responsable o por las demás partes. Por otra parte, no puede servir para variar el objeto del proceso, la suplencia de los agravios deficientes contemplada en el artículo 395, fracción V, del citado código, pues dicha institución sólo conduce a perfeccionar los argumentos jurídicos deficientes, pero no a la inclusión de nuevas pretensiones o hechos. De igual forma, no se establece la posibilidad de adicionar la demanda mediante la invocación de hechos supervenientes, pues la legislación electoral jalisciense sólo establece la posibilidad de ofrecer pruebas supervenientes para acreditar que los candidatos no son de nacionalidad mexicana o no están en pleno goce de sus derechos civiles o políticos, pero no se refiere a hechos supervenientes. Tampoco puede ser Útil para alterar el objeto del proceso, el supuesto de que los nuevos hechos invocados sean hechos notorios, pues estos se rigen por el artículo 377, donde se circunscribe a eximir de prueba a los hechos que conformen previamente la litis y resulten notorios, pero no que se exime a las partes del gravamen procesal de invocarlos en el momento o etapa de fijación de la litis. Finalmente, las diligencias para mejor proveer, independientemente de que no existe regulación sobre éstas en la citada ley, por su naturaleza no resulta legalmente posible su empleo por las partes, y menos para introducir hechos nuevos a la litis, por ser poderes probatorios que corresponden exclusivamente al juzgador.*

Tercera Época:

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC010/2001. Partido Revolucionario Institucional. 26 de febrero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretaria: Mónica Cacho Maldonado.

Notas: El contenido de los artículos 377 y 395 de la Ley Electoral del Estado de Jalisco, interpretados en esta tesis, corresponde con los diversos 523 y 507, del ordenamiento vigente a la fecha de publicación de la presente Compilación.

La Sala Superior en sesión celebrada el catorce de noviembre de dos mil uno, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede.

Como cuestión previa, es importante resaltar que actualmente los procedimientos sancionadores, se cimientan en condiciones de confiabilidad y transparencia, para cerrar espacios a la impunidad y, por otro lado, garantizar a favor de los gobernados, el derecho de acceso a la justicia en la que se le respeten y tutelen los Derechos Humanos, así como todos aquellos que concurran en el proceso.

Debe considerarse que de lo manifestado por el accionante, no se desprende una vinculación de la denunciada y mi representada y la acción de la que se agravia, es decir, la naturaleza de los procedimientos sancionadores exige un comportamiento positivo y la relación causal entre la conducta y el resultado de lesión, siendo éste un elemento esencial para la debida substanciación del procedimiento, situación que no ocurre en la Queja que nos ocupa, por lo que al no acreditarse algún tipo de responsabilidad por parte de la denunciada y mi representada, se concluye que el quejoso basa sus apreciaciones de culpabilidad en meras afirmaciones sin sustento, además de no proporcionar indicios suficientes probatorios, que sustenten sus imputaciones, sirven de respaldo a lo manifestado las siguientes jurisprudencias.

"Partido Acción Nacional

vs.

*Tercera Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral
del Estado de Tamaulipas Jurisprudencia 76/2011*

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA.- Los artículos 16 y 20, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

garantizan los derechos de los gobernados, relativos a la obligación de la autoridad de fundar y motivar la causa legal del procedimiento en los actos de molestia, así como el específico para los inculpadados, de conocer los hechos de que se les acusa. En este contexto, en el procedimiento administrativo sancionador electoral se han desarrollado diversos principios, entre los cuales se encuentra el relativo a que las quejas o denuncias presentadas por los partidos políticos en contra de otros partidos o funcionarios, que puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo menos un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución. Lo anterior, porque de no considerarse así, se imposibilitaría una adecuada defensa del gobernado a quien se le atribuyen los hechos. Es decir, la función punitiva de los órganos administrativos electorales estatales debe tener un respaldo legalmente suficiente; no obstante, las amplias facultades que se les otorga a tales órganos para conocer, investigar, acusar y sancionar ilícitos.

"Partido Revolucionario Institucional

vs.

Consejo General del Instituto Federal Electoral

Tesis XVII/2005

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.- *La presunción de inocencia es Una garantía del acusado de una infracción administrativa, de la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado como inocente mientras no se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que las autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder, involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios, con elementos simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre su autoría o participación en los hechos imputados. A través de esta garantía se exige, que las autoridades sancionadoras reciban o recaben pruebas idóneas, aptas y suficientes, con respeto irrestricto de todas las formalidades y requisitos del debido proceso legal, sin afectación no autorizada de los derechos fundamentales, y mediante investigaciones exhaustivas y serias, dirigidas a conocer la verdad objetiva de los hechos denunciados y de los relacionados con ellos, respecto al objeto de la investigación, mientras no se cuente con los*

elementos con grado suficiente de convicción sobre la autoría o participación en los mismos del indiciado, para lo cual deberán realizarse todas las diligencias previsibles ordinariamente a su alcance, con atención a las reglas de la lógica y a las máximas de experiencia, dentro de la situación cultural y de aptitud media requerida para ocupar el cargo desempeñado por la autoridad investigadora, y que esto se haga a través de medios adecuados, con los cuales se agoten las posibilidades racionales de la investigación, de modo que, mientras la autoridad sancionadora no realice todas las diligencias necesarias en las condiciones descritas, el acusado se mantiene protegido por la presunción de inocencia, la cual desenvuelve su protección de manera absoluta, sin verse el indiciado en la necesidad de desplegar actividades probatorias en favor de su inocencia, más allá de la estricta negación de los hechos imputados, sin perjuicio del derecho de hacerlo; pero cuando la autoridad responsable cumple adecuadamente con sus deberes y ejerce en forma apropiada sus poderes de investigación, resulta factible superar la presunción de inocencia con la apreciación cuidadosa y exhaustiva de los indicios encontrados y su enlace debido, y determinando, en su caso, la autoría o participación del inculpado, con el material obtenido que produzca el convencimiento suficiente, el cual debe impeler al procesado a aportar los elementos de descargo con que cuente o a contribuir con la formulación de inferencias divergentes, para contrarrestar esos fuertes indicios, sin que lo anterior indique desplazar el onus probandi, correspondiente a la autoridad, y si el indiciado no lo hace, le pueden resultar indicios adversos, derivados de su silencio o actitud pasiva, porque la reacción natural y ordinaria de una persona imputada cuya situación se pone en peligro con la acumulación de pruebas incriminatorias en el curso del proceso, consiste en la adopción de una conducta activa de colaboración con la autoridad, en pro de sus intereses, encaminada a desvanecer los indicios perniciosos, con explicaciones racionales encaminadas a destruirlos o debilitarlos, o con la aportación de medios probatorios para acreditar su inocencia.

Es conveniente hacer mención primeramente que tratándose de un procedimiento sancionador en materia de fiscalización, el cual se rige predominantemente por el principio dispositivo, es evidente que desde el momento de la presentación de la queja, y de la exposición de los hechos de la misma, se impone al quejoso la carga de narrar de manera clara y precisa los hechos, así como de presentar las pruebas en la que respalde el motivo de su queja, pero dichas pruebas tienen que ser objetivas, fehacientes y material y directamente vinculadas con lo que se pretende probar sin que sea posible determinar la realización de pesquisas que están prohibidas en materia contable, fiscal y hacendaria.

En efecto, la Sala Superior ha determinado que los procedimientos administrativos sancionadores se rigen, preponderantemente por el principio dispositivo, conforme al cual el denunciante tiene la carga de ofrecer y aportar las pruebas que sustentan su denuncia.

Lo anterior, porque en el proceso dispositivo, las facultades del juez están limitadas y condicionadas al actuar de las partes, el impulso procesal está confiado principalmente a las mismas, y la litis se fija por los hechos aducidos y alegados por ellas. Asimismo, los medios de prueba se circunscriben, en gran medida, a los aportados por las mismas y la decisión del órgano judicial se debe limitar a lo alegado y probado por las partes.

Así las cosas, a diferencia del proceso inquisitorio, en el proceso dispositivo, la litis es claramente cerrada y se fija a partir de los hechos aducidos y las pruebas que acompaña el denunciante en su primer escrito, al cual, el Juez se encuentra impedido para modificar o ampliar la Litis a partir de esos elementos.

De la misma manera, la mencionada Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el SUP-REP-11/2017 determinó que la facultad investigadora consiste en que la autoridad pueda establecer por lo menos en un grado presuntivo, la existencia de una infracción y la responsabilidad del o de los sujetos denunciados para estar en condiciones de iniciar el procedimiento y emplazar a los denunciados, y que en el ejercicio de esta atribución, no se puede soslayar que corresponde al denunciante aportar datos precisos y elementos de convicción idóneos para acreditar, al menos de manera indiciaria, los hechos denunciados, y también, para estar en posibilidad de identificar a los eventuales responsables de los hechos que se aluden como ilegales⁴, situación que en el presente caso, NO SE DA.

Luego entonces, es claro que cuando se expone un hecho denunciado como violatorio a la obligación de reportarlo como gasto de campaña, esta autoridad no debe incluir hechos o argumentos diversos a los denunciados, dado que ello alteraría el sentido de especialidad del mismo y rompería con el principio dispositivo que impera en el trámite de ese tipo de procedimientos.

Es decir, en el tenor de que en materia probatoria de cualquier procedimiento especial sancionador, este se rige preponderantemente por el principio dispositivo, correspondiendo pues a las partes aportar no sólo los hechos, sino fundamentalmente las pruebas objetivas y materiales inherentes a demostrar las violaciones denunciadas en dicho procedimiento, de esta forma, si bien la autoridad goza de la facultad investigadora, ésta se sustenta, en principio, en la existencia de indicios mínimos sobre los cuales pueda ejercer dicha facultad, mismos que debieron haber sido aportados en el escrito de queja o denuncia

por parte del quejoso, con el fin de no exceder los límites de proporcionalidad, idoneidad y mínima intervención a que se refiere el marco legal respectivo.

Lo anterior, porque como se precisó, se parte de la base de que la finalidad de la facultad investigadora consiste en que la autoridad pueda establecer, por lo menos en un grado presuntivo, la existencia de una infracción y la responsabilidad del sujeto denunciado, la suscrita en el presente asunto, para estar en condiciones de iniciar el procedimiento y realizar el emplazamiento, y por tanto el ejercicio de esta atribución no puede soslayar que correspondería al denunciante aportar datos precisos y elementos de convicción idóneos para acreditar, al menos de manera indiciaria, los hechos denunciados, así como para estar en posibilidad de identificar al eventual responsable de los hechos que se dicen infractores de la norma.

Luego entonces, en tal contexto, cabe hacer mención que, tanto en el derecho administrativo sancionador, como en el presente procedimiento, son aplicables plenamente los principios del derecho punitivo:

- 1. Nadie puede ser privado de su libertad, o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante autoridad competente, en el que se satisfagan a favor del indiciado los derechos humanos de audiencia y de defensa, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho imputado.*
- 2. En los juicios de naturaleza punitiva, está prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito o infracción de que se trate.*
- 3. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento por escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.*
- 4. Para sancionar al acusado como responsable de una infracción penal o administrativa, es indispensable que se acrediten plenamente los elementos constitutivos del cuerpo del delito o de la infracción y la responsabilidad del imputado, ello además atendiendo al Principio de Conservación de los Actos válidamente celebrados.*
- 5. En caso de duda, debe estarse siempre a lo más favorable al inculpado y constituye un derecho del encausado que se reconozca en su favor la vigencia del principio de presunción de inocencia, ya que, para declarar la existencia de una violación a la normatividad electoral, se requiere de pruebas tanto objetivas como materiales que demuestren las violaciones alegadas.*

En el caso que nos ocupa, el examen de los hechos y de las constancias que integran el escrito de queja, permite concluir que, a partir del hecho denunciado, no existe base jurídica ni racional para imputar responsabilidad alguna en la comisión de la infracción electoral que pretende hacer valer el denunciante por la supuesta omisión de reporte de gastos de campaña, incluso no existe sustento fáctico ni probatorio para tener demostrados, con plenitud y en todos sus términos, el hecho que ahora se da contestación, y que de modo alguno contiene alguna imputación de la comisión de alguna violación a la ley por la suscrita, y las supuestas consideraciones de derecho que expone, encontrándose completamente viciadas de irregularidades, siendo la propia narración del correlativo que ahora nos ocupa, una prueba plena en contra de los intereses de la quejosa, ya que no hace una imputación y el quejoso no prueba nada contra la denunciada, mi representada.

En efecto, lo señalado con relación a la supuesta omisión de reporte de gasto de campaña, solo se trata de suposiciones del quejoso, que no se encuentran adminiculados con prueba alguna, ya que en el hecho que se contesta, no refiere en un primer momento si quiera la participación y o relación de la denunciada con dicho video y su publicación, mucho menos se puede observar fehacientemente el beneficio directo que la quejosa refiere para con la suscrita, o en su caso de los mensajes de texto de referencia,, así como tampoco de las supuestas lonas referidas por la quejosa, mucho menos hace señalamiento de circunstancias de tiempo, modo y lugar, por virtud de las cuales, pudiera ser la suscrita la responsable de lo por la quejosa denunciado.

Ahora bien, es preciso referir, en cuanto al video referido por la denunciante y quejosa, que dicho video publicado en la red social YouTube, cumple a cabalidad con el carácter de ser meramente informativo, coligiéndose que no existe contrato o solicitud expresa alguna de parte de la suscrita, con la finalidad de la respectiva creación y en su caso, difusión del video de referencia; así las cosas, debe colegirse que dicha publicación, lo es al amparo de la libertad de expresión y derecho a la información, cuya transmisión, o publicación, tiene como finalidad la de informar a la población respecto de determinado asunto de interés público, sin que exista la necesidad siquiera de una contratación o acto jurídico que formalice la creación y difusión de dicha publicación.

Ahora bien, la quejosa, en su escrito de denuncia, en ningún momento advierte elementos que permitan sostener que la publicación y/o información difundida hubiera sido una adquisición de propaganda cualquiera, siendo que el quejoso tiene la carga de probar su dicho de conformidad con la jurisprudencia 72/2010 emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.

En tal sentido, el artículo 29 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, dispone que toda queja deberá ser presentada describiendo las circunstancias de modo, tiempo y lugar que enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados, aunado que se deberán aportar los elementos de prueba, aún con carácter indiciario, con lo que el quejoso cuente y soporte su aseveración, así como hacer mención de aquellas pruebas que no estén a su alcance, que se encuentren en poder de cualquier autoridad, lo que en el presente asunto, no sucede así, peligrando pues el correcto actuar de la autoridad administrativa electoral, además de imposibilitar una adecuada defensa de la suscrita a quien se le atribuyen los hechos, como se señala en la Jurisprudencia 76/201 1 del máximo tribunal de la materia, CUYO rubro es PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA.

Así las cosas, de las constancias que obran en el escrito inicial de queja que ahora se da contestación, no se advierte siquiera elementos indiciarios que den lugar a una posible contratación o adquisición de los servicios para la realización, edición, y publicación del video denunciado por parte de quien suscribe; por lo que esta autoridad electoral debiera considerar que la publicación de dicho video, se encuentra tutelado por la presunción de licitud de la que goza la labor periodística, la cual solo puede ser superada cuando exista prueba en contrario, lo cual encuentra sustento en la Jurisprudencia 15/20 18, de rubro PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA⁷, en la que se establece que la libertad de expresión, incluida la de prensa, implica la inviolabilidad de difundir opiniones que la libertad de expresión, incluida la de prensa, en principio, implica la inviolabilidad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio; por ello, la labor periodística goza de un manto jurídico protector al constituir el eje central de la circulación de ideas e información pública. En ese sentido, la presunción de licitud de la que goza dicha labor solo pudiera estar superada cuando exista prueba en contrario, y ante la duda, la autoridad electoral debiera optar por aquella interpretación de la norma que sea más favorable a la protección de la labor periodística, siendo evidentemente el caso que ahora nos ocupa.

Ahora bien, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el SUP-REP-224/2018 Y SUP-REP-130/2019, determinó que la admisión de un procedimiento especial sancionador, solo estará justificada en caso de que, del análisis preliminar de los hechos denunciados, existan suficientes elementos para avanzar la indagación sobre la legalidad o ilegalidad de los actos supuestamente realizados por el

denunciado, es este caso, por la suscrita, es decir, solo en ese caso, la autoridad competente deberá, en un pronunciamiento de fondo, valorar de forma minuciosa y exhaustiva las pruebas recabadas, con la finalidad de estar en condiciones de determinar si se acredita la infracción denunciada y la responsabilidad de los sujetos y, en su caso, la propia autoridad competente, fijar la sanción correspondiente; así las cosas, en el presente asunto, no se advierten elementos de una posible contratación o en su caso, siquiera beneficio directo o indirecto, para con la suscrita, por la realización, producción, edición y publicación del video de referencia, por lo que esta autoridad debiera concluir la no existencia de una violación en materia electoral por parte de la suscrita, ni por partido político alguno, toda vez que dicha videograbación y su correspondiente, publicación, puede colegirse meramente como una tarea propia del medio de comunicación, satisfaciendo el derecho fundamental a la información, del cual goza la ciudadanía, particularmente cuando de la misma se deriva y en buena medida depende, la formación de la opinión pública, y, consecuentemente, sustenta la emisión de un voto libre e informado, en un proceso electoral como el que se encuentra en curso.

Por lo anterior, toda vez que de las pruebas aportadas por la quejosa, en su escrito inicial y de lo que éste alega, no se advierte que existan pues elementos indiciarios de una posible contratación para la producción, publicación, edición, y en su caso publicación del video de referencia, por parte de la suscrita, por lo que incluso no debiera éste considerarse como un acto de campaña de la suscrita, mucho menos como propaganda electoral de la suscrita, consecuentemente, no tendría pues la obligación de emitir el informe respectivo en relación a los gastos de campaña, tal y como lo denuncia la parte quejosa.

En este orden de idea, constituye uno de los pilares fundamentales el principio de contradicción y la garantía de transparencia y publicidad en cada una de las etapas procesales, a fin de lograr una confiabilidad y legitimación en el sistema, dado que el derecho al debido proceso se encuentra regulado en el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conjuntamente con el de exacta aplicación de la ley en materia de sanción, mismos que constituyen los pilares de esta materia.

De igual forma, al estar obligado a probar sus aseveraciones, es por lo que en todo momento opera en su contra la carga probatoria, lo anterior con relación al principio de presunción de inocencia.

Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpretó el principio de contradicción en los siguientes términos:

*“Época: Décima Época
Registro: 160184*

*Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro VI, Marzo de 2012, Tomo I
Materia(s): Penal
Tesis: Ia. CCXLIX/201 1 (9a.)
Página: 292*

SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. SE SUSTENTA EN EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN. *Del primer párrafo del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se advierte que el sistema procesal penal acusatorio y oral se sustenta en el principio de contradicción que contiene, en favor de las partes, el derecho a tener acceso directo a todos los datos que obran en el legajo o carpeta de la investigación llevada por el Ministerio Público (exceptuando los expresamente establecidos en la ley) y a los ofrecidos por el imputado y su defensor para controvertirlos; participar en la audiencia pública en que se incorporen y desahoguen, presentando, en su caso, versiones opuestas e interpretaciones de los resultados de dichas diligencias; y, controvertirlos, o bien, hacer las aclaraciones que estimen pertinentes, de manera que tanto el Ministerio Público como el imputado y su defensor, puedan participar activamente inclusive en el examen directo de las demás partes intervinientes en el proceso tales como peritos o testigos. Por ello, la presentación de los argumentos y contraargumentos de las partes procesales y de los datos en que sustenten sus respectivas teorías del caso (vinculación o no del imputado a proceso), debe ser inmediata, es decir, en la propia audiencia, a fin de someterlos al análisis directo de su contraparte, con el objeto de realzar y sostener el choque adversarial de las pruebas y tener la misma oportunidad de persuadir al juzgador; de tal suerte que ninguno de ellos tendrá mayores prerrogativas en su desahogo.*

Contradicción de tesis 4 72/2010. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito. 6 de julio de 2011. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Beatriz J. Jaimes Ramos."

Por lo que no obstante que en el presente procedimiento se pueden realizar investigaciones de los hechos, no menos es cierto es que la prueba constituye un elemento necesario para convencer sobre los hechos planteados, en otras palabras, en cualquier juicio, una idea denota la necesidad ineludible de

demostración, verificación o investigación cierta y exhaustiva, de aquello que se ha afirmado en el proceso, en realidad se trata de un elemento o dato racional, y objetivo, idóneo para acreditar la existencia o no de una conducta sancionable, así como para demostrar o no la responsabilidad de alguna persona.

CONTESTACIÓN AL CAPITULO DE LAS PRUEBAS

Se objetan de manera general las pruebas marcadas con los numerales 2., y 3. en cuanto a su valor y alcance probatorio, toda vez que ninguna es tendiente a probar lo que se ha fijado en la litis, sino que busca probar la existencia de la propaganda referida, careciendo de sentido el que dichas pruebas se tomen en consideración dentro del presente procedimiento.

Por último señalo que los medio de prueba ofertados por el quejoso en su conjunto, resultan ineficaces e inconducentes para acreditar los extremos de su acción, ya que omite señalar hechos, solo realiza meras afirmaciones sin sustento, y sin precisar circunstancias de tiempo, modo y lugar, además de no existir elementos legales probatorios que implique a la denunciada, mi representada, en los actos de los que se duele, por lo que debe desestimarse la presente queja, resultando aplicable al caso que nos ocupa la siguiente jurisprudencia:

“Partido de la Revolución Democrática y otros

vs.

Consejo General del Instituto Federal Electoral

Jurisprudencia 72/2010

CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.-

De la interpretación de los artículos 47/ base III, apartado D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 367 a 369 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que, en el procedimiento especial sancionador, mediante el cual la autoridad administrativa electoral conoce de las infracciones a la obligación de abstenerse de emplear en la propaganda política o electoral que se difunda en radio y televisión, expresiones que denigren a las instituciones, partidos políticos o calumnien a los ciudadanos, la carga de la prueba corresponde al quejoso, ya que es su deber aportarlas desde la presentación de la denuncia, así como identificar aquellas que habrán de requerirse cuando no haya tenido posibilidad de recabarlas; esto con independencia de la facultad investigadora de la autoridad electoral.”

(...)

Elementos probatorios aportados por el partido:

PRUEBAS:

1. PRESUNCIONAL.- *en su doble aspecto de legal y humana, en todo aquello que se beneficie a la parte que representó en el procedimiento instaurado, y que se desprenda de las consecuencias lógicas o disposiciones jurídicas electorales aplicables al caso concreto, y que demuestren la improcedencia de los hechos de la denuncia instaurada y supuestos preceptos violados.*

2. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- *Consistente en todo lo actuado y lo que se siga actuando en lo que favorezca a los intereses de mi representada, y que demuestren la improcedencia de la queja instaurada en contra de mi representada.*

Todas y cada una de las pruebas presuncional es e instrumental de actuaciones ofrecidas en este capítulo guardan relación con todos y cada uno de los hechos controvertidos y de los cuales se desprende que no existe cometida violación a la violación a la ley alguna por parte de mi representada.

(...)”

XX. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al Partido Revolucionario Institucional.

a) El veintiséis de junio de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/14614/2022 se notificó el inicio del procedimiento y emplazó al Partido Revolucionario Institucional corriéndole traslado con la totalidad de elementos que integran el escrito de queja. (Fojas 355 a 367 del expediente).

b) El treinta de junio de dos mil veintidós, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el escrito signado por el representante suplente del Partido Revolucionario Institucional por el que da contestación al emplazamiento, en el tenor siguiente: (Fojas 650 a 658 del expediente).

“En virtud de lo anterior, se realizan las siguientes manifestaciones:

ALEGATOS

Por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 35, numeral I del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de

Fiscalización, comparezco con la finalidad de manifestar lo que en derecho de esta representación conviene.

PRIMERA. - REPORTE DE GASTOS POR PARTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. El suscrito se reserva sobre su mención por no tratarse de actos atribuidos exclusivamente al PRI dentro del escrito de queja, toda la documentación e integración de la información referente a los gastos de la campaña de la candidata a Gobernadora postulada por la coalición "Va Por Aguascalientes" conformada por el Partido Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, se encuentra bajo resguardo y responsabilidad del Partido Acción Nacional, tal como se estableció en las cláusulas NOVENA del convenio firmado por los tres institutos políticos.

"NOVENA.- Que de conformidad con el artículo 276, numeral 3, inciso m) del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, para la administración V reporte de los gastos de campaña en los informes correspondientes, las partes acuerdan conformar un Consejo de Administración integrado por las personas responsables de finanzas de cada partido que participa en la coalición y será presidido dirigido por la persona responsable de finanzas del Partido Acción Nacional."

Énfasis añadido

En razón de lo anterior, este instituto político confirma la respuesta que presente el Partido Acción Nacional y la otrora candidata a la gubernatura la C. María Teresa Jiménez Esquivel, postulada por la coalición "Va Por Aguascalientes" (PAN-PRI-PRD). Quienes fueron los encargados del reporte de las agendas de eventos y reporte de gastos correspondientes.

SEGUNDO. IMPROCEDENCIA DE FISCALIZACIÓN DE RECURSOS.

*El denunciante pretende confundir a esa H. Autoridad atribuyendo al Partido Revolucionario Institucional y la C. María Teresa Jiménez Esquivel una supuesta omisión de reporte de ingresos y gastos de campaña; siendo esto **IMPROCEDENTE**, se hace del conocimiento de esta autoridad, la coalición no realizó gastos en los bienes y servicios denunciados correspondiente a:*

- Video publicado el pasado 20 de mayo del presente año, en la red social YouTube, a través del medio de comunicación "LATINUS", denominado "Loret Capítulo 83" "Hoy, los audios de funcionarios del gobierno federal que revelan el uso de programas sociales en la compra de votos para Morena..."*
- mensajes provenientes de los números 43885, 56836 y 59895.*

- Lonas con la siguiente leyenda: "EN ESTA COLONIA ODIAMOS A MORENA DENUNCIAREMOS AL 911"

*Es importante señalar, que esta Autoridad Electoral, debe ceñirse estrictamente al Principio de Legalidad establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y al no existir elementos que acrediten que el PRI, la C. María Teresa Jiménez Esquivel y/o la coalición "Va Por Aguascalientes" (PAN-PRI-PRD) omitieron reportar ingresos y gastos debe declarar como **IMPROCEDENTE LA ACTUALIZACIÓN DE UNA OMISIÓN DEL PRI EN EL SUPUESTO REPORTE DE GASTOS DE CAMPAÑA.***

*Se reitera a ésta Autoridad, que solamente se debe avocar a la aplicación de la norma, y al no existir elementos o indicios que determinen que el PRI, la C. María Teresa Jiménez Esquivel y/o la coalición "Va Por Aguascalientes" (PAN-PRI-PRD), conforme una rigurosa aplicación del Principio de Legalidad, debe decretar una **IMPROCEDENCIA DE LA OMISIÓN IMPUTADA AL PRI**, y es oportuno señalar las atribuciones de ésta Autoridad, no son actuar bajo suposiciones de un partido político, las obligaciones de ésta Autoridad está en aplicar debidamente la ley, es decir, aplicando en todo momento el Principio de Legalidad.*

Sobre lo anterior, respecto a una aplicación conforme al Principio de Legalidad, sirve de criterio y sustento a lo anteriormente expuesto, lo establecido en la Jurisprudencia 7/2005, que a continuación se expone:

**RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.
PRINCIPIOS JURÍDICOS APLICABLES.-**

Tratándose del incumplimiento de un deber jurídico, en tanto presupuesto normativo, y la sanción, entendida como consecuencia jurídica, es necesario subrayar que por llevar implícito el ejercicio del poder correctivo o sancionador del Estado (ius puniendi), incluido todo organismo público (tanto centralizado como descentralizado y, en el caso específico del Instituto Federal Electoral, autónomo) debe atenderse a los principios jurídicos que prevalecen cuando se pretende restringir, limitar, suspender o privar de cierto derecho a algún sujeto, para el efecto de evitar la supresión total de la esfera de derechos políticos de los ciudadanos o sus organizaciones políticas con la consecuente transgresión de los principios constitucionales de legalidad y certeza, máxime cuando se reconoce que ese poder punitivo estatal está puntualmente limitado por el aludido principio de legalidad. Así, el referido principio constitucional de legalidad electoral en cuestiones relacionadas con el operador jurídico: La ley señalará las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de ... (dichas) disposiciones (artículo 41, párrafo segundo, fracción II, último párrafo, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos), es la expresión del principio general del derecho nullum crimen, nulla poena sine lege praevia, scripta et stricta, aplicable al presente caso en términos de los artículos 3, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, lo cual implica que en el régimen administrativo sancionador electoral existe: a) Un principio de reserva legal (lo no prohibido está permitido), así como el carácter limitado y exclusivo de sus disposiciones, esto es, sólo las normas jurídicas legislativas determinan la causa de incumplimiento o falta, en suma, el presupuesto de la sanción; b) El supuesto normativo y la sanción deben estar determinados legislativamente en forma previa a la comisión del hecho; c) La norma jurídica que prevea una falta o sanción debe estar expresada en una forma escrita (abstracta, general e impersonal), a efecto de que los destinatarios (tanto ciudadanos, como partidos políticos, agrupaciones políticas y autoridades administrativas y jurisdiccionales, en materia electoral) conozcan cuáles son las conductas ordenadas o prohibidas, así como las consecuencias jurídicas que provoca su inobservancia, lo cual da vigencia a los principios constitucionales de certeza y objetividad (en este caso, como en el de lo expuesto en el inciso anterior, se está en presencia de la llamada garantía de tipicidad) y, d) Las normas requieren una interpretación y aplicación estricta (odiosa sunt restringenda), porque mínimo debe ser el ejercicio de ese poder correctivo estatal, siempre acotado y muy limitado, por cuanto que los requisitos para su puesta en marcha deben ser estrechos o restrictivos.

Está autoridad comprobará que la queja interpuesta por el partido político Morena no puede alcanzar materialmente su propósito fundamental, y contrario a ello podrá concluir que los gastos fueron debidamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización.

TERCERO. INEFICACIA PROBATORIA POR NO ESTAR RELACIONADAS CON EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA C. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL Y LA COALICIÓN "VA POR AGUASCALIENTES" (PAN-PRI-PRD)

El denunciante pretende vincular las conductas y omisiones hacia el PRI, a la C. María Teresa Jiménez Esquivel y/o la coalición "Va Por Aguascalientes" (PAN-PRI-PRD) con la links de internet, videos, fotografías de capturas de pantallas de teléfonos celulares donde se observan los mensajes de texto y fotografías de lonas con la leyenda "EN ESTA COLONIA ODIAMOS A MORENA DENUNCIAREMOS AL 911"; sin embargo, éstas no guardan relación alguna con la supuesta intención de persuadir a los votantes por parte del PRI, no acreditan las circunstancias de tiempo, modo y lugar, se basa solo

en suposiciones sin entregar otro elemento de prueba que vinculen a mi representado, y de esa probanza ofrecida no hay elemento que represente un indicio de que el PRI, la C. María Teresa Jiménez Esquivel y/o la coalición "Va Por Aguascalientes" (PAN-PRI-PRD) realizaron dichas acciones.

Al respecto resulta aplicable la siguiente Jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:

Jurisprudencia 4/2014

PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR sí SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, ***dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar.***

Ahora bien, respecto del video denominado "Loret Capítulo 83" "Hoy, los audios de funcionarios del gobierno federal que revelan el uso de programas sociales en la compra de votos para Morena aplican el voto razonado del Magistrado Felipe De La Mata Pizaña en la sentencia SUP-RAP-6/2019.

"(...)

1.3 Marco jurídico constitucional y convencional.

La libertad de expresión es un pilar de la democracia. Es un derecho humano consagrado en el artículo 60 de la Constitución, en los artículos 19, párrafos 2 y 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Tratados que, conforme a/ artículo 133 Constitucional, son Ley Suprema de toda la Unión junto con la Constitución.

Dentro del género de la libertad de expresión, se encuentra la libertad de prensa, consagrada en el artículo 70 de la Constitución, que dispone esencialmente que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio.

No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.

Asimismo, establece que ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 60 de la Constitución (ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público).

Junto a estas disposiciones, encontramos el derecho a la información. En el mismo artículo 60 Constitucional, se dispone que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

(...)”

*Por ello, al no existir medios de convicción que prueben las supuestas conductas y omisiones narradas por Morena y que pretende imputar al PRI, la C. María Teresa Jiménez Esquivel y/o la coalición "Va Por Aguascalientes" (PAN-PRI-PRD) ésta Autoridad Electoral, debe declarar la **IMPROCEDENCIA POR INEXISTENCIA DE CONDUCTAS Y OMISIONES atribuidas a los denunciados**, ya que no hay probanzas que acrediten la existencia de una actuación violatoria a la normatividad electoral mediante una omisión de reporte de ingresos y gastos de campaña.*

Elementos probatorios aportados por el partido:

PRUEBAS

I. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en todo lo que favorezca a mi representado.

II. PRESUNCIONAL en su doble aspecto, legal y humana, en todo lo que favorezca a mi representado.”

XXI. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al Partido de la Revolución Democrática.

a) El veintisiete de junio de dos mil veintidós mediante oficio INE/UTF/DRN/14613/2022 se notificó el inicio del procedimiento de mérito y emplazó al Partido de la Revolución Democrática corriéndole traslado con la totalidad de elementos que integran el escrito de queja. (Fojas 368 a 380 del expediente).

b) El treinta de junio de dos mil veintidós, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el escrito signado por el representante del Partido de la Revolución Democrática por el que da contestación al emplazamiento, en el tenor siguiente: (Fojas 630 a 649 del expediente).

“De la lectura al escrito de queja en estudio, se desprende que, se acusa a la C. María Teresa Jiménez, candidata a la Gubernatura del estado de Aguascalientes, postulado por la Coalición "VA POR AGUASCALIENTES" integrada por los partidos políticos nacionales Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, así como a dichos institutos políticos, de:

- ❖ ***La presunta omisión de reportar gastos de campaña, derivados de propaganda mediante mensajes de texto SMS y lonas en contra de la C. Nora Ruvalcaba Gámez, candidata a la Gubernatura del estado de Aguascalientes por el partido político MORENA, conllevan un llamado implícito a no votar en favor de MORENA***

*Respecto de dichas imputaciones, **además de ser completamente falsas**, no debe pasar por desapercibido de esa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral que, lo manifestado por el denunciante en su escrito de queja, es completamente oscuro, impreciso y por demás infundado, dado que las acusaciones vertidas a todas luces son genéricas, vagas e imprecisas, puesto que no se encuentra ubicada en modo, tiempo, lugar y circunstancias, **características esenciales de procedencia que no se encuentran satisfechas en el escrito de queja que se contesta**, en virtud de que, la parte actora, de manera subjetiva, se concreta a acusar a la C. María Teresa Jiménez, candidata a la Gubernatura del estado de Aguascalientes, postulado por la Coalición "VA POR AGUASCALIENTES" integrada por los partidos políticos nacionales Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, así como a dichos institutos políticos, de ser los responsables de los gastos derivados de propaganda mediante mensajes de texto SMS y lonas*

en contra de la C. Nora Ruvalcaba Gámez, candidata a la Gubernatura del estado de Aguascalientes por el partido político MORENA, conllevan un llamado implícito a no votar en favor de MORENA.

Bajo este sustento, es pertinente que esa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, tenga presente el criterio sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las siguientes jurisprudencias:

*Partido Revolucionario Institucional
vs,
Consejo General del Instituto Federal Electoral*

Jurisprudencia 67/2002

QUEJAS SOBRE EL ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DERIVADOS DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS. REQUISITOS DE ADMISIÓN DE LA DENUNCIA.- Los artículos 4.1 y 6.2 del Reglamento que Establece los Lineamientos Aplicables en la Integración de los Expedientes y la Sustanciación del Procedimiento para la Atención de las Quejas sobre el Origen y aplicación de los Recursos Derivados del Financiamiento de los Partidos y Agrupaciones Políticas, establece como requisitos para iniciar los primeros trámites, con motivo de la presentación de una queja, que: 1, Los hechos afirmados en la denuncia configuren, en abstracto uno o varios ilícitos sancionables a través de este procedimiento; 2. **Contenga las circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la versión de los hechos, esto es, que se proporcionen los elementos indispensables para establecer la posibilidad de que los hechos denunciados hayan ocurrido, tomando en consideración el modo ordinario en que suela dotarse de factibilidad a los hechos y cosas en el medio sociocultural, espacial y temporal que corresponda a los escenarios en que se ubique la narración,** y 3. Se aporten elementos de prueba suficientes para extraer indicios sobre [a credibilidad de los hechos materia de la queja, **El objeto esencial de este conjunto de exigencias consiste en garantizar la gravedad y seriedad de los motivos de la queja, como elementos necesarios para justificar que la autoridad entre en acción y realice las primeras investigaciones, así como la posible afectación a terceros, al proceder a la recabación de los elementos necesarios para la satisfacción de su cometido.** Con el primero, se satisface el mandato de tipificación de la conducta denunciada, para evitar la prosecución inútil de procedimientos administrativos carentes de sentido, respecto de hechos que de antemano se advierta que no son sancionables. Con el segundo, **se tiende a que**

los hechos narrados tengan la apariencia de ser verdaderos o creíbles, de acuerdo a la forma natural de ser de las cosas, al no encontrarse caracteres de falsedad o irrealidad dentro del relato, pues no encuentra justificación racional poner en obra a una autoridad, para averiguar hechos carentes de verosimilitud dentro de cierta realidad en la conciencia general de los miembros de la sociedad. De modo que cuando se denuncien hechos que por sí mismos no satisfagan esta característica, se deben respaldar con ciertos elementos probatorios que el denunciante haya podido tener a su alcance de acuerdo a las circunstancias, que auxilien a vencer la tendencia de su falta de credibilidad. El tercer requisito fortalece a los anteriores, al sumar a la tipificación y a la verosimilitud ciertos principios de prueba que, en conjunción con otros, sean susceptibles de alcanzar el grado de probabilidad necesario para transitar a la segunda fase, que es propiamente la del procedimiento administrativo sancionador electoral. Estos requisitos tienen por finalidad evitar que la investigación, desde su origen, resulte en una pesquisa general injustificada, prohibida por la Constitución de la República.

Tercera Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-050/2001. Partido Revolucionario Institucional. 7 de mayo de 2002.

Unanimidad de votos.

Recurso de apelación. SUP-RAP-054/2001, Partido de la Revolución Democrática. 7 de mayo de 2002 Unanimidad de votos.

Recurso de apelación, SUP-RAP-011/2002. Partido de la Revolución Democrática, 11 de junio de 2002.

Unanimidad de votos.

Notas: El contenido de los artículos 4.1 y 6.2 del Reglamento que establece los lineamientos aplicables en la integración de [os expedientes y la sustanciación del procedimiento para la atención de las quejas sobre el origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas, los cuales se interpretan en esta jurisprudencia, corresponde respectivamente, con los artículos 17, párrafo 1, inciso c) y 20.2, del Reglamento de Procedimientos en Materia de

Fiscalización vigente, La Sala Superior en sesión celebrada el cuatro de noviembre de dos mil dos, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 60 a 62.

Partido Acción Nacional

vs

Tercera Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral del Estado de

Tamaulipas
Jurisprudencia 16/2011

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA. Los artículos 16 y 20, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantizan los derechos de los gobernados, relativos a la obligación de la autoridad de fundar y motivar la causa legal del procedimiento en los actos de molestia, así como el específico para los inculpadados, de conocer los hechos de que se les acusa. En este contexto, **en el procedimiento administrativo sancionador electoral se han desarrollado diversos principios, entre los cuales se encuentra el relativo a que las quejas o denuncias presentadas por los partidos políticos en contra de otros partidos o funcionarios, que puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo menos un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución.** Lo anterior, porque de no considerarse aso' se imposibilitaría una adecuada defensa del gobernado a quien se le atribuyen los hechos. Es decir, la función punitiva de [os órganos administrativos electorales estatales, debe tener un respaldo legalmente suficiente; no obstante, las amplias facultades que se les otorga a tales órganos para conocer, investigar, acusar y sancionar ilícitos.

Cuarta Época:

Juicio de revisión constitucional electoral,

Partido Acción Nacional—Autoridad responsable: Tercera Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Tamaulipas.—10 de octubre de 2007.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretarla: Claudia Pastor Badila,

Recurso de apelación. SUP-RAP-142I2008.—Actor: Partido de la Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—10 de septiembre de 2008.—Unanimidad de seis votos,—Ponente: Manuel González Oropeza,—Secretario: David Cienfuegos Salgado. Juicio para [a protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-502I2009.—Actor: Sergio Iván García Badillo.— Autoridad responsable: Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí.—3 de

julio de 2009.— Unanimidad de votos,—Ponente: Constancio Carrasco Daza. —Secretario: Fabricio Fabio Villegas Estudillo.

Notas: El contenido del artículo 20, apartado fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado en esta jurisprudencia corresponde con el artículo 20, apartado B fracción III vigente.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el diecinueve de octubre de dos mil once, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria, Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 4, Número 9, 2011, páginas 31 y 32.

Rodolfo Vitela Melgar y otros

vs

Tribunal Electoral del Distrito Federal

Jurisprudencia 36/2014

PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR.- El artículo 31, párrafo segundo, de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal define como pruebas técnicas, cualquier medio de reproducción de imágenes y, en general todos aquellos elementos científicos, y **establece la carga para el aportante de señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a personas, lugares, así como las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba, esto es, realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba técnica**, a fin de que el tribunal resolutor esté en condiciones de vincular la citada prueba con los hechos por acreditar en el juicio, con la finalidad de fijar el valor convictivo que corresponda. De esta forma, **las pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes, como sucede con las grabaciones de video, la descripción que presente el oferente debe guardar relación con los hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se pretenden probar**. Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar son actos específicos imputados a una persona, **se describirá la conducta asumida contenida en las imágenes; en cambio, cuando los hechos a acreditar se atribuyan a un número indeterminado de personas, se deberá ponderar racionalmente la exigencia de la identificación individual atendiendo al número de involucrados en relación al hecho que se pretende acreditar**.

Quinta Época:

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, SUP-JDC-377/2008.—Actores: Rodolfo Vitela Melgar y otros.— Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Distrito Federal,—II

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/159/2022/AGS

de junio de 2008.—Unanimidad de cinco votos,—Ponente: Pedro Esteban Penagos López,—Secretarios: Sergio Arturo Guerrero Olvera y Andrés Carlos Vázquez Murillo. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, SUP-JDC-604/2012.—Actores: Evaristo Hernández Cruz y otros.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de abril de 2012.—Unanimidad de cuatro votos. —Ponente: Flavio Galván Rivera.—Secretario: Pedro Bautista Martínez.

Recurso de reconsideración, SUP-REC-890/2014,—Recurrentes: Habacuq Iván Sumano Alonso y otros.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz.— 1 0 de septiembre de 2014.—Unanimidad de votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—Secretarios: Carlos Ortiz Martínez y Javier Aldana Gómez.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintinueve de septiembre de dos mil catorce, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 59 y 60.

Bajo estas premisas, en el asunto que nos ocupa, los hechos denunciados a todas luces devienen a ser infundados dado que no se encuentran soportados en medios de prueba idóneos para acreditar los extremos de la acusación, además de que la narrativa vertida por [a parte quejosa, en todo momento son vagos, imprecisos y genéricos, puesto que no se expresan de manera clara y precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la versión de los hechos denunciados, premisas necesarias que proporcionan los elementos indispensables para establecer la posibilidad de que los actos que se denuncian, efectivamente hayan ocurrido, puesto que son el objeto esencial y principal de un conjunto de exigencias para garantizar la gravedad y seriedad de los motivos de la queja, del inicio del procedimiento sancionador en que se actúa, y primordiales para justificar que la autoridad entre en acción y realice las primeras investigaciones, así como la posible afectación a terceros, al proceder a recabar los elementos necesarios para la satisfacción de su cometido.

*Esto es así en virtud de que, **LAS ACUSACIONES MATERIAS DE INVESTIGACIÓN** consistentes en la supuesta propaganda mediante mensajes de texto SMS y lonas en contra de la C. Nora Ruvalcaba Gámez, candidata a la Gubernatura del estado de Aguascalientes por el partido político MORENA,*

conlleven un llamado implícito a no votar en favor de MORENA, **SON COMPLETAMENTE FALSAS**, por los siguientes motivos:

- ❖ *la C. María Teresa Jiménez, candidata a la Gubernatura del estado de Aguascalientes, postulado por la Coalición "VA POR AGUASCALIENTES" integrada por los partidos políticos nacionales Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, no ordenó la contratación; en consecuencia, **no ordenó la difusión de la propaganda que se denuncia ni la colocación de la misma.** Siendo importante destacar que, no existe prueba idónea que acredite lo contrario.*
- ❖ *Los partidos políticos nacionales Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, Integrantes de la Coalición "VA POR AGUASCALIENTES", **no ordenaron la contratación; en consecuencia, no ordenaron la difusión de la propaganda que se denuncia ni la colocación de la misma.** Siendo importante destacar que, no existe prueba idónea que acredite lo contrario.*

Bajo estas circunstancias, NINGUNA DE LAS IMPUTACIONES, SE ENCUENTRAN SOPORTADAS CON ALGÚN MEDIO DE PRUEBA IDÓNEO, que al ser analizadas conforme a las reglas generales de la valoración de las pruebas, la experiencia Y la sana crítica, **PUEBAN GENERAR ALGÚN TIPO DE CONVICCIÓN, CUANDO MENOS INDICIARA, QUE PUDIERA PRESUMIRSE LA VERACIDAD DE LOS HECHOS IMPUTADOS.**

Amén de lo anterior, en el supuesto no concedido de que se las pláticas sostenidas en la paquetería de la mensajería privada "SMS", fuese cierta, en primer lugar, dichos mensajes, no fueron emitidos por los denunciados, también, los denunciados nunca y en ningún momento ordenó que se emitieran, y por ende, en segundo lugar, se niega categórica y expresamente que los denunciados hayan erogado algún gasto para la propaganda denunciada, situación que en todo momento debe tener en cuenta esa Unidad Técnica de Fiscalización al estudiar el fondo del presente asunto, pues, son unos elementos suficientes para determinar cómo infundado el presente procedimiento sancionador, amén de que, no existe algún elemento de prueba idóneo que acredite lo contrario.

De esta forma, al analizar el caudal probatorio que integra el expediente en que se actúa, conforme a las reglas generales de la valoración de las pruebas, la experiencia y la sana crítica, es dable que se arribe a la conclusión de que el presente procedimiento sancionador en materia de fiscalización es infundado, dado que no existe prueba idónea con la que se acredite algún grado de responsabilidad de la C. María Teresa Jiménez, candidata a la Gubernatura del

estado de Aguascalientes, postulado por la Coalición POR AGUASCALIENTES" integrada por los partidos políticos nacionales Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, ni de dichos institutos políticos en los hechos que de denuncia en el asunto que nos ocupa, mismos que, por cierto, se reitera, no se encuentra ubicada en modo, tiempo, lugar y circunstancias, características esenciales de procedencia que no fueron desahogadas satisfactoriamente en los diversos escrito de contestación a de las prevenciones efectuadas por esa autoridad fiscalizadora.

*Por otro lado, también, suponiendo sin conceder que fueran ciertas las conversaciones que dieron origen a la investigación en el asunto que nos ocupa, esa Unidad Técnica de Fiscalización, no debe perder de vista que, los actos imputados se basan en unas supuestas grabaciones obtenidas de manera ilegal, por lo que, en buena lógica jurídica, debe calificarse como **PRUEBA ILÍCITA**, a la que reiteradamente se le ha considerado como aquella probanza que es obtenida con infracción de las normas legales.*

Bajo estas circunstancias, no se debe perder de vista que los derechos humanos protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tutelan que todos los sujetos, sin excepciones, están obligados a que las actuaciones que se viertan en algún procedimiento administrativo o jurisdiccional, deben sustentarse en el ofrecimiento de pruebas lícitas en términos de la legislación aplicable al caso concreto, premisa del debido proceso que en la especie no se cumple.

*Bajo estas circunstancias, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de manera reiterada ha sostenido el criterio consistente en que las pruebas obtenidas por el oferente consistentes en videos o audios de conversaciones privadas, directa e indirectamente violas derechos fundamentales, por ende, no surtirán efecto alguno, premisa fundamental que se actualiza en el asunto que nos ocupa, dado que, los escritos de queja que dan origen al presente procedimiento sancionador, se basan en grabaciones de audios, que contienen conversaciones privadas, las cuales, se obtuvieron de manera ilegal, dado que no existe la autorización de las supuestas personas que interviene en la conversación, lo que en buena lógica jurídica conlleva a calificar esas probanza como **"PRUEBA ILÍCITA"** a la que no se le debe dar algún valor probatorio.*

Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido los siguientes criterios jurisprudenciales:

PRUEBA ILÍCITA. LAS PRUEBAS OBTENIDAS, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, VIOLANDO DERECHOS FUNDAMENTALES, NO SURTEN EFECTO ALGUNO. La fuerza normativa de la Constitución y el

carácter inviolable de los derechos fundamentales se proyectan sobre todos los integrantes de la colectividad, de tal modo que todos los sujetos del ordenamiento, sin excepciones, están obligados a respetar los derechos fundamentales de la persona en todas sus actuaciones, incluyendo la de búsqueda y ofrecimiento de pruebas, es decir, de aquellos elementos o datos de la realidad con los cuales poder defender posteriormente sus pretensiones ante los órganos jurisdiccionales. Asó a juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las pruebas obtenidas, directa o indirectamente violando derechos fundamentales, no surtirán efecto alguno, Esta afirmación afecta tanto a las pruebas obtenidas por los poderes públicos, como a aquellas obtenidas, por su cuenta y riesgo, por un particular. Asimismo, la ineficacia de la prueba no sólo afecta a las pruebas obtenidas directamente en el acto constitutivo de la violación de un derecho fundamental sino también a las adquiridas a partir o a resultas de aquéllas, aunque en su consecución se hayan cumplido todos los requisitos constitucionales. Tanto unas como otras han sido conseguidas gracias a la violación de un derecho fundamental -las primeras de forma directa y las segundas de modo indirecto-, por lo que, en pura lógica, de acuerdo con la regla de exclusión, no pueden ser utilizadas en un proceso judicial. Amparo directo en revisión 1621/2010. 15 de junio de 2011, Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario.' Javier Mijangos y González.

Amparo directo en revisión 1621/2010

PRUEBA ILÍCITA. LÍMITES DE SU EXCLUSIÓN. *La exclusión de la prueba lícita aplica tanto a la prueba obtenida como resultado directo de una violación constitucional, como a la prueba indirectamente derivada de dicha violación; sin embargo, existen límites sobre hasta cuándo se sigue la ilicitud de las pruebas de conformidad con la cadena de eventos de la violación inicial que harían posible que no se excluyera la prueba, Dichos supuestos son, en principio, y de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes: a) si la contaminación de la prueba se atenúa; b) si hay una fuente independiente para la prueba; y c) si la prueba hubiera sido descubierta inevitablemente. Sobre el primer supuesto, a saber, la atenuación de la contaminación de la prueba, se podrían tomar, entre otros, los siguientes factores para determinar si el vicio surgido de una violación constitucional ha sido difuminado: a) cuanto más deliberada y flagrante sea la violación constitucional, mayor razón para que el juzgador suprima toda evidencia que pueda ser vinculada con la legalidad. Así si la violación es no intencionada y menor, la necesidad de disuadir futuras faltas es menos irresistible; b) entre más vínculos (o peculiaridades) existan en la cadena entre la ilegalidad inicial y la prueba secundaria, más atenuada la conexión; y c) entre más distancia temporal exista entre la*

ilegalidad inicial y la adquisición de una prueba secundaria, es decir, que entre más tiempo pase, es más probable la atenuación de la prueba. En relación con el segundo supuesto es necesario determinar si hay una fuente independiente para la prueba. Finalmente, el tercer punto para no excluir la prueba consistiría en determinar si ésta hubiera sido descubierta inevitablemente en el proceso. Dicho supuesto se refiere, en general, a elementos que constituyan prueba del delito que hubieran sido encontrados independientemente de la violación inicial. La aplicación del anterior estándar debe hacerse en cada caso concreto.

Amparo en revisión 3381/2012. 28 de enero de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla I. Quintana Osuna.

Aunado a lo anterior, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, reiteradamente ha sostenido el criterio de que, de los derechos humanos protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se reconoce el derecho fundamental a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, por lo que cualquier litigio que se intente sustentar con este tipo de probanzas, se deben desestimar, ya que los resultados de cualquier intervención que no cumpla con los requisitos legales aplicables carecerán de todo valor probatorio pleno y lícito, tal y como sucede en el asunto que nos ocupa.

Con base en esta cadena argumentativa, esa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, debe tomar en cuenta que, en todo litigio, jurisdiccional y/o administrativo y de cualquier rama del derecho como lo es la materia electoral, no se puede, ni se debe autorizar la intervención de pruebas consistentes en videos o audios de conversaciones privadas, obtenidas de manera ilegal, como lo es en el asunto que nos ocupa, pues, de hacerlo, de manera evidente se actualiza la violación a los principios de constitucionalidad y legalidad en sus actuaciones, en virtud de que, es bien sabido que, cualquier grabación o medio de prueba derivado de la intervención de una comunicación privada, constituye una prueba ilícita que carece de todo valor probatorio.

*En este sentido, esa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, en todo momento, debe considerar que, respecto de las grabaciones telefónicas de las conversaciones privadas que dieron origen a la investigación del presente procedimiento sancionador en materia de fiscalización, no pueden ni deben ser tomadas en cuenta, dado que se actualiza la regla de exclusión probatoria contenida en el artículo 16, párrafo décimo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece **"Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente***

*cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley”, por tanto, ante la apreciación del buen derecho, en la especie, las pruebas en comento, carecen de todo valor probatorio, por recibir el carácter de **PRUEBA ILÍCITA**, pues es obtenida en franca violación al precepto constitucional antes invocado.*

Conforme a lo anterior, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha sostenido el siguiente criterio jurisprudencial.

Jurisprudencia 10/2012

*Coalición "Para Cambiar Veracruz" y otro vs,
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de
Llave*

GRABACIÓN DE COMUNICACIONES PRIVADAS. CARECE DE VALOR PROBATORIO EN MATERIA ELECTORAL. De los artículos 16, párrafos decimotercero y decimoquinto y 41 base VII de [a Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se reconoce el derecho fundamental a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas; que los resultados de cualquier intervención que no cumpla con los requisitos legales aplicables carecerán de todo valor probatorio y que en materia electoral la autoridad judicial no puede autorizar la intervención de esas comunicaciones; en esas condiciones, como las autoridades electorales deben observar los principios de constitucionalidad y legalidad en sus actuaciones, es de concluirse que cualquier grabación o medio de prueba derivado de la intervención de una comunicación privada, constituye una prueba ilícita que carece de todo valor probatorio en materia electoral.

Quinta Época:

Juicio de revisión constitucional electoral, SUP-JRC-244/2010 y acumulado.-Actores: Coalición "Para Cambiar Veracruz" y otro,—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la de octubre de 2010,—Unanimidad de votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—Secretarios: Guillermo Ornelas Gutiérrez, Carlos Báez Silva, Gerardo Suárez González y Héctor Rivera Estrada.

Recurso de apelación. SUP-RAP-135/2010.—Actor: Coalición "Alianza Puebla Avanza".—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—3 de noviembre de 2010,—Unanimidad de cinco votos.—ponente: María del Carmen Alanís Figueroa.—Secretario: Raúl Zeuz Ávila Sánchez

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/159/2022/AGS

Juicio de revisión constitucional electoral, SUP-JRC-79I2011 y Coaliciones "Guerrero nos Une" y otra.—30 de responsable: Sala de Segunda Instancia del

Tribunal Electoral del Estado de Guerrero.—Unanimidad de seis votos,— Ponente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: Ismael Anaya López, Ricardo Higareda Pineda, Maribel Olvera Acevedo, Isaías Trejo Sánchez y Rodrigo Quezada Goncen.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el dieciocho de abril de dos mil doce, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 5, Número 10, 2012, páginas 23 y 24.

En este orden de ideas, como es de verdad sabida y de derecho explorado, si de los hechos narrados no existe la apariencia de ser verdaderos o creíbles, de acuerdo a la forma natural de ser de las cosas, al encontrarse caracteres de falsedad o irrealidad dentro del relato, no se encuentra justificación racional poner en obra a una autoridad, para averiguar hechos carentes de verosimilitud dentro de cierta realidad en la conciencia general de los miembros de la sociedad, de tal manera, que cuando se denuncien hechos que no se encuentren ubicados en modo tiempo, lugar y circunstancias, dichas acusaciones a todas luces se encuentran cubiertas de falta de credibilidad.

Es por ello que, en todo procedimiento sancionador se deben observar todos los principios de derecho, entre los cuales se encuentra el relativo a que las quejas, denuncias presentadas y procedimientos sancionadores que se inicien, que puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo menos un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución y como consecuencia el procedimiento iniciado con motivo de la queja o denuncia debe ser declarado como infundado.

Aunado a lo anterior, reiterando, suponiendo sin conceder que fueran ciertas las conversaciones que dieron origen a la investigación en el asunto que nos ocupa, de dichas grabaciones y de las manifestaciones expuestas en los escritos de quejas, así como de los medios de prueba que anexa la parte acora, no se desprende alguna manifestación que se encuentre ubicada en modo, tiempo, lugar y circunstancias con las que se especifique de manera coherente e indubitable que efectivamente los recursos económicos utilizados para el pago

de la propaganda denuncias, hayan sido erogados por la C. María Teresa Jiménez, candidata a la Gubernatura del estado de Aguascalientes, postulado por la Coalición "VA POR AGUASCALIENTES" integrada por los partidos políticos nacionales Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, ni por dicho institutos políticos, por lo que, las acusaciones que se investigan en el asunto que nos ocupa, son completamente falsas y no existe algún medio de prueba idóneo que acredite algún grado de responsabilidad de los denunciados.

Con base en todo lo manifestado en el cuerpo del presente escrito de cuenta, atendiendo a las reglas generales de la valoración de la prueba, la experiencia y la sana crítica, es de concluir que el presente procedimiento en materia de fiscalización, a todas luces es plenamente infundado.

OBJECCIÓN DE PRUEBAS

*Conforme a lo establecido en el apartado denominado "CONTESTACION DE HECHOS" del presente escrito, manifestación que se solicita se tome en cuenta en este acto, como Sí se insertara a la letra, en obvio de repeticiones innecesarias y por economía procesal, **SE OBJETA EN TODO SU CONTENIDO, ALCANCE Y VALOR PROBATORIO QUE SE LE PRETENDA DAR**, a las probanzas ofrecidas por la parte actora, consistente en las pláticas sostenida en la paquetería de la mensajería privada "SMS", que contienen conversaciones privadas, así como las lonas que denuncia; probanzas de las que:*

- ❖ la C. María Teresa Jiménez, candidata a la Gubernatura del estado de Aguascalientes, postulado por la Coalición "VA POR AGUASCALIENTES" integrada por los partidos políticos nacionales Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, no ordenó la contratación; en consecuencia, **no ordenó la difusión de la propaganda que se denuncia ni la colocación de la misma. Siendo importante destacar que, no existe prueba idónea que acredite lo contrario.***
- ❖ Los partidos políticos nacionales Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, Integrantes de la Coalición "VA POR AGUASCALIENTES", **no ordenaron la contratación; en consecuencia, no ordenaron la difusión de la propaganda que se denuncia ni la colocación de la misma. Siendo importante destacar que, no existe prueba idónea que acredite lo contrario.***
- ❖ No existe algún medio de pruebas idóneo que de manera inequívoca con la que se relacione a los denunciados con la propaganda materia de*

investigación, por lo que en buena lógica jurídica, no existe algún grado de responsabilidad que pudiera ser reprochable en contra de la C. María Teresa Jiménez, candidata a la Gubernatura del estado de Aguascalientes, postulado por la Coalición "VA POR AGUASCALIENTES" integrada por los partidos políticos nacionales Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, no de dichos institutos políticos

- ❖ *Al ser obtenidas de manera ilegal, en buena lógica jurídica, debe calificarse como **PRUEBA ILÍCITA**, a la que reiteradamente se le ha considerado como aquella probanza que es obtenida con infracción de las normas legales.*
- ❖ *Dicha probanza, lejos de acreditar la existencia de los supuestos hechos denunciados, al ser grabaciones de conversaciones privadas, no deben surtir algún efecto.*
- ❖ *Dicha probanza, debe ser desestimada en virtud de que no es ofrecida conforme a los presupuestos procesales de procedencia, ya que los resultados de cualquier intervención que no cumpla con los requisitos legales aplicables carecerán de todo valor probatorio pleno.*
- ❖ *Dicha probanza, no pueden ni deben ser tomadas en cuenta, dado que se actualiza la regla de exclusión probatoria contenida en el artículo 16, párrafo décimo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que **establece "Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas, El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley"**, por tanto, ante la apreciación del buen derecho, en la especie, las pruebas en comento, carecen de todo valor probatorio, por recibir el carácter de **PRUEBA ILÍCITA**, pues es obtenida en franca violación al precepto constitucional antes invocado.*

Con base en todo lo manifestado en el cuerpo del presente escrito de cuenta, atendiendo a las reglas generales de la valoración de la prueba, la experiencia y la sana crítica, es de concluir que el presente procedimiento en materia de fiscalización, a todas luces es plenamente infundado.

GASTOS REPORTADOS EN EL "SIF".

*Se informe expresamente a esa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral que, **todos y cada uno de los ingresos y/o egresos que se utilizaron en la campaña** a la C. María Teresa Jiménez, candidata a la Gubernatura del estado de Aguascalientes, postulado por la Coalición "VA POR AGUASCALIENTES" integrada por los partidos políticos nacionales Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, se encuentran repostados en el **Sistema Integral de Fiscalización "SIF"**, reporte efectuado junto con los documentos e insumos necesarios e indispensables para acreditar cada asiento contable.*

Conforme a lo anterior, con la información jurídico contable que remita el Partido Acción Nacional a esa autoridad fiscalizadora, se acreditará que los gastos denunciados se encuentren debidamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización "SIF", mismos que al ser analizados conforme a las reglas generales de la valoración de las pruebas, la experiencia y la sana crítica, se podrá arribar a la conclusión de que no existe la omisión de reportar ingresos o gastos derivado de eventos de campaña, por lo que, en buena lógica jurídica, el asunto que nos ocupa, es infundado.

(...)

Elementos probatorios aportados por el partido:

PRUEBAS

- 1. DOCUMENTAL PÚBLICA,** *Constante en todos y cada una de las Pólizas del Sistema Integral de Fiscalización "SIF", junto con las evidencias documentales con las que se reportan todos los ingresos y egresos de la campaña de la C. María Teresa Jiménez, candidata a la Gubernatura del estado de Aguascalientes, postulado por la Coalición "VA POR AGUASCALIENTES" integrada por los partidos políticos nacionales Acción Nacional Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática.*
- 2. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES,** *Consistente en todas y cada una de las actuaciones que integren el expediente en que se actúa, en todo lo que favorezca a los intereses de la C. María Teresa Jiménez, candidata a la Gubernatura del estado de Aguascalientes, postulado por la Coalición "VA POR AGUASCALIENTES" integrada por los partidos políticos nacionales Acción Nacional Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, así como a dichos institutos políticos.*

3. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA,
Consistente sano criterio de esa autoridad resolutora, al analizar lógica y jurídicamente todas y cada una de las actuaciones que integren el expediente que se actúa, en todo lo que favorezca a los intereses de la C. María Teresa Jiménez, candidata a la Gubernatura del estado de Aguascalientes, postulado por la Coalición “VA POR AGUASCALIENTES” integrada por los partidos políticos nacionales Acción Nacional Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, así como a dichos institutos políticos.

Las pruebas mencionadas con anterioridad, se relacionan con todo manifestado en el cuerpo del presente escrito, de las que se solicita sean admitidas, ordenar su desahogo y en su momento valoradas y tomadas en cuenta al momento de emitir la resolución correspondiente, misma que necesariamente debe ser declarando infundado el presente procedimiento.

(...)” .

XXII. Notificación del inicio de procedimiento y emplazamiento a la C. María Teresa Jiménez Esquivel, otrora candidata a la Gubernatura de Aguascalientes.

a) El veinticinco de junio de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/14615/2022 se notificó el inicio del procedimiento de mérito y emplazó a la C. María Teresa Jiménez Esquivel, otrora candidata a la Gubernatura de Aguascalientes, corriéndole traslado con la totalidad de elementos que integran el escrito de queja. (Fojas 381 a 393 del expediente).

b) Al momento de la elaboración del presente proyecto, no se ha recibido respuesta alguna por parte de la precandidata mencionada.

XXIII. Solicitud de información a la Escuela Preescolar “Fernando Montes de Oca” de Aguascalientes.

a) El veintiocho de junio de dos mil veintidós se notificó el oficio INE/UTF/DRN/14635/2022, mediante el cual se solicitó información a la Directora o Director de la Escuela Preescolar “Fernando Montes de Oca” de Aguascalientes. (Fojas 606 a 616 del expediente).

b) El treinta de junio de dos mil veintidós se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el escrito, mediante el cual la Mtra. Rosa María Díaz Cruz en su carácter de Directora de la Escuela Preescolar “Fernando Montes de Oca” de

Aguascalientes dio respuesta al requerimiento de mérito. (Fojas 617 a 618 del expediente).

XXIV. Solicitud de información a la Escuela Primaria “Rafael Arellano Valle” de Aguascalientes.

a) El veintiocho de junio de dos mil veintidós se notificó el oficio INE/UTF/DRN/14636/2022, mediante el cual se solicitó información a la Directora o Director de la Escuela Primaria “Rafael Arellano Valle” de Aguascalientes. (Fojas 619 a 629 del expediente).

c) El cuatro de julio de dos mil veintidós se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el escrito mediante el cual la Mtra. Verónica Karina Rodríguez Velázquez en su carácter de Directora de la Escuela Primaria “Rafael Arellano Valle” de Aguascalientes dio respuesta al requerimiento de mérito. (Fojas 750 y 753 del expediente).

XXV. Solicitud de información Representante Legal y/o Apoderado Legal de Family Garden en Aguascalientes.

a) El veintinueve de junio de dos mil veintidós se notificó el oficio INE/UTF/DRN/14637/2022, mediante el cual se solicitó información al Representante Legal y/o Apoderado Legal de Family Garden en Aguascalientes. (Fojas 878 a 898 del expediente).

b) El seis de julio de dos mil veintidós se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización, el escrito el sin fecha, mediante el cual la C. Andrea Soto Pérez en su calidad de Directora de Family Garden dio respuesta al requerimiento de mérito. (Fojas 899 y 900 del expediente).

XXVI. Solicitud de información a la Propietaria o Propietario de bien inmueble.

a) El veintiocho de junio de dos mil veintidós, ante la imposibilidad de notificar personalmente se notificó por estrados el oficio INE/UTF/DRN/14639/2022, mediante el cual se solicitó información al Propietaria o Propietario de bien inmueble ubicado en Piracanto 202, esquina con Abedul del Fraccionamiento Las Arboledas, Aguascalientes, Aguascalientes. (Fojas 901 a 930 del expediente).

b) El cuatro de julio de dos mil veintidós, se recibió el escrito de la misma fecha, suscrito por el C. José de Jesús Avelar Márquez por el que da repuesta al requerimiento formulado. (Fojas 722 a 725 del expediente).

XXVII. Solicitud de información al Representante Legal y/o Apoderado Legal de Conceptos Móvil, S.A. de C.V.

a) El primero de julio de dos mil veintidós se notificó el oficio INE/UTF/DRN/14729/2022, mediante el cual se solicitó información al Representante Legal y/o Apoderado Legal de Conceptos Móvil, S.A. de C.V. (Fojas 676 a 684 del expediente).

b) El primero de julio de dos mil veintidós se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el escrito suscrito por el Representante Legal de Conceptos Móvil, S.A. de C.V., mediante el cual da respuesta al requerimiento formulado. (Fojas 685 a 714 del expediente).

c) El cinco de julio de dos mil veintidós se notificó el oficio INE/UTF/DRN/14955/2022, mediante el cual se solicitó información al Representante Legal y/o Apoderado Legal de Conceptos Móvil, S.A. de C.V. (Fojas 773 a 779 del expediente).

d) El cinco de julio de dos mil veintidós se notificó el oficio INE/UTF/DRN/15097/2022, mediante el cual se solicitó información al Representante Legal y/o Apoderado Legal de Conceptos Móvil, S.A. de C.V. (Fojas 783 a 789 del expediente).

e) El seis de julio de dos mil veintidós se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización los escritos, suscritos por Representante Legal de Conceptos Móvil, S.A. de C.V., mediante el cual da respuesta a los requerimientos formulados. (Fojas 958 a 1077 del expediente).

XXVIII. Solicitud de información al Representante Legal y/o Apoderado Legal de 001TECH SL, también conocida como Labs Mobile.

a) El seis de julio de dos mil veintidós se notificó vía correo electrónico el oficio INE/UTF/DRN/15169/2022, mediante el cual se solicitó información al Representante Legal y/o Apoderado Legal de 001TECH SL, también conocida como Labs Mobile. (Fojas 950 a 957 del expediente).

b) El once de julio de dos mil veintidós, se recibió vía correo electrónico el escrito de la misma fecha, mediante el cual el Administrador Único en representación de la persona moral 001TECH SL dio respuesta al oficio antes indicado. (Fojas 1225 a 1231 del expediente).

XXIX. Solicitud de información al C. Aldo Cuitláhuac Ugarte Mercado.

a) El once de julio de dos mil veintidós se notificó vía correo electrónico el oficio INE/UTF/DRN/15258/2022, mediante el cual se solicitó información al C. Aldo Cuitláhuac Ugarte Mercado. (Fojas 1098 a 1105 del expediente).

b) El once de julio de dos mil veintidós, se recibió correo electrónico, mediante el cual se remitió el escrito suscrito por el C. Aldo Cuitláhuac Ugarte Mercado por el que da repuesta al requerimiento formulado en el diverso INE/UTF/DRN/15258/2022. (Fojas 114 a 1119 del expediente).

XXX. Vista al Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes.

a) El veintiocho de mayo de dos mil veintidós, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó dar vista al Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes a efecto de que, en el ámbito de su competencia, determine lo conducente respecto de presunta “propaganda negra y/o calumniosa” en contra de la candidata a la Gubernatura de Aguascalientes, postulada por Morena, la C. Nora Ruvalcaba Gámez. (Fojas 32 a 34 del expediente).

b) El cinco de julio de dos mil veintidós, se notificó el diverso INE/URF/DRN/14790/2022 al Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, remitiéndole copia certificada en disco compacto, de las constancias que integraron el expediente de mérito. (Fojas 938 a 940 del expediente).

XXXI. Alegatos. El once de julio de dos mil veintidós, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó abrir la etapa de alegatos ordenando notificar a los partidos Morena, Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, así como la entonces candidata a la Gubernatura de Aguascalientes, la C. María Teresa Jiménez Esquivel, para que formularan sus alegatos dentro del término de Ley. (Fojas 1122 y 1123 del expediente).

XXXII. Notificación de Alegatos al partido Morena.

a) El once de julio de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/15275/2022, se hizo del conocimiento al partido Morena, su derecho a formular alegatos en el procedimiento de mérito dentro del término de Ley. (Fojas 1124 a 1130 del expediente).

b) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se recibió respuesta.

XXXIII. Notificación de Alegatos al Partido Acción Nacional.

a) El once de julio de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/15271/2022, se hizo del conocimiento al Partido Acción Nacional, su derecho a formular alegatos en el procedimiento de mérito dentro del término de Ley. (Fojas 1131 a 1139 del expediente).

b) El quince de julio de dos mil veintidós, se recibió a través del Sistema de Archivos Institucional (SAI) el escrito suscrito por el representante propietario del Partido de Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por medio del cual formuló sus alegatos, en los mismos términos que su escrito de contestación al emplazamiento, los cuales, por economía procesal, se tienen por transcritos. (Fojas 1313 a 1348 del expediente).

XXXIV. Notificación de Alegatos al Partido Revolucionario Institucional.

a) El once de julio de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/15273/2022, se hizo del conocimiento al Partido Revolucionario Institucional, su derecho a formular alegatos en el procedimiento de mérito dentro del término de Ley. (Fojas 1140 a 1147 del expediente).

b) El quince de julio de dos mil veintidós, se recibió a través del Sistema de Archivos Institucional (SAI) el escrito suscrito por el representante suplente del Partido de Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por medio del cual formuló sus alegatos, mismos que en la parte conducente señalan: (Fojas 1349 a 1364 del expediente).

“(…)

El denunciante pretende confundir a esa H. Autoridad atribuyendo al Partido Revolucionario Institucional y la C. María Teresa Jiménez Esquivel una

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/159/2022/AGS

*supuesta omisión de reporte de ingresos y gastos de campaña; siendo esto **IMPROCEDENTE**, se hace del conocimiento de esta autoridad, la coalición no realizó gastos en los bienes y servicios denunciados correspondiente a:*

- *Video publicado el pasado 20 de mayo del presente año, en la red social YouTube, a través del medio de comunicación "LATINUS", denominado "Loret Capítulo 83" "Hoy, los audios de funcionarios del gobierno federal que revelan el uso de programas sociales en la compra de votos para Morena..."*
- *mensajes provenientes de los números 43885, 56836 y 59895.*
- *Lonas con la siguiente leyenda: "EN ESTA COLONIA ODIAMOS A MORENA DENUNCIAREMOS AL 911"*

Adicional a lo anterior, ninguno de los gastos señalados por el quejoso benefician a la otrora candidata la C. María Teresa Jiménez Esquivel y/o la coalición "Va Por Aguascalientes" (PAN-PRI-PRD), o en específico al Partido Revolucionario Institucional. Es importante señalar que el artículo 32, numeral 1, señala los elementos que deberá contener los gastos de campaña para identificar el beneficio a los candidatos.

(...)

Del análisis al anexo 1 del oficio INE/UTF/DRN/15273/2022, mediante el cual refieren diversos mensajes de texto, no se observan elementos o indicios que demuestren beneficio a la campaña de la C. María Teresa Jiménez Esquivel y/o la coalición "Va Por Aguascalientes" (PAN-PRI-PRD).

*Es importante señalar, que ésta Autoridad Electoral, debe ceñirse estrictamente al Principio de Legalidad establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y al no existir elementos que acrediten que el PRI, la c. María Teresa Jiménez Esquivel y/o la coalición "Va Por Aguascalientes" (PAN-PRI-PRD) omitieron reportar ingresos y gastos debe declarar como **IMPROCEDENTE LA ACTUALIZACIÓN DE UNA OMISIÓN DEL PRI EN EL SUPUESTO REPORTE DE GASTOS DE CAMPAÑA.***

Adicional a lo anterior, en respuesta al numeral 1 del oficio INE/UTF/DRN/15273/2022, este instituto político no celebro operaciones con "Comunicaciones Digitales, S. De RL. De C.V." y/o "AT&T Comercialización Móvil, S. De R.L. De C.V.", identificadas ambas de manera conjunta o separada como "AT&T México, Concepto Móvil, S.A. de C.V, Identidad Advertising Development LLC y/o 001TECH SL", también conocida como "Labs Mobile", o con la persona física, el C. Aldo Cuitláhuac Ugarte Mercado por concepto de difusión de mensajes "SMS" de los números "43885", "56836" y "59895".

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/159/2022/AGS

*En atención al **numeral 2** del oficio INE/UTF/DRN/15273/2022, no existe (SIC) vínculo con el C. Aldo Cuitláhuac Ugarte Mercado, no es militante o simpatizante del Partido Revolucionario Institucional, tampoco fue integrante del equipo de la otrora candidata la C. María Teresa Jiménez Esquivel, durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2021-20~2 en el estado de Aguascalientes.*

*Al no ser servicios contratados por este instituto político, la C. María Teresa Jiménez Esquivel y/o la coalición "Va Por Aguascalientes" (PAN-PRI-PRD); no existen elementos que den respuesta a **los numerales 3, 4, 5, 6, 7 y 8** del oficio INE/UTF/DRN/15273/2022, al no corresponder a un gasto de campaña adquirido por el equipo de Campaña.*

*Se reitera a ésta Autoridad, que solamente se debe avocar a la aplicación de la norma, y al no existir elementos o indicios que determinen que el PRI, la C. María Teresa Jiménez Esquivel y/o la coalición "Va Por Aguascalientes" (PAN-PRI-PRD), conforme una rigurosa aplicación del Principio de Legalidad, debe decretar una IMPROCEDENCIA DE LA OMISIÓN IMPUTADA AL PRI, y es oportuno señalar **las atribuciones de ésta Autoridad, no son actuar bajo suposiciones de un partido político**, las obligaciones de ésta Autoridad está en aplicar debidamente la ley, es decir, aplicando en todo momento el Principio de Legalidad.*

(...)"

XXXV. Notificación de Alegatos al Partido de la Revolución Democrática.

a) El once de julio de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/15272/2022, se hizo del conocimiento al Partido de la Revolución Democrática, su derecho a formular alegatos en el procedimiento de mérito dentro del término de Ley. (Fojas 1148 a 1155 del expediente).

b) El trece de julio de dos mil veintidós, se recibió el escrito suscrito por el representante propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por medio del cual formuló sus alegatos, en los mismos términos que su escrito de contestación al emplazamiento, los cuales, por economía procesal, se tienen por transcritos. (Fojas 1242 a 1251 del expediente).

XXXVI. Notificación de Alegatos a la C. María Teresa Jiménez Esquivel, otrora candidata a la Gubernatura de Aguascalientes.

a) El once de julio de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/15274/2022, se hizo del conocimiento a la C. María Teresa Jiménez Esquivel, otrora candidata a la Gubernatura de Aguascalientes, su derecho a formular alegatos en el procedimiento de mérito dentro del término de Ley. (Fojas 1156 a 1163 del expediente).

b) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se recibió respuesta.

XXXVII. Cierre de instrucción. El catorce de julio de dos mil veintidós, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja de mérito y ordenó formular el proyecto de Resolución correspondiente. (Foja 1365 a 1366 del expediente.)

XXXVIII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de Resolución correspondiente, mismo que fue presentado a la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral en la Décima Tercera Sesión Extraordinaria celebrada el quince de julio de dos mil veintidós, el cual fue aprobado por unanimidad de votos de los integrantes presentes de la Comisión: las Consejeras Electorales, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera y Dra. Carla Astrid Humphrey Jordan, así como los Consejeros Electorales, Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona, y el Consejero Electoral Mtro. Jaime Rivera Velázquez, Presidente de la Comisión, con la ausencia del Consejero Electoral Dr. Ciro Murayama Rendón.

CONSIDERANDO

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es **competente** para tramitar, sustanciar y formular el presente proyecto de Resolución.

Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.

En este sentido, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41, base V, apartado B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que procedan.

2. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento.

A. Vista al Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes

Por tratarse de una cuestión de orden público, y en virtud que el artículo 30, numeral 2² del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, establece que las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio, en el presente caso se entra a su estudio para determinar si se actualiza o sobreviene alguna de ellas, pues de ser así debe decretarse el desechamiento del escrito de queja que nos ocupa, al existir un obstáculo que impida la válida constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia planteada.

Conviene precisar que, cuando se analiza una denuncia por la presunta comisión de irregularidades en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos, la autoridad debe estudiar de manera integral y cuidadosa el escrito de queja respectivo, junto con el material probatorio que se aporte, para determinar si se acreditan en un primer momento los elementos de procedencia de la queja, a efecto de proveer conforme a derecho sobre su admisión o desechamiento y, en este último caso, justificar que se está ante un supuesto evidente que autorice rechazar la queja o denuncia.

En este sentido, de la lectura preliminar al escrito inicial de queja que nos ocupa, se advierte que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 30, numeral 1, fracción VI, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en concordancia con los artículos; 5, numeral 3; y 31, numeral 1, fracción I, del

² "**Artículo 30. Improcedencia.** (...) 2. La Unidad Técnica realizará de oficio el estudio de las causas de improcedencia del procedimiento; en caso de advertir que se actualiza una de ellas elaborará el Proyecto de Resolución respectivo."

ordenamiento jurídico en comento, preceptos que se transcriben para pronta referencia:

***Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización***

“Artículo 5. Competencia y Vistas

(...)

3. Si de los hechos investigados se advierte una posible violación a disposiciones legales que no se encuentren relacionadas con esta materia, la Unidad Técnica deberá hacerlo del conocimiento a las autoridades competentes o, en su caso, se ordenará una vista a través de la Resolución respectiva que apruebe el Consejo.

(...)

Artículo 30. Improcedencia

1. El procedimiento será improcedente cuando:

(...)

VI. La Unidad Técnica resulte incompetente para conocer los hechos denunciados. En estos casos, sin mayor trámite y a la brevedad se resolverá de plano sobre la incompetencia, y el expediente se remitirá a la autoridad u órgano que resulte competente para conocer del asunto.

(...)

Artículo 31. Desechamiento

1. La Unidad Técnica elaborará y someterá a la aprobación de la Comisión el Proyecto de Resolución que determine el desechamiento correspondiente, en los casos siguientes:

I. Se desechará de plano el escrito de queja, sin que anteceda prevención a la parte denunciante, cuando se actualice alguno de los supuestos señalados en las fracciones II, IV, V, VI o VII del numeral 1 del artículo 30 del Reglamento.

(...)”

De los preceptos transcritos se desprende lo siguiente:

- a. Que la autoridad fiscalizadora no será competente cuando derivado del análisis y lectura de los hechos denunciados se advierta una posible violación a la normativa que no guarde estrecha relación con las facultades de la

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/159/2022/AGS

Unidad Técnica de Fiscalización y que, sin dilación alguna, ésta deberá hacerla del conocimiento a la autoridad o autoridades correspondientes.

- b. Que en caso de que se actualice el supuesto antes establecido, la autoridad electoral deberá, sin mayor trámite y a la brevedad, resolver de plano el desechamiento del escrito de queja respectivo.

En el caso que nos ocupa, se desprende que la queja presentada por el diputado Mario Rafael Llergo Latournerie, en su calidad de representante propietario de Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, denuncia a la Coalición “Va por Aguascalientes”, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, así como a su otrora candidata a la gubernatura de Aguascalientes, la C. María Teresa Jiménez Esquivel, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 en el estado de Aguascalientes, por hechos que, a su dicho podrían constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización.

Sin embargo, de una lectura integral al escrito de queja, se advierte la denuncia por la difusión de propaganda “negra y/o calumniosa” en contra de la otrora candidata a la gubernatura del estado de Aguascalientes, postulada por Morena, la C. Nora Ruvalcaba Gámez, dirigida a juicio del quejoso, para beneficiar a la entonces candidata a la gubernatura del estado de Aguascalientes, postulada por la Coalición “Va por Aguascalientes”, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, la C. María Teresa Jiménez Esquivel.

Así, del estudio de los hechos y la pretensión de la quejosa en su escrito, se advierte que denuncia la presunta comisión de conductas que vulneran el principio de equidad en la contienda y legalidad de la propaganda electoral, establecidos en la normatividad, por lo que se advierte que no actualiza la competencia de la Unidad Técnica de Fiscalización.

Con el fin de validar su dicho, la quejosa ofrece 14 (catorce) direcciones electrónicas y 17 (diecisiete) imágenes, tal como se advierte a continuación:

- 3 (tres) direcciones electrónicas donde es posible advertir contenido informativo del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 en el estado de Aguascalientes, establecido en la página oficial del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/159/2022/AGS

- 5 (cinco)³ direcciones electrónicas donde es posible advertir publicaciones con presunta propaganda negativa en contra de la C. Nora Ruvalcaba Gámez, de conformidad con lo siguiente:

NO.	Red social	DIRECCIÓN ELECTRONICA
1	YouTube	https://www.youtube.com/watch?v=SD76uyayZFo
2	Twitter	https://twitter.com/latinus_us/status/1528406354846687232?s=20&t=cTKFQN9ZfijC8vQL7XG8ug
3	Twitter	https://twitter.com/CarlosLoret/status/1528141187420499968?s=20&t=cTKFQN9ZfijC8vQL7XG8ug
4	Twitter	https://twitter.com/CarlosLoret/status/1527757256179302402?s=20&t=cTKFQN9ZfijC8vQL7XG8ug
5	Página Oficial de LatinUS	https://latinus.us/2022/05/19/loret-capitulo-83/amp/

- 6 (seis) imágenes cada una con una lona con las siguientes características: en la parte superior de fondo color azul y en letras mayúsculas color blanco el texto “EN ESTA COLONIA ODIAMOS A MORENA”; mientras que, en la parte inferior de fondo color blanco, primero, en letras mayúsculas color negro el texto “DENUNCIAREMOS AL”, y segundo, en tres recuadros de color rojo los números “911”y 6 (seis) direcciones electrónicas donde es posible advertir ubicaciones en la aplicación de “Google maps”, tal y como se muestra:

Identificador en queja	Imagen	Dirección electrónica
LONA 1		https://www.google.com.mx/maps/@21.9096768,-102.3042818,3a,75y,148.42h,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1sQu_GAIBTP19YaKGWJqrWJw!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpwxla-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DQu_GAIBTP19YaKGWJqrWJw%26cb_cliente%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D150.30489%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i16384!8i8192

³ Cabe mencionar que los enlaces identificados en la tabla del 1 al 4, la parte quejosa los presenta de manera duplicada.

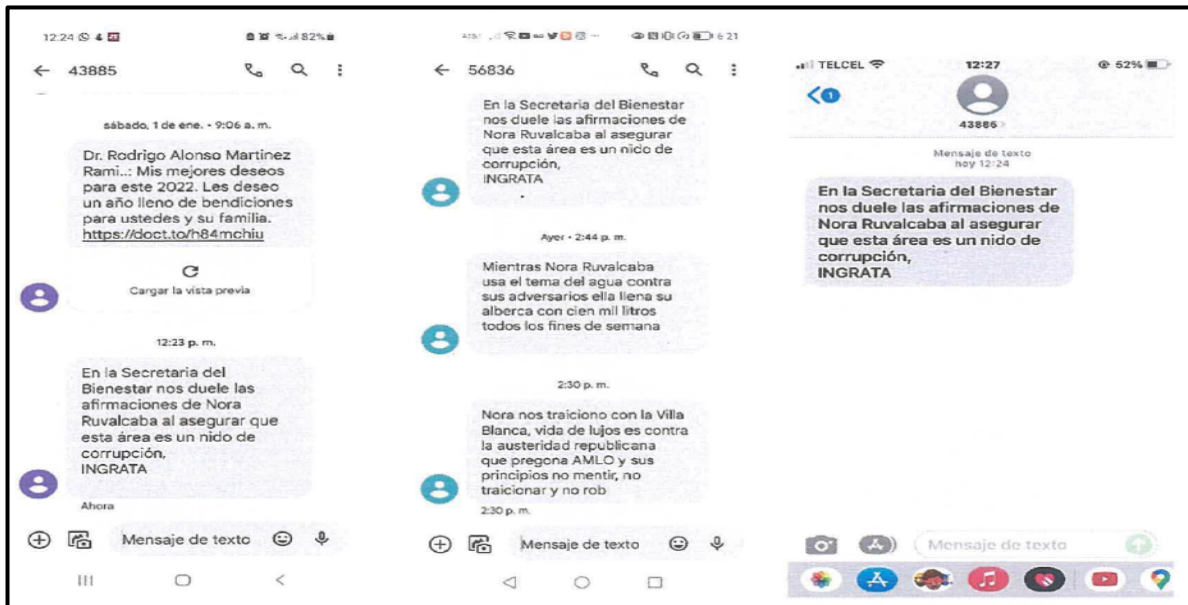
CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/159/2022/AGS

Identificador en queja	Imagen	Dirección electrónica
LONA 2		https://www.google.com.mx/maps/@21.9421022,-102.3055729,3a,75y,214.58h,94.41t/data=!3m7!1e1!3m5!1smHHGTdH9IbLI9v5WjAVYQG!2e0!6shhttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DmHHGTdH9IbLI9v5WjAVYQG%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D265.92517%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i16384!8i8192
LONA 3		https://www.google.com.mx/maps/@21.9016238,-102.3091092,3a,75y,69.06h,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1s5BbFcy106wFARio5CWqh8A!2e0!6shhttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3D5BbFcy106wFARio5CWqh8A%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D67.58607%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i16384!8i8192
Lona 4		https://www.google.com.mx/maps/@21.90051888,-102.3049533,3a,75y,216.19h,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1suBGWLj94bdzeKPx183vqlQ!2e0!6shhttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DuBGWLj94bdzeKPx183vqlQ%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D214.17194%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i16384!8i8192
LONA 5		https://www.google.com.mx/maps/@21.8946959,-102.2860282,3a,75y,359.93h,90.83t/data=!3m6!1e1!3m4!1sEdZ7ujQJ6GLNQ7shwqCYzA!2e0!7i16384!8i8192

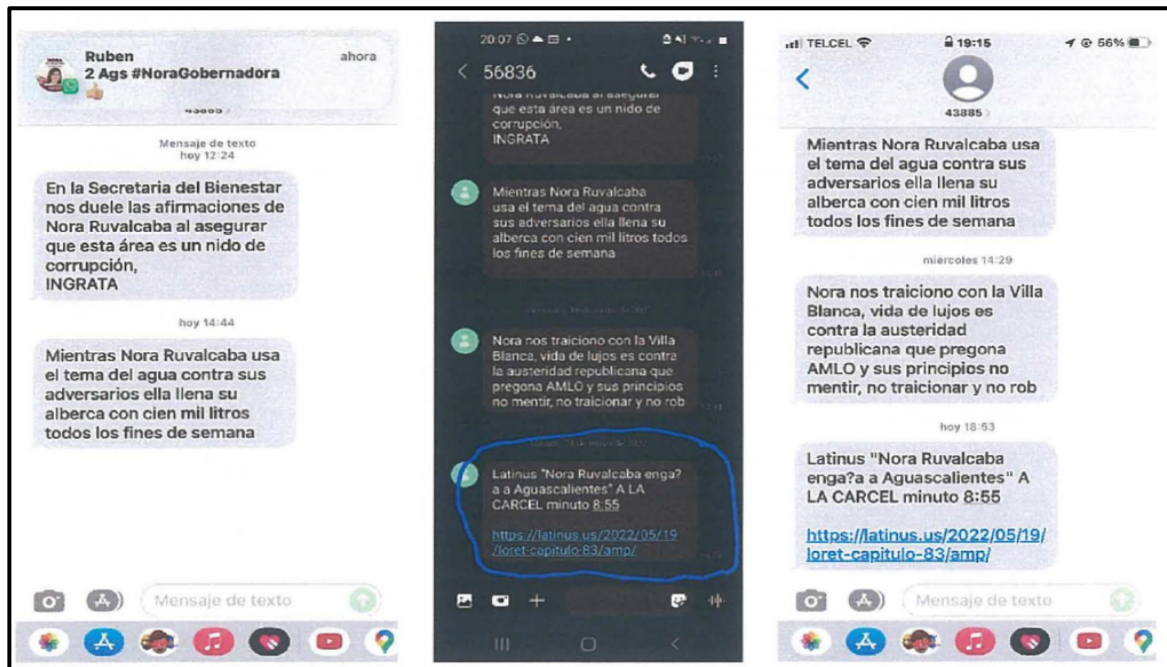
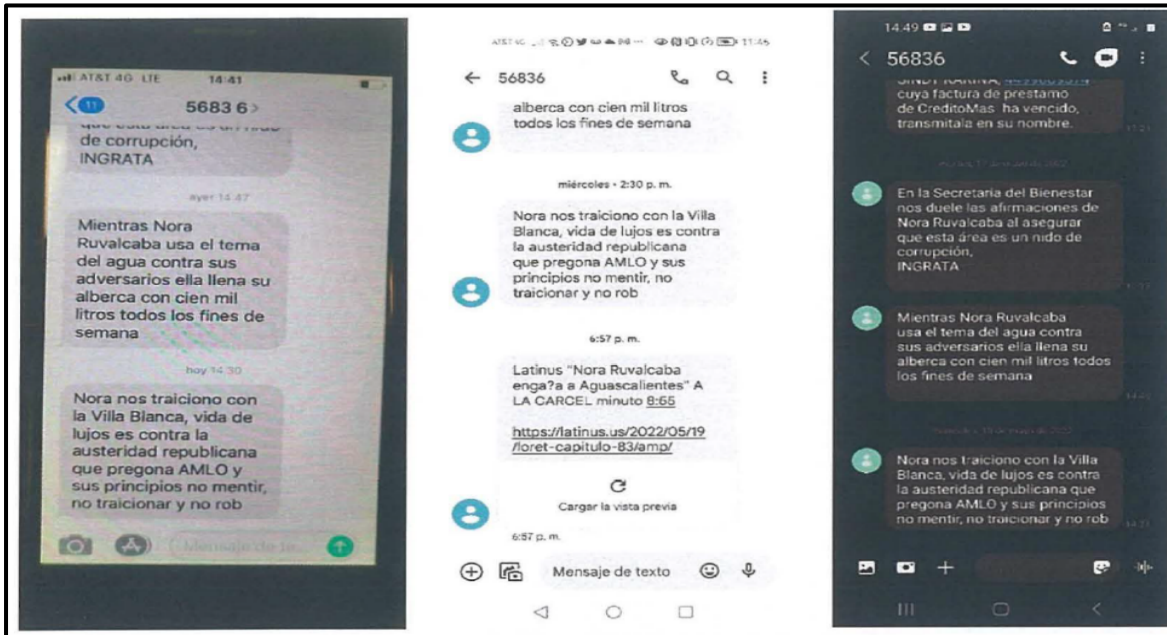
CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/159/2022/AGS

Identificador en queja	Imagen	Dirección electrónica
Lona 6		https://www.google.com.mx/maps/@21.93.11719._.102.2929237.3a.75y.171.19h.91.57t/data=!3m6!1e1!3m4!1sBg9jHNxldLi0vz6hgxiNw!2e0!7i16384!8i8192

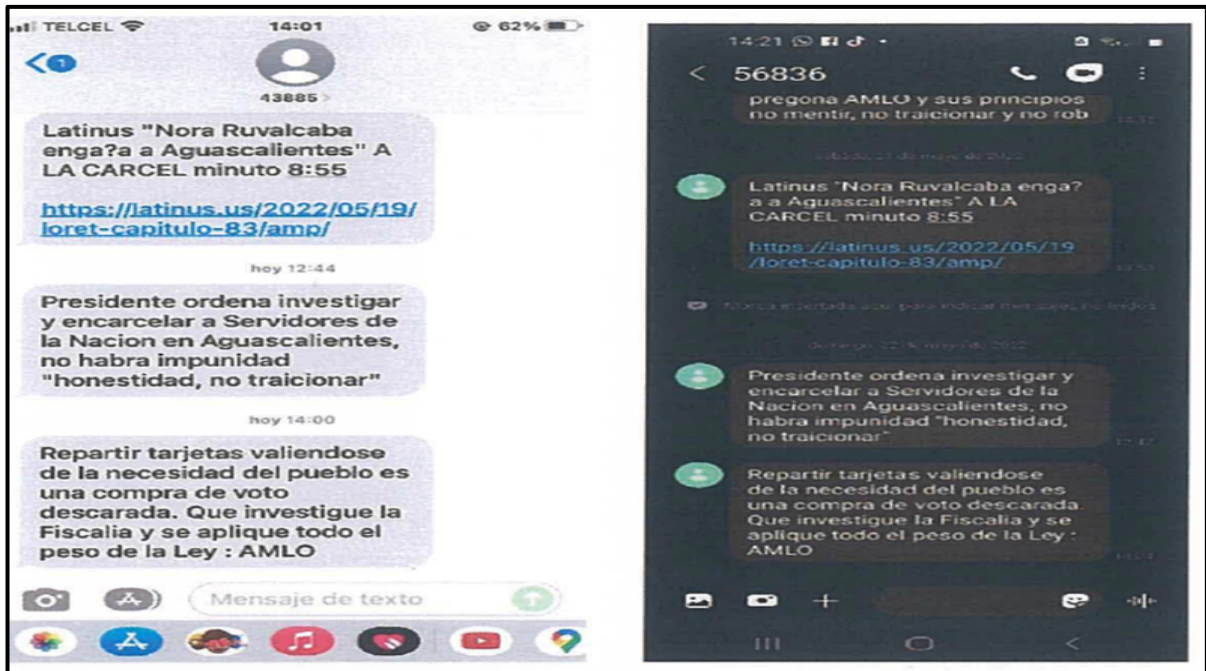
- 11 (once) imágenes correspondientes a capturas de pantalla, donde es posible advertir mensajes SMS con presunta propaganda negativa, lo anterior de conformidad con lo siguiente:



CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/159/2022/AGS



CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/159/2022/AGS



En este entramado de ideas, en consideración a las pretensiones de la parte quejosa, esta autoridad advierte la actualización del requisito de procedencia establecido en el artículo 30, numeral 1, fracción VI, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por ello resulta menester analizar si esta autoridad electoral debe desechar por lo que hace a los hechos y pretensiones señaladas en los párrafos que anteceden.

Por ello, es importante resaltar que en el artículo 157 del Código Electoral del Estado de Aguascalientes define a la propaganda electoral como el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas.

Conviene señalar, previo al pronunciamiento por parte de esta autoridad electoral, que el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que la expresión de ideas no será objeto de pesquisa judicial u en su caso administrativa, siempre y cuando no se vea permeada la moral, la vida pública, así como los derechos de terceras personas, o bien, provoque la tipificación de un delito y/o perturbe el orden público; por ello, se dispone que la ciudadanía posee el

derecho a recibir información e ideas de cualquier índole por el medio de expresión más idóneo.

En cuanto a la legislación aplicable al caso que nos ocupa, el artículo 41 Base II, apartado C de la Constitución Federal, establece que los partidos políticos y las personas candidatas a un cargo de elección popular deben abstenerse de difundir propaganda que calumnie a las personas o cometan alguna infracción electoral, por su parte, el artículo 471, numeral 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dispone que: “Se entenderá por calumnia la imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso electoral”, a lo que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha exigido agregar el elemento subjetivo “a sabiendas”, al adoptar la doctrina de la malicia efectiva, además de puntualizar que se requiere una calidad específica para ser sujeto activo de la calumnia. De lo anterior, dicha Sala en el expediente SUP-REP-89/2017, se ha pronunciado que: “la exigencia de veracidad o verosimilitud resulta un elemento consustancial al análisis de la real malicia o de la intencionalidad de una propaganda calumniosa, pues si la información es manifiestamente falsa es posible presumir que se tuvo la intención de afectar de manera injustificada la imagen de una persona o de un partido ante el electorado”.⁴

En el caso que nos ocupa, no se deja de lado que la pretensión que ahora pretende hacer valer la parte quejosa de analizar la existencia de transgresiones a la normativa en materia de fiscalización se encuentra supeditada a la actuación de un presupuesto de propaganda considerada como calumnia, es decir, y como lo denuncia el mismo actor en su escrito de queja, hechos subsumibles a la presunta publicidad negativa: pagada al medio de comunicación “LatinUS” a través de la difusión de un video; la colocación de 6 lonas; y la difusión de mensajes SMS, en contra de la C. Nora Ruvalcaba Gámez, otrora candidata por el partido Morena a la Gubernatura de Aguascalientes, y por ende a juicio del quejoso, en favor de la C. María Teresa Jiménez Esquivel, otrora candidata de la Coalición “Va por Aguascalientes”, integrada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática.

En consecuencia, es importante señalar que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce, se reformó el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone, en su Base V, Apartado B, penúltimo y últimos párrafos que corresponde al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a través de la Comisión de

⁴ Recurso de Revisión del Procedimiento Especial Sancionador, SUP-REP-89/2017, p. 18. Disponible en: <https://docs.mexico.justia.com/federales/sentencias/tribunal-electoral/2017-05-17/sup-rep-0089-2017.pdf>.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/159/2022/AGS

Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización, tiene a su cargo la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos; personas precandidatas, coaliciones; candidatos y candidatas a cargos de elección popular federal y local; aspirantes y candidatos independientes federales y locales; agrupaciones políticas nacionales; organizaciones de ciudadanos que pretendan constituir un Partido Político Nacional y organizaciones de observadores electorales a nivel federal.

Asimismo, el veintitrés de mayo de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en cuyo Libro Cuarto, Título Segundo, Capítulos Cuarto y Quinto, se establecen las facultades y atribuciones de la Comisión de Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización respectivamente, así como las reglas para su desempeño y los límites respecto de su competencia.

En virtud de lo anterior, claramente salta a la vista que los hechos y la conducta que fueron denunciados no versan ni guarda relación alguna con posibles infracciones sobre el origen, monto, destino y manejo de los recursos de los partidos políticos y demás personas obligadas, lo cual sí se encuentra dentro de la esfera competencial de la Unidad Técnica de Fiscalización, tal como se estipula en los artículos 190 a 200 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de los cuales se colige que, una de las atribuciones del Instituto Nacional Electoral es la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos, personas aspirantes a candidatos independientes, precandidatos y precandidatas, candidatos y candidatas, organizaciones de observadores y agrupaciones políticas, a través de su Consejo General –como ya se dijo- que a su vez, cuenta con una Comisión especializada -de Fiscalización- cuya encomienda es la supervisión, seguimiento, control técnico y, en general, todos aquellos actos preparatorios de la fiscalización.

Para ello, adicionalmente se encuentra y designa como autoridad sustanciadora de los procesos fiscalizadores, a la Unidad Técnica de Fiscalización, dependiente de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto, como órgano que tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes que presenten los partidos políticos respecto del origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciban por cualquier tipo de financiamiento, así como investigar lo relacionado con las quejas y procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas de los partidos políticos, ya sea como parte de sus actividades ordinarias o derivado de un Proceso Electoral, tal como se lee en virtud de lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/159/2022/AGS

A mayor abundamiento, la función del órgano fiscalizador es verificar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos empleados por los entes y personas obligadas para la consecución de sus actividades, en este orden de ideas el cumplimiento de sus obligaciones permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado democrático.

La competencia es un concepto que refiere la titularidad de una potestad que un órgano de autoridad posee sobre una determinada materia y ámbito de jurisdicción; es decir, se trata de una circunstancia subjetiva o inherente del órgano, de manera que cuando éste sea titular de los intereses y potestades públicas que le confiera la ley, éste será competente.

Esa competencia le otorga la facultad para realizar determinados actos acorde al orden jurídico establecido por el legislador, éstos le son atribuibles a determinada autoridad; en virtud de lo anterior, es dable señalar que ésta siempre debe ser otorgada por un acto legislativo material, o en su caso, por medio de leyes secundarias, acuerdos o decretos; a fin de que los órganos puedan cumplir las atribuciones que el estado les tiene encomendadas.

En un Estado de Derecho no se concibe la existencia de un órgano de autoridad sin competencia; como efecto de que esta es constitutiva del órgano, la misma no se puede renunciar ni declinar, sino que, por el contrario, su ejercicio debe limitarse a los términos establecidos por la ley y el interés público.

Puesto que los hechos denunciados son encaminados a investigar presuntos actos político-electorales, los cuestionamientos sobre su calificación como tal y la determinación de la existencia de propaganda “negra y/o calumniosa” en contra de la entonces candidata por Morena a la gubernatura de Aguascalientes la C. Nora Ruvalcaba Gámez, por la publicación de un video, colocación de 6 lonas y la difusión de mensajes SMS, mismos que a su juicio pudieron beneficiar a la Coalición “Va por Aguascalientes” integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, así como a su otrora candidata a la gubernatura de Aguascalientes, la C. María Teresa Jiménez Esquivel, no recaen en la competencia de la Unidad Técnica de Fiscalización.

Por tanto, en el presente caso, se considera que los hechos denunciados encuentran correspondencia con la competencia del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes ya que la denuncia presentada se encuentra vinculada con la

presunta vulneración de normatividad electoral en el ámbito local, y cuya vía de resolución se encuentra establecida en artículo 440, fracción 1 incisos a), b), c) y d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que menciona:

“Artículo 440.

1. Las leyes electorales locales deberán considerar las reglas de los procedimientos sancionadores, tomando en cuenta las siguientes bases:

a) Clasificación de procedimientos sancionadores en procedimientos ordinarios que se instauran por faltas cometidas dentro y fuera de los procesos electorales y especiales sancionadores, expeditos, por faltas cometidas dentro de los procesos electorales;

b) Sujetos y conductas sancionables;

c) Reglas para el inicio, tramitación, órganos competentes e investigación de ambos procedimientos;

d) Procedimiento para dictaminación para la remisión de expedientes, al Tribunal Electoral, para su resolución, tanto en el nivel federal como local, y (...).”

De esta manera, para establecer la competencia de las autoridades electorales locales en vías de conocer sobre un procedimiento sancionador, debe analizarse si la irregularidad denunciada: i) se encuentra prevista como infracción en la normativa electoral local; ii) impacta solo en la elección local, de manera que no se encuentra relacionada con los comicios federales; iii) está acotada al territorio de una entidad federativa, y iv) no se trata de una conducta ilícita cuya denuncia corresponda conocer a la autoridad nacional electoral y a la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En este sentido, el artículo 160, párrafo segundo del Código Electoral del Estado de Aguascalientes establece que *en la propaganda política o electoral que realicen los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, **deberán abstenerse de expresiones que calumnien, discriminen, denigren a las personas o constituyan violencia política contra las mujeres en razón de género.***

Por lo que, el artículo 268, fracción II del mismo ordenamiento establece lo siguiente:

Código Electoral del Estado de Aguascalientes

LIBRO CUARTO
DE LOS REGÍMENES SANCIONADOR ELECTORAL, DISCIPLINARIO
INTERNO Y DEL MINISTERIO PÚBLICO

TÍTULO PRIMERO
DE LAS FALTAS ELECTORALES Y SU SANCIÓN

CAPÍTULO IV
Del Procedimiento Especial Sancionador

“ARTÍCULO 268.- *Dentro de los procesos electorales, la Secretaría Ejecutiva instruirá el procedimiento especial establecido por el presente Capítulo, cuando se denuncie la comisión de conductas que:*

I. Violan lo establecido en el artículo 134, párrafo octavo de la CPEUM o en el artículo 89, párrafo tercero de la Constitución;

II. Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral establecidas para los partidos políticos y los candidatos independientes en este Código;

III. Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña, o

IV. Constituyan casos de violencia política contra las mujeres en razón de género.

Cuando la queja o denuncia verse sobre propaganda política o electoral en radio y televisión, podrá ser presentada ante el Secretario Ejecutivo quién, sin más trámite, la remitirá al INE para los efectos legales conducentes.”

De las disposiciones expuestas, se advierte que será la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, quien, dentro de los procesos electorales, instruirá el procedimiento especial sancionador establecido por el Capítulo IV, Del Procedimiento Especial Sancionador, cuando se denuncie la comisión de conductas que contravengan las normas sobre propaganda política o electoral establecidas para los partidos políticos y los candidatos independientes siendo competente para elaborar el Proyecto de Resolución que conforme a derecho corresponda, el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, esto de conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código en comento.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/159/2022/AGS

En las relatadas condiciones, y tomando en consideración las pretensiones de la quejosa, esta autoridad advierte la actualización del presupuesto jurídico previsto en el artículo 30, numeral 1, fracción VI del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, al deducirse que la queja es notoriamente improcedente con base en las facultades legales atribuidas a la Unidad Técnica de Fiscalización, resultando dicha autoridad incompetente para conocer y pronunciarse respecto de los hechos denunciados.

Derivado de lo anterior, este Consejo General advierte la necesidad de determinar el desechamiento en cuanto a la porción de los hechos del escrito de queja señalados en el presente considerando debido a la notoria incompetencia. Lo anterior, al advertirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 30, numeral 1, fracción VI, en relación con el artículo 31, numeral 1, fracción I, ambos del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.

Visto lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 5, numeral 3, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización; y 242, fracción VIII, 244, fracción IV, 252, fracción II, 268, fracción II, 269, 274 y 275, del Código Electoral del Estado de Aguascalientes, corresponde a la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes instruir el procedimiento especial sancionador por la comisión de conductas que constituyan la difusión de propaganda política o electoral que calumnie a las personas.

Por otro lado, en fecha veintiocho de mayo de dos mil veintidós, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó dar vista al Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes a efecto de que, en el ámbito de su competencia, determine lo conducente respecto de la propaganda “negra y/o calumniosa” en contra de la candidata a la Gubernatura de Aguascalientes, postulada por Morena, la C. Nora Ruvalcaba Gámez.

En consecuencia, mediante oficio número INE/UTF/DRN/14789/2022 de fecha treinta de junio de dos mil veintidós, al actualizarse la hipótesis prevista en el numeral 3, del artículo 5, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se remitió copia certificada del expediente número INE/Q-COF-UTF/159/2022/AGS, para los efectos conducentes.

B. Causales de improcedencia invocadas por la parte denunciada.

El Partido Acción Nacional en su escrito de respuesta al emplazamiento recaído mediante oficio INE/UTF/DRN/14612/2022, señaló a esta autoridad que a la luz del artículo 31, numeral 1, fracción I y II del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, el procedimiento de mérito debió haber sido desechado, a su juicio, por la evidente frivolidad en su contenido y hechos narrados claramente inverosímiles, tal y como se señala a continuación:

“(…)

IMPROCEDENCIA DE LA QUEJA o DENUNCIA:

*Previamente a realizar la contestación correspondiente a la presente queja que ahora nos ocupa, esta Autoridad Electoral deberá de realizar el correspondiente análisis de las fracciones I, y II del numeral 1. del artículo 30 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en adelante Reglamento de Procedimientos Sancionadores, a la luz de lo previsto en el artículo 440, numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en virtud de que de la simple lectura, dicha queja actualiza las fracciones antes referidas del Reglamento de Procedimientos Sancionadores, ya que los hechos narrados en la misma, resultan notoriamente inverosímiles, encontrando éstos su base en meras conjeturas personales y apreciaciones subjetivas, sin que se acredite conducta imputable a la denunciada, así mismo, los hechos narrados por el quejoso, deben ser considerados como frívolos, toda vez que los hechos referidos resultan por demás falsos e inexistentes, aunado a la carencia y omisión en la presentación de las pruebas idóneas y mínimas para acreditar la veracidad de su dicho, sin que de igual manera, se acredite conducta ilegal imputable a la denunciada, o a la de los partidos políticos integrantes de la Coalición "Va Por Aguascalientes", es decir, el Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y/o Partido de la Revolución Democrática, es decir, la quejosa de manera por demás deficiente, denuncia hechos que no se encuentran soportados debidamente conforme a derecho, siendo por tanto factible, **que ésta autoridad determine a la luz del artículo 31, numeral 1, fracción I y II del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, el desechamiento correspondiente respecto a la queja planteada por la evidente frivolidad en su contenido y hechos narrados claramente inverosímiles**, para lo cual me permito transcribir a continuación los artículos antes referidos:*

(…)

*Así mismo, de una interpretación mutatis mutandi, al criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación en la jurisprudencia 20/2009, de rubro PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. EL DESECHAMIENTO DE LA DENUNCIA POR EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL NO DEBE FUNDARSE EN CONSIDERACIONES DE FONDO, se desprende que el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, está facultado para someter a la aprobación de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el desechamiento de la queja presentada sin prevención alguna, entre otras causas, cuando del análisis del escrito de queja, se observe y colija que los hechos narrados en el referido escrito, resulten notoriamente inverosímiles aunado a que de igual manera, los hechos denunciados se consideren frívolos, sin que sea procedente realizar juicios de valor acerca de la legalidad de los hechos, a partir de la ponderación de los elementos que rodean esas conductas y de la interpretación de la ley presuntamente conculcada.
(...)”*

[Énfasis añadido]

Al respecto, el artículo 30, numeral 1, fracción I y II del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, en relación con artículo 440, numeral 1, inciso e), fracción II de la Ley General de Instituciones y procedimientos Electorales, establecen lo siguiente:

**Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización**

“Artículo 30.

Improcedencia

1. *El procedimiento será improcedente cuando:*

I. Los hechos narrados en el escrito de queja resulten notoriamente inverosímiles, o aun siendo ciertos, no configuren en abstracto algún ilícito sancionable a través de este procedimiento.

II. Los hechos denunciados, se consideren frívolos en términos de lo previsto en el artículo 440, numeral 1, inciso e) de la Ley General.

(...)”

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Artículo 440.

Las leyes electorales locales deberán considerar las reglas de los procedimientos sancionadores, tomando en cuenta las siguientes bases:

(...)

- e) Reglas para el procedimiento ordinario de sanción por los Organismos Públicos Locales de quejas frívolas, aplicables tanto en el nivel federal como local, entendiéndose por tales:*

II. Aquéllas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de la sola lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas mínimas para acreditar su veracidad;

(...)”

De los artículos antes transcritos, se desprende que la improcedencia del procedimiento tiene lugar cuando de una lectura preliminar de los hechos de la queja, la autoridad determina que los hechos resulten falsos o inexistentes.

En el mismo sentido, la interpretación funcional de los numerales transcritos conduce a estimar que con las anteriores disposiciones, se protege y garantiza que el acceso a la justicia administrativa electoral esté libre de abusos y de la presentación de escritos ligeros o insustanciales que puedan distraer u ocupar, injustificada e innecesariamente, los recursos humanos y materiales de la autoridad administrativa electoral.

Ahora bien, respecto del primer supuesto, esto es, la improcedencia de la demanda debido a la imposibilidad de alcanzar jurídicamente las pretensiones solicitadas, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho. Es preciso señalar que en el caso que nos ocupa, la pretensión que intenta probar el quejoso en su escrito de queja consiste en comprobar como ingreso y/o gasto por la difusión de un video, colocación de 6 lonas y la difusión de mensajes SMS, en favor de la Coalición “Va por Aguascalientes” Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, así como a su otrora candidata a la gubernatura de Aguascalientes, la C. María Teresa Jiménez Esquivel, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022, en el estado de Aguascalientes, siendo evidente que la pretensión del quejoso se encuentra al amparo del derecho.

Ahora bien, por cuanto al segundo supuesto consistente en que los hechos resulten ser falsos o inexistentes, es menester precisar qué se entiende por “falso” o “inexistente”, para lo cual, la Real Academia Española las define conforme a lo siguiente:

Falso, sa⁵

Del lat. falsus.

1. adj. Fingido o simulado. Sonrisa falsa.
2. adj. Incierto y contrario a la verdad. Citas falsas. Argumentos falsos.
3. adj. Dicho de una persona: Que miente o que no manifiesta lo que realmente piensa o siente. U. t. c. s.
(...)
5. adj. Dicho de una cosa: Que se hace imitando otra que es legítima o auténtica, normalmente con intención delictiva.
(...)

Inexistente⁶

(...)

Del *in* y existente.

1. adj. Que carece de existencia.
2. adj. Que, aunque exista, se considera totalmente nulo.

De las anteriores definiciones, se puede concluir, para el caso que nos ocupa, que lo **falso** es considerado como aquello que existe, pero se simula, se finge o es contrario a la verdad, mientras que lo **inexistente** es aquello que carece de existencia o es nulo.

En el particular, el Partido Acción Nacional considera que los hechos narrados por el quejoso resultan ser falsos e inexistentes por lo que deben ser considerados como frívolos, aunado a la carencia y omisión en la presentación de pruebas idóneas y mínimas para acreditar la veracidad de los hechos.

Ahora bien, el quejoso en su escrito de queja exhibe diversas imágenes y direcciones electrónicas, con las que pretende demostrar la existencia de los conceptos denunciados. En este sentido, esta autoridad no se encuentra en posición para determinar la inexistencia de tales objetos, es por lo que se debe entrar al análisis de fondo del asunto para así determinar si efectivamente las imágenes presentadas, así como los enlaces electrónicos, en los que se visualizan los conceptos denunciados, no son falsos o inexistentes.

⁵ Consulta disponible en: <https://dle.rae.es/falso>

⁶ Consulta disponible en: <https://dle.rae.es/inexistente>

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/159/2022/AGS

Por lo que, conforme a un análisis preliminar formulado por esta autoridad, se desprende la posible existencia de un hecho verosímil, del cual se pueden derivar los ilícitos sancionables consistentes en ingresos, aportaciones y/o egresos no reportados y/o comprobados, que pueden ser objeto de análisis a través del procedimiento de fiscalización y, que en el caso de acreditarse alguno, se encuentre en el supuesto de un posible rebase al tope de gastos de campaña.

En virtud de lo anterior y contrario a lo sostenido por el denunciado, el escrito presentado por el representante propietario del Partido Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral si contiene hechos verosímiles que podrían configurar la violación a la normatividad electoral y que debe resolverse a través de un procedimiento sancionador en materia de fiscalización.

Por último, respecto de la objeción que hace el Partido de la Revolución Democrática sobre supuestas pruebas ilícitas, es pertinente señalar que el presente procedimiento no versa sobre ningún tipo de grabación y/o pláticas privadas sostenidas mediante mensajería “SMS”, sino sobre el envío de mensajes de texto vía celular conocidos como SMS, y que de la lectura de los mismos no se desprenden conversaciones privadas, por lo que se considera que dichas manifestaciones resultan inatendibles por parte de esta autoridad.

Analizado lo anterior, tal y como ya fue señalado, esta autoridad electoral considera que no se actualiza la causal de improcedencia invocada, por lo que resulta procedente entrar al estudio de fondo del presente procedimiento con el fin de determinar, si en su caso, se acreditan las pretensiones del quejoso o si las conductas de los institutos políticos y la otrora candidata denunciados, se apegaron a la normatividad electoral.

3. Estudio de fondo. Ahora bien, resulta procedente fijar el fondo materia del presente procedimiento, se desprende que la litis del presente asunto consiste en determinar si la Coalición “Va por Aguascalientes”, integrada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, así como su otrora candidata a la gubernatura de Aguascalientes, la C. María Teresa Jiménez Esquivel, fueron omisos en reportar en el informe de campaña el ingreso y/o gasto por concepto de la difusión de un video, colocación de 6 lonas y la difusión de mensajes SMS, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022, en el estado de Aguascalientes.

En consecuencia, debe determinarse si las personas obligadas incumplieron con lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso i); 54, numeral 1, inciso f); y 79, numeral 1, inciso b), fracciones I y III de Ley General de Partidos Políticos; y 96, numeral 1; 121, numeral 1, incisos i) y j); y 127 del Reglamento de Fiscalización, que a la letra se transcriben:

Ley General de Partidos Políticos

“Artículo 25.

1. Son obligaciones de los partidos políticos:

(...)

i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos;

(...)

Artículo 54.

1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:

f) Las personas morales, y

(...)

Artículo 79.

1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes:

(...)

b) Informes de campaña:

l. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;

(...)

III. Los partidos políticos presentarán informes de ingresos y gastos por periodos de treinta días contados a partir de que dé inicio la etapa de campaña, los cuales deberán entregar a la Unidad Técnica dentro de los siguientes tres días concluido cada periodo.

(...)

Reglamento de Fiscalización

“Artículo 96.
Control de los ingresos

3. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes en la materia y el Reglamento

(...)

“Artículo 121.
Entes impedidos para realizar aportaciones

(...)

1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o en especie, préstamos, donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones, descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito o en comodato de los siguientes:

(...)

l) Las empresas mexicanas de carácter mercantil.

(...)

j) Las personas morales

(...)

Artículo 127.

Documentación de los egresos

1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.

2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.

3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.

(...)

De las premisas normativas se desprende que los partidos políticos tienen diversas obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su actuar a los principios del estado democrático, garantizando de esa forma el principio de respeto absoluto a la norma. Así pues, con esa finalidad se ha establecido la obligación a los partidos políticos de presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación.

El cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador contar con toda la información y documentación comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado Democrático.

En congruencia con ese régimen de transparencia y rendición de cuentas, se establece la obligación a los partidos políticos de reportar todos los ingresos y egresos a efecto que la autoridad electoral fiscalizadora tenga plena certeza de la licitud de sus operaciones y haber patrimonial.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/159/2022/AGS

Por su parte, el artículo 25, numeral 1, inciso i) de la Ley General de Partidos Políticos tiene una relación directa con el artículo 54, numeral 1 del mismo ordenamiento, el cual establece un catálogo de personas a las cuales la normativa les establece la prohibición de realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia.

La prohibición de realizar aportaciones en favor de los sujetos obligados provenientes de personas cuya prohibición está expresa en la normativa electoral, existe con la finalidad de evitar que los sujetos obligados como instrumentos de acceso al poder público estén sujetos a intereses privados alejados del bienestar general, como son los intereses particulares de personas físicas o morales dedicadas a realizar actos de comercio.

En el caso concreto, la proscripción de recibir aportaciones por parte de las personas listadas en la propia normativa electoral responde a uno de los principios inspiradores del sistema de financiamiento partidario en México, a saber, la no intervención de los sujetos previstos en el citado artículo 54, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Partidos Políticos; esto es, impedir cualquier tipo de injerencia de intereses particulares en las actividades propias de los partidos políticos, pues el resultado sería contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del Estado Democrático.

En otras palabras, el supuesto normativo sancionable impone el deber de rechazar los apoyos económicos -aportaciones- provenientes de personas listadas por el legislador.

En ese contexto, la falta cometida por el sujeto obligado traería consigo la vulneración al principio de equidad que rige a cualquier proceso electoral de que se trate y, como consecuencia, el uso indebido de recursos, toda vez que, derivado de la ilegal actuación de los sujetos obligados, consistente en recibir una aportación de ente prohibido por la ley electoral, se colocaría en una situación de ventaja respecto del resto de los actores políticos, así como guiar su actuación por intereses particulares específicos. Debido a ello, los sujetos obligados transgredirían el principio mencionado previamente, afectando a la persona jurídica indeterminada, es decir, a los individuos pertenecientes a la sociedad.

Es así como la norma aludida cobra gran relevancia, pues busca salvaguardar la equidad entre sus protagonistas y evitar que un partido político, precandidato o candidato, que recibe recursos adicionales a los expresamente previstos en la

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/159/2022/AGS

legislación comicial, se sitúe en una inaceptable e ilegítima ventaja respecto de sus opositores.

Aunado a lo anterior, la violación al principio de equidad se configura al considerar a los partidos como entes de interés público, cuyo fin consiste en promover la participación del pueblo en la vida democrática, situación que implica que los institutos políticos no pueden sujetar su actividad a intereses particulares o privados específicos.

Así las cosas, el legislador mexicano reconoce a los partidos políticos como entes capaces de cometer infracciones a las disposiciones electorales tanto en la Constitución Federal, al establecer en el artículo 41 que los partidos políticos serán sancionados por el incumplimiento de las disposiciones referidas en el precepto, como en el ámbito legal, en específico el artículo 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos que se analiza, prevé como obligación de los partidos políticos conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta a los principios del Estado Democrático; esto es, dicho precepto regula el principio de respeto absoluto de la norma, que destaca la mera transgresión a la norma como base de la responsabilidad del partido.

Estas disposiciones tienen como finalidad llevar un debido control en el manejo de los recursos que ingresan como aportaciones a los partidos políticos para garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales a través del sistema financiero mexicano, sea para el desarrollo de sus actividades ordinarias, de precampaña o de campaña, eso implica la comprobación de sus ingresos a través de mecanismos que permitan a la autoridad conocer el origen de los recursos que éstos reciben, brindado certeza del origen lícito de sus operaciones y de la procedencia de su haber patrimonial, y que éste último, no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la ley.

Establecido lo anterior, es importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento oficioso que por esta vía se resuelve.

Bajo esta tesitura, de lo previamente señalado resulta menester destacar que el procedimiento de mérito tiene su origen derivado del escrito de queja presentado por la representación del partido Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en contra del Coalición “Va por Aguascalientes”, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, así como a su otrora candidata a la gubernatura de Aguascalientes, la C. María Teresa Jiménez Esquivel, en el marco del Proceso Electoral Local

Ordinario 2021-2022 en el estado de Aguascalientes, denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización.

Derivado de lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó integrar el escrito en comento, así como admitir e iniciar la etapa de investigación del procedimiento en que se actúa; asimismo, dicha autoridad notificó el inicio del procedimiento de mérito a las partes, y posteriormente, emplazó a los ahora incoados.

Visto lo anterior, es preciso señalar que derivado de la información que obra en las constancias que integran el expediente de mérito, y a efecto de dar mayor claridad, resulta conveniente dividir el presente estudio de fondo en los apartados siguientes:

3.1 Valoración de Pruebas.

- A. Pruebas aportadas por el quejoso.**
- B. Pruebas recabadas por la Autoridad Fiscalizadora.**
- C. Pruebas aportadas por el Partido Acción Nacional.**
- D. Pruebas aportadas por el Partido Revolucionario Institucional**
- E. Pruebas aportadas por el Partido de la Revolución Democrática**
- F. Pruebas aportadas por la C. María Teresa Jiménez Esquivel otrora candidata a la Gubernatura de Aguascalientes en el marco del Proceso Electoral Local 2021-2022.**

3.2 Análisis del caso concreto.

- A. Difusión de un video.**
- B. Lonas.**
- C. Difusión de mensajes SMS**

Señalado lo anterior, se presenta el análisis de cada uno de los apartados respectivos.

3.1 Valoración de pruebas

En consecuencia, a fin de verificar si se acreditan los extremos de los supuestos que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de

Fiscalización, deberán analizarse y valorarse en su conjunto, cada uno de los elementos de prueba que obran dentro del expediente de mérito, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral federal.

A. Pruebas aportadas por el quejoso.

Se analiza de manera individual cada uno de los medios de convicción ofrecidos por el representante propietario del partido Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su escrito de queja mismos que se valoran a continuación:

a). Técnica. Consistentes en la presentación ocho direcciones electrónicas, cinco de ellas relacionadas con la difusión de un video, y tres con contenido de la página oficial del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes.

b). Técnica. Consistentes en la presentación seis direcciones electrónicas y seis imágenes, relacionadas con la colocación de lonas.

c). Técnica. Consistentes en la presentación de once capturas de pantalla, relacionadas con la difusión de mensajes SMS.

En este sentido los enlaces electrónicos, y las imágenes señaladas en los numerales a), b) y c) constituyen pruebas técnicas, de acuerdo con el artículo 17, numeral 1, Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo que de conformidad con el artículo 21, numeral 3 de dicho ordenamiento, solo harán prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.

Lo anterior de conformidad con la tesis de jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación radicada bajo el número 4/2014⁷. Misma que se transcribe a continuación:

***“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.-
De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los***

⁷ Consultable en la siguiente dirección electrónica:
<https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014&tpoBusqueda=S&sWord=4/2014>

Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar.”

Ello es así, en razón que la naturaleza de las pruebas técnicas es de carácter imperfecto ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar.

d). Presuncional. Como consecuencia de deducirse hechos conocidos para averiguar la verdad de otros desconocidos, se tiene por desahogada ante su simple ofrecimiento dada su especial naturaleza y constituye una prueba válida en términos del artículo 15, numeral 1, fracción VII del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.

e). Instrumental de Actuaciones. Consistentes en todas y cada una de las pruebas, constancias y acuerdos que obren en el expediente, se tiene por desahogada ante su simple ofrecimiento dada su especial naturaleza y constituye una prueba válida en términos del artículo 15, numeral 1, fracción VIII del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.

B. Pruebas recabadas por la Autoridad Fiscalizadora.

a) Documental pública: Acta Circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/211/2022, de primero de junio de dos mil veintidós, dictada dentro del expediente INE/DS/OE/242/2022, levantada en ejercicio de Oficialía Electoral, mediante la cual certifican de 14 (catorce) direcciones electrónicas.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/159/2022/AGS

b) Documental pública: Acta Circunstanciada INE/OE/JD/AGS/01/CIRC/004/2022, del tres de junio de dos mil veintidós, dictada dentro del expediente INE/DS/OE/242/2022, levantada en ejercicio de Oficialía Electoral, mediante la cual realiza una inspección ocular y levantamiento de cuestionarios en el domicilio Av. Adolfo López Mateos a un costado de Family Garden en el Fraccionamiento Reserva San Cristóbal del Aguascalientes.

c) Documental pública: Acta Circunstanciada OE/006/03-06-22, del tres de junio de dos mil veintidós, dictada dentro del expediente INE/DS/OE/242/2022, levantada en ejercicio de Oficialía Electoral, mediante la cual realiza una inspección ocular y levantamiento de cuestionarios en el domicilio Av. Héroe de Nacozari norte 1292, frente al puente peatonal en la Colonia Gremial del Distrito XI, Aguascalientes.

d) Documental pública: Acta Circunstanciada INE/OE/JD/AGS/03/CIRC/005/2022, del tres de junio de dos mil veintidós, dictada dentro del expediente INE/DS/OE/242/2022, levantada p en ejercicio de Oficialía Electoral, mediante la cual realiza una inspección ocular y levantamiento de cuestionarios en los domicilios: San Miguel el Alto 314 esquina con Rincón de Romos en el Fraccionamiento San Francisco del Arenal del Distrito VI, Aguascalientes; San Jorge 199 esquina con San Clemente en el Fraccionamiento San Cayetano del distrito VI. Aguascalientes; Piracanto 602 esquina con Abedul del Fraccionamiento Las Arboleadas del Distrito VI, Aguascalientes; y Av. Luis Gil 120 frente a la puerta sur del Fraccionamiento Las Cavas, Aguascalientes.

e) Documental Pública: Razón y constancia del día veintiocho de mayo de dos mil veintidós, levantada por la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto, respecto de la búsqueda del domicilio de la persona moral "Digital Beacon Programatic Services S.A. de C.V." mejor conocida como "LatinUS".

f) Documental Pública: Oficio IFT/212/CGVI/0607/2022, de fecha ocho de junio de dos mil veintidós, suscrito por la C. Merilyn Gómez Pozos en su calidad de Coordinadora General de Vinculación Institucional del Instituto Federal de Telecomunicaciones, mediante el cual informa sobre la imposibilidad de localización de los titulares de los números telefónicos "73885", "56836" y "59895".

g) Documental Pública: Oficio SSP/DGPC/4989/2022 suscrito por el Ing. Balam García Rivera en su carácter de Director General de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública de Aguascalientes, mediante el cual informa sobre

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/159/2022/AGS

la imposibilidad de localización de los titulares de los números telefónicos “73885”, “56836” y “59895”.

h) Documental Pública: Oficio GN/UPEC/DGC/5681/2022, suscrito por el Titular de la Dirección General Científica de la Guardia Nacional, por el cual remite el informe suscrito por el oficial adscrito al Centro Nacional de Respuestas a Incidentes Cibernéticos de la Dirección General Científica de la Guardia Nacional.

i) Documental Pública: Razón y constancia del día veintiuno de junio de dos mil veintidós, levantada por la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto, respecto de la búsqueda del domicilio de la persona moral Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V. y/o ATT&T Comercialización Móvil, S de R.L. de C.V., mejor conocida como “AT&T México”.

j) Documental Pública: Razón y constancia del día veintiuno de junio de dos mil veintidós, levantada por la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto, respecto de la búsqueda del domicilio de la persona moral Pegaso PCS, S.A. de C.V., mejor conocida como “Movistar”.

k) Documental Pública: Razón y constancia del día veintisiete de junio de dos mil veintidós, levantada por la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto, respecto de la búsqueda del domicilio de la persona moral Desarrollos y Construcciones del Centro S.A. de C.V.

l) Documental Pública: Razón y constancia del día veintisiete de junio de dos mil veintidós, levantada por la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto, respecto de la búsqueda del domicilio de Family Garden en Aguascalientes.

m) Documental Pública: Razón y constancia del día veintinueve de junio de dos mil veintidós, levantada por la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto, respecto de la búsqueda del domicilio de la persona moral Concepto Móvil S.A. de C.V.

n) Documental Pública: Oficio sin número, de fecha veintiocho de junio de dos mil veintidós, suscrito por la Mtra. Rosa María Díaz Cruz en su carácter de Directora de la Escuela Preescolar “Fernando Montes de Oca” de Aguascalientes, por medio cual da respuesta al requerimiento de información formulado mediante oficio INE/UTF/DRN/14635/2022.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/159/2022/AGS

ñ) Documental Pública: Oficio de fecha veintiocho de junio de dos mil veintidós, suscrito por la Mtra. Verónica Karina Rodríguez Velázquez en su carácter de Directora de la Escuela Primaria “Rafael Arellano Valle”, por medio del cual da respuesta al requerimiento formulado mediante oficio INE/UTF/DRN/14636/2022.

o) Documental Pública: Razón y constancia del día seis de julio de dos mil veintidós, levantada por la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto, respecto de la búsqueda del domicilio y cuenta de correo electrónico de la persona moral 001TECH SL, también conocida como LABS MOBILE.

p) Documental Pública: Razón y constancia del día once de julio de dos mil veintidós, levantada por la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto, respecto de la búsqueda en el Padrón de Afiliados a partidos políticos, específicamente por lo que hace a los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, donde no fue posible advertir el registro del C. Aldo Cuitláhuac Ugarte Mercado.

q) Documental Pública: Razón y constancia del día once de julio de dos mil veintidós, levantada por la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto, respecto de la búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización específicamente en el Registro Nacional de Proveedores donde no fue posible advertir el registro de del C. Aldo Cuitláhuac Ugarte Mercado, mientras que de la persona moral AT&T Comunicaciones Digitales S. de R.L. de C.V. si fue posible advertir su registro.

En consecuencia, debe señalarse que las pruebas señaladas constituyen documental pública de conformidad con los artículos 16, numeral 1, fracción I y 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos que en ellas se consignan. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.

r) Documental Privada: Documental Privada: Escrito de fecha seis de junio de dos mil veintidós mediante el cual el representante legal de Digital Beacon Programatic Services S.A. de C.V., da respuesta al requerimiento de información número INE/UTF/DRN/13245/2022.

s) Documental Privada: Escrito suscrito por el Representante y/o Apoderado Legal de Radiomóvil DIPSA, S.A. de C.V., mediante el cual informa la realización de un contrato con la persona moral Conceptos Móvil, S.A. de C.V., respecto de los números telefónicos 43885 y 56836.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/159/2022/AGS

t) Documental Privada: Escrito de fecha veintiocho de junio, suscrito por Apoderada Legal de Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V. y/o AT&T Comercialización Móvil, S. de R.L. de C.V., mediante el cual da respuesta al requerimiento formulado en el diverso INE/UTF/DRN/14453/2022.

u) Documental Privada: Escrito de fecha treinta de junio de dos mil veintidós, suscrito por el Apoderado Legal de Pegaso PCS, S.A. de C.V., mediante el cual informa la titularidad del número telefónico 56836.

v) Documental Privada: Escrito suscrito por el representante legal de Desarrollos y Construcciones del Centro, S.A. de C.V., mediante el cual da respuesta al requerimiento de información INE/UTF/DRN/14634/2022.

w) Documental Privada: Escrito de fecha primero de julio de dos mil veintidós, de suscrito por la Directora de Family Garden en Aguascalientes, mediante el cual da respuesta al requerimiento de información número INE/UTF/DRN/14637/2022.

x) Documental Privada: Escrito de fecha cuatro de julio de dos mil veintidós, suscrito C. José de Jesús Avelar Márquez por el que da repuesta al requerimiento formulado en el diverso INE/UTF/DRN/14639/2022.

y) Documental Privada: Escrito suscrito por el C. José Luis Padilla Calleja en representación legal de Conceptos Móvil, S.A. de C.V., por el que da repuesta al requerimiento formulado en el diverso INE/UTF/DRN/14729/2022., mediante el cual informa sobre la existencia de contratos con Subagregafores y Agregadores.

z) Documental Privada: Escrito suscrito por el C. José Luis Padilla Calleja en representación legal de Conceptos Móvil, S.A. de C.V., por el que da repuesta al requerimiento formulado en el diverso INE/UTF/DRN/14955/2022, mediante el cual informa sobre la existencia de un contrato con Identidad Advertising Development LLC y esta a su vez con Labs Mobile.

aa) Documental Privada: Escrito suscrito por el C. José Luis Padilla Calleja en representación legal de Conceptos Móvil, S.A. de C.V., por el que da repuesta al requerimiento formulado en el diverso INE/UTF/DRN/15097/2022.,

ab) Documental Privada: Escrito suscrito por el Sr. Boris Albert Vogel, en su condición de Administrador único en representación de la persona moral 001TECH

SL, mediante el cual da respuesta al requerimiento formulado en el oficio INE/UTF/DRN/15169/2022.

ac) Documental Privada: Escrito suscrito por el C. Aldo Cuitláhuac Ugarte Mercado por el que da repuesta al requerimiento formulado en el diverso INE/UTF/DRN/15258/2022.

Por lo que hace a las pruebas descritas constituyen una documental privada que, de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo hará prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.

C. Pruebas aportadas por el Partido Acción Nacional.

El partido político presenta dos escritos a través de su representante propietario ante el Consejo General de este Instituto, en respuesta al emplazamiento y a los alegatos. En este sentido, ofreció las siguientes pruebas:

a) Presuncional. En su doble aspecto, legal, y humana en todo lo que pudiese beneficiar al Partido Acción Nacional en este sentido, se tiene por desahogada ante su simple ofrecimiento dada su especial naturaleza y constituye una prueba válida en términos del artículo 15, numeral 1, fracción VII del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.

b) Instrumental de Actuaciones. Se tiene por desahogada ante su simple ofrecimiento dada su especial naturaleza y constituye una prueba válida en términos del artículo 15, numeral 1, fracción VIII del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.

D. Pruebas aportadas por el Partido Revolucionario Institucional

El partido político presenta dos escritos a través de su representante suplente ante el Consejo General de este Instituto, en respuesta al emplazamiento y a los alegatos. En este sentido, ofreció las siguientes pruebas:

a). Instrumental de Actuaciones. Se tiene por desahogada ante su simple ofrecimiento dada su especial naturaleza y constituye una prueba válida en términos

del artículo 15, numeral 1, fracción VIII del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.

b). Presuncional. En su doble aspecto, legal, y humana en todo lo que pudiese beneficiar al Partido Revolucionario Institucional, se tiene por desahogada ante su simple ofrecimiento dada su especial naturaleza y constituye una prueba válida en términos del artículo 15, numeral 1, fracción VII del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.

E. Pruebas aportadas por el Partido de la Revolución Democrática

El partido político presenta dos escritos a través de su representante propietario ante el Consejo General de este Instituto, en respuesta al emplazamiento y a los alegatos. En este sentido, ofreció las siguientes pruebas:

a). Documental Privada. Consistente en todos y cada una de las pólizas del sistema integral de Fiscalización, junto con las evidencias documentales de los ingresos y egresos, relativo a la campaña de la C. María Teresa Jiménez Esquivel, candidata a la gubernatura del estado de Aguascalientes por la coalición Va por Aguascalientes.

Por lo que hace a la prueba descrita constituyen una **documental privada** que, de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo hará prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.

b). Instrumental de Actuaciones. Se tiene por desahogada ante su simple ofrecimiento dada su especial naturaleza y constituye una prueba válida en términos del artículo 15, numeral 1, fracción VIII del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.

c). Presuncional. En su doble aspecto, legal, y humana en todo lo que pudiese beneficiar a las personas incoadas, se tiene por desahogada ante su simple ofrecimiento dada su especial naturaleza y constituye una prueba válida en términos del artículo 15, numeral 1, fracción VII del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.

F. Pruebas aportadas por la C. María Teresa Jiménez Esquivel otrora candidata a la Gubernatura de Aguascalientes en el marco del Proceso Electoral Local 2021-2022.

No obstante que mediante oficios INE/UTF/DRN/14615/2022 y INE/UTF/DRN/15274/2022, se emplazó y notificó el acuerdo de alegatos, respectivamente, a la C. María Teresa Jiménez Esquivel en su calidad de candidata a la Gubernatura de Aguascalientes, para que manifestara lo que estimara conveniente, no se recibió respuesta alguna.

Por ende, en lo tocante a la candidata mencionada, no existe material probatorio susceptible de análisis en el presente asunto.

Una vez señalada la documentación con la cual cuenta esta autoridad fiscalizadora, así como lo correspondiente a las solicitudes y/o requerimientos de información que se realizaron en la línea de investigación señalada, lo conducente es analizar lo obtenido de conformidad con la conducta que se investiga.

3.2 Análisis del caso concreto.

La parte quejosa en su escrito inicial refiere la existencia de gastos que a su juicio benefician a la campaña de la Coalición “Va por Aguascalientes”, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional y su otrora candidata a la gubernatura de Aguascalientes, la C. María Teresa Jiménez Esquivel, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 en el estado de Aguascalientes, y que a su dicho no se encuentran reportados ante esta autoridad. En este sentido, su denuncia se basa en la posible existencia de propaganda consistente en la difusión de un video, colocación de 6 (seis) lonas y la difusión de 11 (once) mensajes SMS realizados en contra de la candidata a la gubernatura de Aguascalientes, postulada por Morena, la C. Nora Ruvalcaba Gámez.

Por lo anterior, toma relevancia realizar un análisis a la normativa electoral en materia de propaganda, para que una vez fijado el criterio legal se pueda establecer o no el beneficio a las personas incoadas. En este sentido el artículo 243 numerales 1 y 2, incisos a), b), c) y d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que:

“Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Artículo 243

1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General.

2. Para los efectos de este artículo quedarán comprendidos dentro de los topes de gasto los siguientes conceptos:

a) Gastos de propaganda:

I. Comprenden los realizados en bardas, mantas, volantes, pancartas, equipos de sonido, eventos políticos realizados en lugares alquilados, propaganda utilitaria y otros similares;

b) Gastos operativos de la campaña:

I. Comprenden los sueldos y salarios del personal eventual, arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de transporte de material y personal, viáticos y otros similares;

c) Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos:

I. Comprenden los realizados en cualquiera de esos medios, tales como inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus similares, tendentes a la obtención del voto. En todo caso, tanto el partido y candidato contratante, como el medio impreso, deberán identificar con toda claridad que se trata de propaganda o inserción pagada, y

d) Gastos de producción de los mensajes para radio y televisión: I. Comprenden los realizados para el pago de servicios profesionales; uso de equipo técnico, locaciones o estudios de grabación y producción, así como los demás inherentes al mismo objetivo.”

De este modo, el artículo en comento establece cuales son los gastos que pueden realizar los partidos políticos, coaliciones y candidatos durante el proceso electoral y son considerados de gastos de campaña.

Asimismo, que los gastos realizados durante la campaña electoral, que coincidan con lo dicho en el artículo 243 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, serán sumados al tope de gastos, siempre que los realicen los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos postulados.

En atención a lo anterior, y de conformidad con la Tesis LXIII/2015 en la cual la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tuvo a bien señalar los elementos mínimos a considerar para dar a un gasto la cualidad de ser referente a campaña, misma que señala:

Partido de la Revolución Democrática y otros

Vs.

***Consejo General del Instituto Nacional Electoral y otras
Tesis LXIII/2015***

***GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA
SU IDENTIFICACIÓN.-***

Del contenido de los artículos 41, Base II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 210, 242, párrafos primero, segundo, tercero y cuarto; y 243 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como 76 de la Ley General de Partidos Políticos, se desprende que la ley debe garantizar que los partidos políticos cuenten, de manera equitativa, con elementos para llevar a cabo sus actividades y establecer las reglas para el financiamiento y límite a las erogaciones en las campañas electorales; asimismo, se prevé que las campañas electorales son el conjunto de actividades llevadas a cabo para la obtención del voto; que los actos de campaña son aquellos en los que los candidatos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas, como es el caso de las reuniones públicas, asambleas y marchas; que la propaganda electoral se compone de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que producen y difunden los partidos políticos, y que su distribución y colocación debe respetar los tiempos legales y los topes que se establezcan en cada caso; y que todo acto de difusión que se realice en el marco de una campaña comicial, con la intención de promover una candidatura o a un partido político, debe considerarse como propaganda electoral, con independencia de que se desarrolle en el ámbito de la actividad comercial, publicitaria o de promoción empresarial. En ese tenor, a efecto de determinar la existencia de un gasto de campaña, la autoridad fiscalizadora debe verificar que se presenten, en forma simultánea, los siguientes elementos mínimos: a) finalidad, esto es, que genere un beneficio a un partido político, coalición o candidato para obtener el voto ciudadano; b) temporalidad, se refiere a que la entrega, distribución, colocación, transmisión o difusión de la propaganda se realice en período de campañas electorales, así como la que se haga en el período de intercampaña siempre que tenga como finalidad, generar beneficio a un partido político, coalición o candidato, al difundir el nombre o imagen del candidato, o se promueva el voto en favor de él y, c) territorialidad, la cual consiste en verificar el área geográfica donde se lleve a cabo. Además, se

deben considerar aquellos gastos relacionados con actos anticipados de campaña y otros de similar naturaleza jurídica.

Quinta Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-277/2015 y acumulados. —Recurrentes: Partido de la Revolución Democrática y otros. —Autoridades responsables: Consejo General del Instituto Nacional Electoral y otras. —7 de agosto de 2015. —Unanimidad de votos. — Ponente: Flavio Galván Rivera. —Ausente: María del Carmen Alanís Figueroa. — Secretarios: Alejandro Olvera Acevedo y Rodrigo Quezada Goncen.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el siete de agosto de dos mil quince, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 88 y 89.

[Énfasis añadido]

En lo concerniente a la temporalidad, se refiere a que la entrega, distribución, colocación, transmisión o difusión de la propaganda se realice en período de campañas electorales; es de destacar que el periodo de campaña en el Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022, correspondiente al estado de Aguascalientes abarcó del tres de abril al primero de junio de dos mil veintidós. Por lo que hace a la territorialidad, consiste en verificar el área geográfica donde se lleve a cabo. Por último, en cuanto a la finalidad, la generación de un beneficio a la persona obligada o instituto político para obtener el voto ciudadano, difundir el nombre o imagen promoviendo el voto en favor de la candidata o el partido político denunciado.

En este sentido, la propaganda electoral no es otra cosa que publicidad política, que busca promocionar a un candidato, su propuesta política y sus ideas, así como el del partido o coalición que lo propone. Así pues, se advierte que los elementos de propaganda buscan dar a conocer cierta información para inducir o intensificar actitudes y acciones específicas con la intención de convencer a una determinada audiencia (el electorado) para que adopte la actitud o acción que se presenta (votar por determinada candidatura o partido político); es así que para colmar este requisito se necesita el elemento subjetivo que contenga imágenes, signos, emblemas y expresiones que tengan por objeto difundir la imagen y propuestas del partido político, coalición o candidatura que lo distribuye.

Por consiguiente, del análisis al escrito de queja fue posible determinar elementos tales como la página del medio noticioso LatinUS, direcciones y números telefónicos, que permitieron a esta autoridad establecer una línea de investigación respecto de los recursos utilizados para ese fin. Por lo que para su análisis es conveniente dividirlos por tipo, es decir, en primera instancia la difusión de un video, en segunda la posible colocación de lonas y en tercera la probable difusión de mensajes SMS, tal y como se muestra:

A. Difusión de un video.

Dentro del escrito inicial de queja el partido Morena denuncia la difusión de un video, mismo que a su dicho fue difundido a través del medio de comunicación de "LatinUS", de nombre "Loret Capítulo 83" y difundido en los siguientes enlaces electrónicos:

1. <https://www.youtube.com/watch?v=SD76uyayZFo>
2. https://twitter.com/latinus_us/status/1528406354846687232?s=20&t=cTKFQN9ZfijC8vQL7XG8ug
3. <https://twitter.com/CarlosLoret/status/1528141187420499968?s=20&t=cTKFQN9ZfijC8vQL7XG8ug>
4. <https://twitter.com/CarlosLoret/status/1527757256179302402?s=20&t=cTKFQN9ZfijC8vQL7XG8ug>

La parte quejosa refiere que del minuto 8:55 al minuto 15:53 del video denunciado, se emite propaganda político electoral para favorecer a la C. María Teresa Jiménez Esquivel, candidata de la Coalición "Va por Aguascalientes", integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, a la gubernatura en el estado de Aguascalientes.

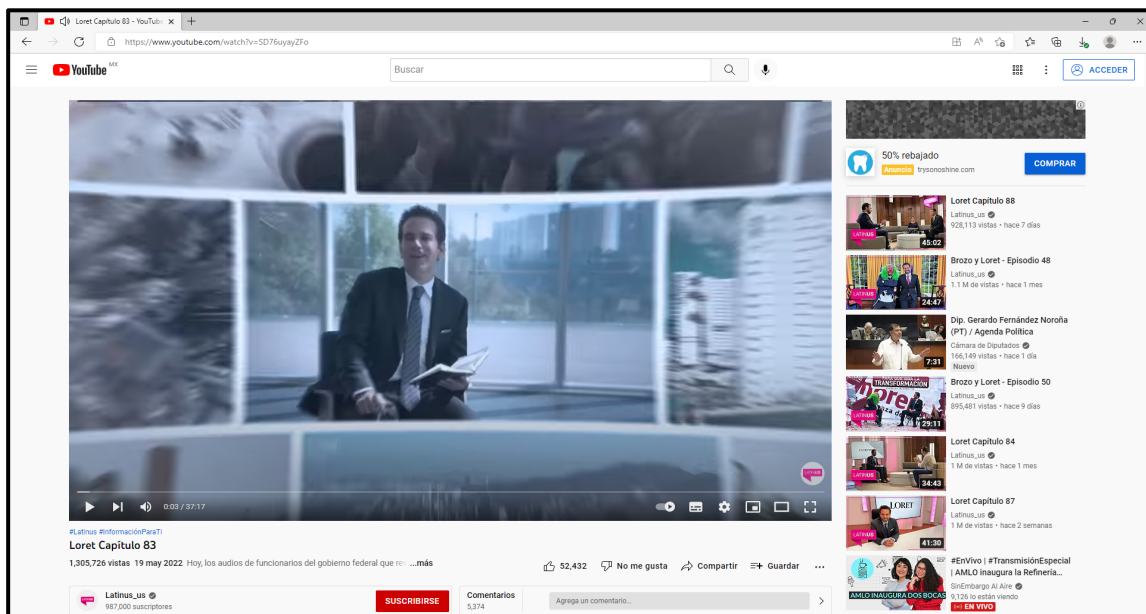
Por lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización llevó a cabo diversas diligencias con la finalidad de obtener mayores elementos de convicción a partir de los indicios aportados con la queja, como la consulta a las direcciones electrónicas que proporcionó el quejoso, en la que se apreció la existencia de la probanza técnica de referencia.

De la misma forma, se solicitó a la Dirección del Secretariado de este Instituto para que certificará el contenido de las direcciones electrónicas involucradas con el video de mérito, resultado de lo anterior se obtuvo el acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/211/2022, material probatorio señalado en el apartado de

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/159/2022/AGS

valoración de pruebas. Es por ello, que se advierte la existencia del video de conformidad con lo siguiente:

Al abrir el enlace electrónico <https://www.youtube.com/watch?v=SD76uyayZFo>, fue posible advertir lo siguiente:



Se trata de un video publicado en el perfil verificado de Latin_us, el cual contiene la descripción: “#Latinus #InformaciónParaTi Loret Capítulo 83”, en este sentido se puede advertir del minuto 8:55 al minuto 15:53 lo siguiente:

"Carlos Loret de Mola: Mucho se ha hablado de cómo el gobierno de López Obrador usa los programas sociales que son de todos los mexicanos para beneficiar a morena mucho se ha hablado de cómo extorsiona y chantajea a los beneficiarios de estos programas sociales diciéndoles la mentira de que si no votas por morena van a perder los apoyos hoy en latinus les vamos a presentar evidencia de esto que es que es un delito electoral grabaciones de funcionarios federales organizando esta trampa testimonios de servidores de la nación contando como los obligan a chantajear a la gente, es el caso Aguascalientes en un reportaje de Gerardo Mejía.

Persona 1: Desde que arrancó el proceso electoral las precandidaturas o candidaturas de morena y precampañas a todos los servidores de la nación se nos ha pedido que apoyemos a Nora Ruvalcaba. Se nos ha estado solicitando

que a través de las bases de datos que nosotros tenemos de la lista de beneficiarios, vayamos a visitar a los beneficiarios perdón y de esta manera podamos coaccionar el voto como lo hacemos pues diciéndoles prácticamente palabras más palabras menos que si ellos no votan a favor de morena se les van a quitar esos programas sociales.

Persona 2 (reportero): *Morena utiliza los padrones de los programas sociales federales y la estructura de la Secretaría de Bienestar para coaccionar el voto en favor de su candidata a la gubernatura de Aguascalientes Nora Ruvalcava Gámez.*

Denuncias de servidores de la nación y dos audios en poder de Latinus muestran cómo se ha instruido a servidores públicos para movilizar el aparato del gobierno federal con fines electorales rumbo a los comicios del 5 de julio los servidores de la nación entrevistados aseguran que deben convencer a 300 personas por semana utilizando el padrón de beneficiarios de programas sociales en Aguascalientes todo de acuerdo al tamaño de la colonia o de la sección que les corresponde para ir generando una especie de pirámide que va aumentando la cantidad de personas a las que se les pide votar por morena.

Persona 3: *A cada persona nosotros tenemos que estarles hablando para convencerlos de qué ellos como beneficiarios puedan convencer a sus mismos familiares a que voten por Nora para eso y para que no les vayan a quitar su apoyo porque nos dicen que les digamos que si cambia de color probablemente se les pueda quitar el apoyo a ellos, que por eso debemos votar por la candidata Nora Ruvalcaba.*

Persona 2 (reportero): *Antes de convertirse en candidata de morena Nora Ruvalcaba era delegada de programas para el desarrollo del gobierno federal en Aguascalientes, Y tenía bajo su control los padrones de beneficiarios de la Secretaría de Bienestar en la entidad. Los servidores de la nación señalan que quienes operan esta movilización para conseguir votos son las funcionarias federales Berenice Romo subdelegada de la Secretaría de Bienestar en Aguascalientes y Enriqueta Vilchis Hernández coordinadora de programas bienestar en distritos locales de los servidores de la nación en esta entidad, los servidores de la nación aseguran que ellas trabajan en conjunto con Aldo Ruiz Sánchez, coordinador operativo territorial de Morena, y Gil Gutiérrez, consejero nacional de ese partido.*

Persona 4: *Es contra la ley lo que estamos haciendo y de hecho a veces lo hacemos en el horario de la mañana que no se debería de hacer, pero lo hacemos y tenemos que mandar ubicación en donde estamos y a qué hora empezamos puede ser desde la mañana hasta la tarde noche nosotros estamos*

yendo a visitar los beneficiarios por órdenes de la licenciada Bere Romo y Gil Gutiérrez.

Persona 2 (reportero): *Todos ellos se coordinan con el senador de morena José Alejandro Peña Villa quien de acuerdo con los servidores de la nación es el responsable de estas tareas en los seis estados donde habrá elecciones en junio. En un audio de WhatsApp del pasado 18 de abril se escucha Vilchis Hernández coordinadora de programas del bienestar de distritos locales Instruir a funcionarios federales sobre cómo operar.*

Persona 5: *Ustedes que hacer la siguiente labor primero definir sus colonias segundo ver el número de beneficiarios que tienen en esas colonias ok para ahí está restando porque ustedes me tienen que presentar ese informe hay que ir a visitar a la gente para empezar la concientizar a invitarla a participar por eso es importante que también tomen en cuenta todas las propuestas de la maestra Nora para que esos sean nuestras herramientas si para convencer a nuestros posibles o nuestros beneficiarios y que se haga una cadena, ustedes me tienen que poner ahí sus convencidos y yo eso lo voy a hacer en una base de datos porque la tengo que estar mandando cada viernes.*

Persona 2 (reportero): *La operación comenzó desde diciembre del año pasado en un audio en poder de Latinus Jesús Ricardo Barba Parra entonces representante de morena del órgano electoral de Aguascalientes pidió movilizar los padrones del programa sociales en favor de su partido. En una reunión con servidores de la nación Barba Parra resaltó que en las elecciones del dos mil veintiuno morena no llego ni a cien mil votos en Aguascalientes cuando existen ciento setenta y cinco beneficiarios de programas federales en ese estado, ante esto en diciembre del año pasado los apuro a conseguir votos.*

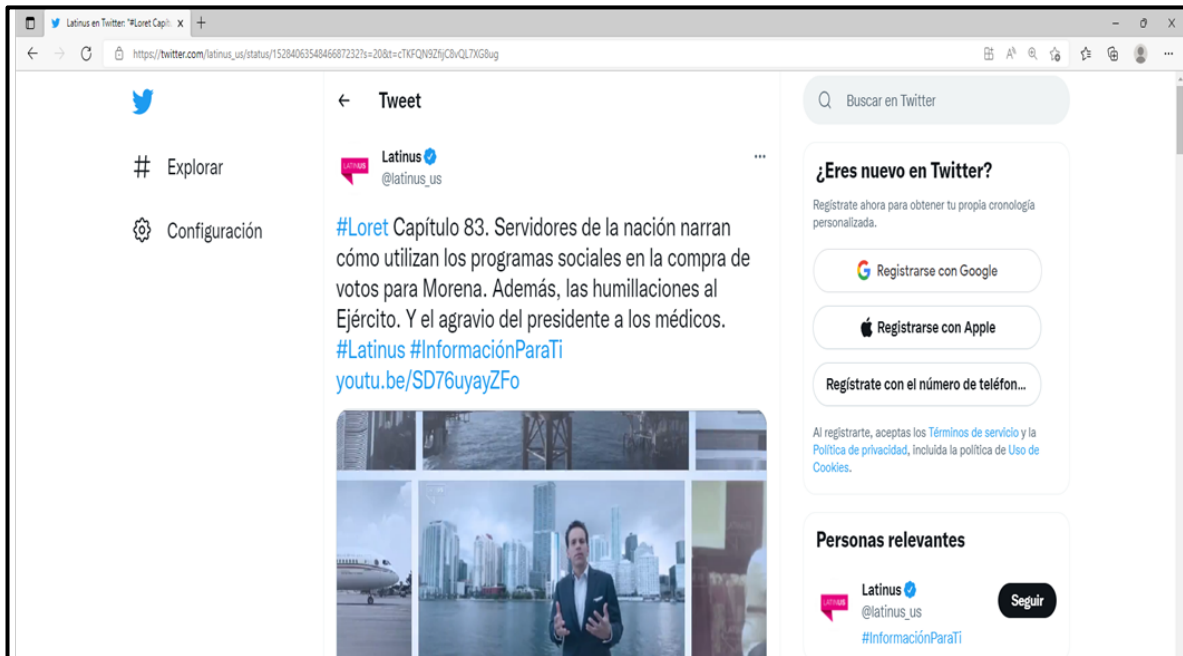
Persona 6: *Muchas gracias por haber venido Ricardo Barba sus órdenes el motivo de la reunión es muy concreto que la cuatro t aterrice bien en Aguascalientes eso como podemos hacerlo con la gobernatura, fuera automático el apoyo tendríamos ciento setenta y cinco mil apoyos de que nos preocupamos, pero no está funcionando así no va a funcionar así y tan es así les digo esos ciento setenta y cinco mil beneficiarios y morena no llego ni a cien mil en la elección del veintiuno entonces andamos haciendo mal las cosas.*

Reportero: *A propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador el uso de programas sociales con fines electorales fue incorporado en el catálogo de delitos graves en el artículo 19 de la Constitución hoy coaccionar el voto a través de los programas sociales amerita prisión preventiva oficiosa y es un delito equiparable con el secuestro y feminicidio.*

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/159/2022/AGS

Persona 2 (reportero): Hemos platicado directamente con el presidente nacional Mario Delgado en el que se nos ha dicho se nos ha obligado a buscar a los convencidos a los promovidos a los beneficiarios y que ellos a su vez nos den cinco personas más de beneficiarios y que de esa manera se pueda construir una red tan grande que no pueda ver quien detenga a morena.”

Asimismo, al abrir el enlace electrónico https://twitter.com/latinus_us/status/1528406354846687232?s=20&t=cTKFQN9ZfijC8vQL7XG8ug, fue posible advertir lo siguiente:



Se trata de una publicación del perfil verificado de Latinus de la red social de Twitter, donde se puede apreciar el siguiente texto:

*“#Loret Capítulo 83. Servidores de la nación narran cómo utilizan los programas sociales en la compra de votos para Morena. Además, las humillaciones al Ejército. Y el agravio del presidente a los médicos.
#Latinus #InformaciónParaTi
<https://youtu.be/SD76uyayZFo>”*

Además, se aprecia un video de duración de un minuto con tres segundos, donde es posible advertir contenido informativo de conformidad con lo siguiente:

Persona 1: “A los soldados los agreden narcos huachicoleros talamontes polleros normalistas están a Merced de todos y el presidente como el niño de la fiesta de la piñata y que todos le peguen.

Mucho se hablado de cómo el gobierno de López Obrador usa los programas sociales para beneficiar a morena grabaciones de funcionarios federales organizando esta trampa testimonios de servidores de la nación contando como los obligan a chantajear a la gente”

Persona 2: “es teatro político Carlos no es real él sabe perfectamente bien que no es real por eso incluso ha querido desviar la atención y el debate del tema de los 500 cubanos al tema de nuestros médicos que no quieren ir al último rincón del país”

Persona 1: “Nos vemos la próxima semana”.

Cabe resaltar que el enlace electrónico referenciado en la publicación de mérito te dirige al video denunciado en el escrito inicial de queja.

Continuando, al abrir el siguiente enlace electrónico <https://twitter.com/CarlosLoret/status/1528141187420499968?s=20&t=cTKFQN9ZfijC8vQL7XG8uq> fue posible advertir lo siguiente:



CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/159/2022/AGS

Se trata de una publicación del perfil verificado del reportero Carlos Loret de Mola de la red social de Twitter, donde se puede apreciar el siguiente texto:

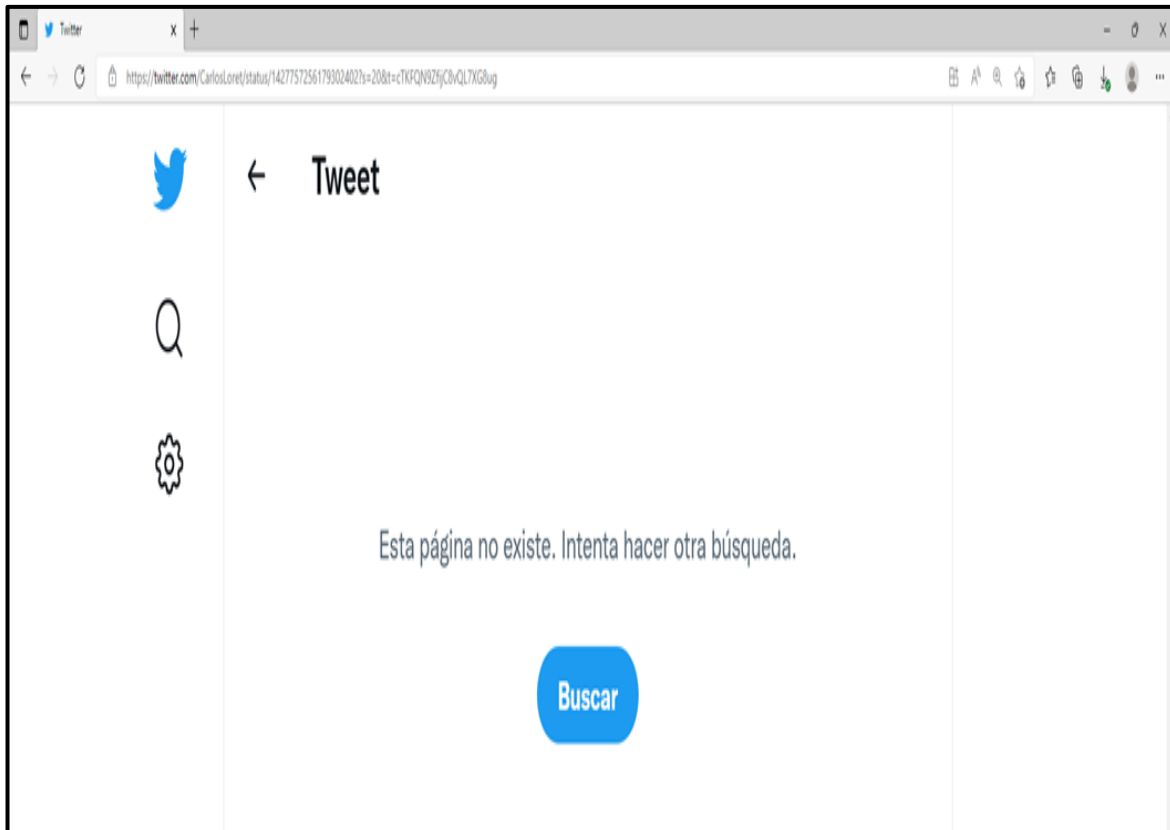
“No se pierdan el reportaje con las grabaciones de los altos funcionarios federales orquestando el uso de programas sociales a favor de Morena en las elecciones de junio. Hay hasta confesiones de “servidores de la nación”. #Loret de @latinus_us : <https://youtu.be/SD76uyayZFo>”

Además, se aprecia un video de duración de treinta y siete segundos, donde es posible advertir al periodista con contenido informativo de conformidad con lo siguiente:

“Mucho se ha hablado de cómo el gobierno de López Obrador usa los programas sociales que son de todos los mexicanos para beneficiar a morena mucho se ha hablado de cómo extorsiona y chantaje a los beneficiarios de estos programas sociales diciéndonos la mentira de que si no votar por morena van a perder los apoyos hoy en latinus le vamos a presentar evidencia de esto qué es un delito electoral grabaciones de funcionarios federales organizando esta trampa testimonios de servidores de la nación contando como los obligan a chantajear a la gente”

Cabe resaltar que el enlace electrónico referenciado en la publicación de mérito te dirige al video denunciado en el escrito inicial de queja.

Por último, al abrir el electrónico <https://twitter.com/CarlosLoret/status/1527757256179302402?s=20&t=cTKFQN9ZfijC8vQL7XG8uq> fue posible advertir lo siguiente:



Aparentemente al abrir el enlace te dirige a la página de la red social de Twitter, sin embargo, no fue posible advertir ningún tipo de contenido.

Por tal motivo, entre las diligencias que la Unidad Técnica realizó para dotar de certeza la conclusión a que se llega, fue requerir a la persona moral Digital Beacon Programatic Services S.A. de C.V. mejor conocida como “LatinUS”, para que confirmará si había realizado las publicaciones señaladas anteriormente, así como para que señalará si se trataba de publicación pagada, y por último para que confirmará si la finalidad era respecto a algún interés político o afinidad a la Coalición “Va por Aguascalientes” Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, así como a su otrora candidata a la gubernatura de Aguascalientes, la C. María Teresa Jiménez Esquivel. Por lo anterior la persona moral requerida dio respuesta en los términos siguientes:

- Sí realizó las publicaciones contenidas en la red social de YouTube y Twitter, únicamente por lo que hace a los perfiles de LatinUS.

CONSEJO GENERAL INE/Q-COF-UTF/159/2022/AGS

- No se trata de publicaciones pagadas, si no de un reportaje en disfrute a su derecho de la libertad de expresión y difusión.
- La finalidad es ser un reportaje publicado en estricto apego a los derechos y garantías constitucionales de libertad de expresión, difusión y prensa.
- Manifiesta que no tiene interés político, afinidad o simpatía con ningún partido político o candidato.

Es por ello que la persona moral Digital Beacon Programatic Services S.A. de C.V., refiere que el alcance de la publicación en comento fue a nivel internacional, destinada al público en general sin ninguna focalización, por lo que adjunta las siguientes capturas de pantalla, donde es posible advertir visualizaciones en 21 entidades federativas, predominando la Ciudad de México con un 91% y Aguascalientes con menos del 1%, así como diferentes países:

Loreto Capitulo 83				Loreto Capitulo 83			
Ubicación geográfica				Ubicación geográfica			
	Vistas	Duración promedio de vistas	Tiempo de reproducción (horas)		Vistas	Duración promedio de vistas	Tiempo de reproducción (horas)
Total	1,174,001	15:23	301,085.6	Total	1,276,211	15:23	327,314.6
Ciudad de México	238,020	20.3 %	15:32	1,174,001	92.0 %	301,085.6	92.0 %
México	161,581	13.8 %	16:05	43,355.6	3.4 %	15:34	15:34
Jalisco	67,844	5.7 %	15:36	25,527.4	2.0 %	16:35	16:35
Nuevo León	66,247	5.6 %	14:32	16,052.1	1.2 %	15:06	15:06
Puebla	48,583	4.1 %	15:37	12,647.8	1.0 %	17:14	17:14
Guatemala	45,809	3.9 %	16:23	12,513.9	1.0 %	12:36	12:36
Tamaulipas	44,303	3.8 %	11:24	8,422.9	0.7 %	16:01	16:01
Veracruz	42,108	3.6 %	15:41	11,008.1	0.9 %	13:04	13:04
Baja California	39,680	3.4 %	16:15	10,750.0	0.8 %	12:36	12:36
Querétaro Arriaga	38,075	3.2 %	15:48	10,034.0	0.8 %	16:01	16:01
Aguascalientes	37,244	3.2 %	11:57	7,420.5	0.6 %	13:04	13:04
Chihuahua	29,995	2.6 %	16:24	8,196.9	0.6 %	17:03	17:03
Yucatán	26,961	2.3 %	15:01	6,679.7	0.5 %	13:09	13:09
Michoacán de Ocampo	24,976	2.1 %	16:02	6,683.0	0.5 %	16:05	16:05
Sinaloa	22,134	1.9 %	15:08	5,584.8	0.4 %	18:47	18:47
Sonora	21,682	1.9 %	15:51	5,731.2	0.4 %	13:02	13:02
Coahuila de Zaragoza	21,352	1.8 %	14:57	5,325.6	0.4 %	12:28	12:28
San Luis Potosí	17,761	1.5 %	15:59	4,735.2	0.4 %	17:10	17:10
Morales	17,740	1.5 %	15:55	4,707.6	0.4 %	12:12	12:12
Quintana Roo	16,391	1.4 %	16:22	4,473.6	0.4 %	14:25	14:25
Hidalgo	15,612	1.3 %	15:58	4,157.3	0.3 %	12:39	12:39

Página	Vistas de una página	Número de clics de página vistas	Porcentaje de clics de página vistas	Extracción	Porcentaje de extracción	Porcentaje de extracción	Valor de página
	24,485	14,638	00:15:37	11,765	66.15 %	53.58 %	0.00 US\$
1. /2022/05/19/loret-capitulo-83/	20,858	11,809	00:16:23	9,847	62.02 %	48.83 %	0.00 US\$
2. /2022/05/19/loret-capitulo-83/	3,288	2,752	00:03:59	2,643	80.71 %	81.71 %	0.00 US\$
3. /2022/05/19/loret-capitulo-83/	308	244	00:02:38	234	75.97 %	75.32 %	0.00 US\$
4. /2022/05/19/loret-capitulo-83/	14	9	00:02:47	9	64.29 %	64.29 %	0.00 US\$

En este sentido, respecto de los elementos mínimos a considerar para identificar el video en referencia como gasto de campaña, es posible advertir por lo que hace a la temporalidad este se difundió el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, por lo que su difusión se encuentra dentro del periodo de campaña; mientras que por lo que hace a la territorialidad, la difusión de dicho video tuvo visualizaciones en 21 entidades federativas, predominando la Ciudad de México con un 91% y Aguascalientes con menos del 1%, así como diferentes países; y por lo que hace a la finalidad, es preciso señalar que la autoridad electoral también se encuentra obligada a ponderar si efectivamente un mensaje o un escrito constituye propaganda electoral, o más bien, una simple manifestación o cristalización de la libertad de expresión.

Es así como, el derecho a la libertad de expresión se encuentra establecido en el artículo 6, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado Mexicano.

Asimismo, en el artículo 7 de nuestra Carta Magna, se establece que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información de ideas, a través de cualquier medio, por lo que mantiene abiertos los canales para el disenso y el cambio político, y contribuye a la formación de la opinión pública sobre asuntos políticos y a la consolidación de un electorado debidamente informado.

En el contexto del sistema interamericano de protección de los derechos fundamentales, los artículos 19, párrafo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 13, párrafo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, disposiciones integradas al orden jurídico nacional en términos de lo previsto por los artículos 1 y 133 de la Constitución Federal, igualmente reconocen el derecho fundamental a la libertad de expresión e información, así como el deber del Estado de garantizarla.

En particular, el artículo 13, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que este ejercicio no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o a la protección de la seguridad nacional o la salud o la moral públicas.

Al respecto la Tesis: 1a. CCIX/2012 (10a.) LIBERTAD DE IMPRENTA. SU MATERIALIZACIÓN EN SENTIDO AMPLIO EN DIVERSAS FORMAS VISUALES,

ES UNA MODALIDAD DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN ENCAMINADA A GARANTIZAR SU DIFUSIÓN⁸ establece que la libertad de imprenta debe entenderse en un sentido amplio, incluso en modo electrónico, con la finalidad de que el contenido armónico de los preceptos 6 y 7 constitucionales puedan sostener que la libertad de imprenta es una modalidad de la libertad de expresión, encaminada a garantizar su difusión.

Lo anterior, se robustece con la tesis jurisprudencial P./J. 24/2007 bajo el rubro: “LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LOS ARTÍCULOS 6o. Y 7o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECEN DERECHOS FUNDAMENTALES DEL ESTADO DE DERECHO”.⁹

Derivado de ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha destacado la importancia fundamental de la libertad de expresión en un régimen democrático, al sostener que el derecho a la libertad de expresión comprende buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección, cuyo ejercicio no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas.¹⁰

Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha enfatizado la importancia de la libre circulación de las ideas para la formación de la ciudadanía y de la democracia representativa, permitiendo un debate abierto sobre los asuntos públicos.¹¹

Aunado a lo anterior, la Suprema Corte determinó la libertad de prensa es una piedra angular para el ejercicio de las libertades de expresión e información. Los medios de comunicación social se cuentan entre los forjadores básicos de la opinión

⁸ Tesis: 1a. CCIX/2012 (10a.) LIBERTAD DE IMPRENTA. SU MATERIALIZACIÓN EN SENTIDO AMPLIO EN DIVERSAS FORMAS VISUALES, ES UNA MODALIDAD DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN ENCAMINADA A GARANTIZAR SU DIFUSIÓN. Registro IUS: 2001674. Todas las tesis y jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación están disponibles para consulta en www.scjn.gob.mx

⁹ Se puede consultar en la siguiente página electrónica <https://sif.scjn.gob.mx/sifsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Clase=DetalleTesisBL&ID=172477&Semanario=0>

¹⁰ Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Tomo 3, enero de 2013, Tribunales Colegiados de Circuito, p. 2036, Tesis: I.7o.C.3 K (10a.), Registro: 2002503.

¹¹ Tesis: 1a. CDXIX/2014 (10a.) LIBERTAD DE EXPRESIÓN. DIMENSIÓN POLÍTICA DE ESTE DERECHO FUNDAMENTAL. Registro IUS: 2008101.

pública en las democracias actuales y es indispensable que tengan aseguradas las condiciones para incorporar y difundir las más diversas informaciones y opiniones.¹²

En esta misma línea, estableció que las libertades tienen tanto una dimensión individual como una dimensión social, y exigen no sólo que los individuos no vean impedida la posibilidad de manifestarse libremente, sino también que se respete su derecho como miembros de un colectivo a recibir información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno. Así, tener plena libertad para expresar, recolectar, difundir y publicar informaciones e ideas es condición para ejercer plenamente otros derechos fundamentales y como elemento determinante de la calidad de la vida democrática en un país, pues si los ciudadanos no tienen plena seguridad de que el derecho los protege en su posibilidad de expresar y publicar libremente ideas y hechos, será imposible avanzar en la obtención de un cuerpo extenso de ciudadanos activos, críticos, comprometidos con los asuntos públicos, atentos al comportamiento y a las decisiones de los gobernantes, capaces de cumplir la función que les corresponde en un régimen democrático.¹³

Asimismo, ha indicado que los medios de comunicación gozan de manera indiscutible del principio de presunción de buena fe en sus actos, y solamente en cada caso concreto se deben analizar las circunstancias particulares para determinar si existe auténtico ejercicio del derecho a informar o simulación que implique un fraude a la ley, por tratarse de propaganda encubierta¹⁴, que pudiera traducirse en el beneficio a un sujeto obligado durante la contienda electoral.

En este orden de ideas, en materia político-electoral, se permite a los titulares de los derechos fundamentales de la libertad de pensamiento, expresión e información, cuestionar e indagar sobre la capacidad e idoneidad de los gobiernos, gobernantes autoridades e instituciones públicas, funcionarios públicos y partidos políticos, entre otros, así como discrepar y confrontar sus propuestas, ideas y opiniones, a fin de posibilitar una opinión pública informada, en la que la ciudadanía esté en condiciones de formarse un criterio respecto de la actuación y resultado de la gestión pública y tener mejores elementos para formarse un criterio en relación al cumplimiento de las ofertas y programas de gobierno que los llevaron al poder, como instrumento eficaz y real para que la sociedad esté en posibilidad de participar

¹² Tesis: 1a. CCXVI/2009 LIBERTADES DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS JUEGAN UN PAPEL ESENCIAL EN EL DESPLIEGUE DE SU FUNCIÓN COLECTIVA. Novena Época Registro: 165758 Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, diciembre de 2009 Materia(s): Constitucional Tesis: 1a. CCXVI/2009 Página: 288.

¹³ Tesis 1ª CCXV/2009, de rubro: LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU IMPORTANCIA EN UNA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL.

¹⁴ Jurisprudencia 29/2010. RADIO Y TELEVISIÓN. LA AUTÉNTICA LABOR DE INFORMACIÓN NO CONTRAVIENE LA PROHIBICIÓN DE ADQUIRIR O CONTRATAR TIEMPO.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/159/2022/AGS

activamente en la toma de decisiones y en su momento contar con un mayor número de elementos que le permitan decidir libremente si en la renovación de los poderes públicos emitirán su voto a favor de los partidos políticos que postularon a los gobernantes que en un determinado momento ejercen el poder, o si por el contrario preferirán elegir otra opción política.

Por lo tanto, en la cobertura que hacen los programas periodísticos y medios impresos, con fines no políticos, se generan noticias, entrevistas, reportajes o crónicas, cuyo contenido versa sobre elementos de naturaleza electoral, sin que ese proceder deba considerarse ilícito al amparo de los límites constitucionales y legales previstos en la normativa, teniendo en consideración que una de las funciones de los medios de comunicación es poner a disposición de la ciudadanía todos los elementos que considere relevantes para la sociedad.

Por lo arriba expresado, y de una valoración conjunta de la existencia de la publicación del video investigado, y atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, este Consejo General considera que la publicación del video "Loret Capítulo 83" está amparado por libertad de prensa en pleno ejercicio de la libertad de expresión de quien las edita y publica, pues aun cuando el quejoso argumenta en su escrito, que dichas notas podrían constituir infracciones a la normativa electoral, por la contratación y difusión de propaganda, soportando su dicho con la aportación enlaces electrónicos, que solo generalizan una información de quien las edita y publica, ya que el contenido del video es imputable al autor.

En ese contexto, no se advierte ningún elemento del que se desprenda que dicho video pueda ser catalogado como propaganda electoral en beneficio de las personas incoadas, toda vez que no se detecta que su difusión haya sido realizada o solicitada por la Coalición "Va por Aguascalientes", integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional y su otrora candidata a la gubernatura de Aguascalientes, la C. María Teresa Jiménez Esquivel, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 en el estado de Aguascalientes, por el contrario, dicha publicación, como ya se mencionó se realizó en marco de la libertad de prensa en pleno ejercicio de la libertad de expresión.

En las relatadas condiciones, al concatenar el conjunto de medios de prueba existentes, esta autoridad electoral tiene elementos de convicción que le permiten determinar lo siguiente:

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/159/2022/AGS

- Que se denunció la producción, edición y difusión de un video a través de la cuenta de la red social de YouTube en el perfil verificado de la plataforma de noticias “LatinUS”, mediante el cual se da a conocer un reportaje sobre el posible uso del padrón de beneficiarios de programas sociales con fines electorales.
- Que las pruebas con las que el quejoso pretendió acreditar su dicho son catalogadas como pruebas técnicas, mismas que al ser vinculadas con las documentales públicas motivo de estudio de la presente resolución generaron certeza de la existencia de los hechos que contienen, en virtud de los razonamientos vertidos en la valoración de las pruebas de la presente resolución.
- Que no existió ninguna pauta pagada a la red social de YouTube por la difusión del video.
- Que la difusión del video se realizó en diferentes estados de la República Mexicana, así como distintos países.
- Que la finalidad del video es ser un reportaje publicado en estricto apego a los derechos y garantías constitucionales de libertad de expresión, difusión y prensa.
- Que el video no presenta propaganda electoral en favor de la Coalición “Va por Aguascalientes”, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional y su otrora candidata a la gubernatura de Aguascalientes, la C. María Teresa Jiménez Esquivel, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 en el estado de Aguascalientes.



Por lo anteriormente expuesto, se considera que no existen elementos que configuren una conducta infractora de lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso i); 54, numeral 1, inciso f); y 79, numeral 1, inciso b), fracciones I y III de Ley General de Partidos Políticos; y 96, numeral 1; 121, numeral 1, incisos i) y j); y 127 del Reglamento de Fiscalización, por lo que, se concluye que la Coalición “Va por Aguascalientes”, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, así como a su otrora candidata a la gubernatura de Aguascalientes, la C. María Teresa Jiménez Esquivel, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 en el estado de Aguascalientes,

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/159/2022/AGS

no vulneraron la normatividad aplicable en materia de origen, destino y aplicación de recursos de los partidos políticos, por ello, el apartado en análisis debe declararse **infundado**

B. Lonas.

Del escrito de queja es posible advertir que la parte quejosa denuncia que, desde el inicio de la campaña electoral del proceso electoral en el Estado de Aguascalientes, se han colocado diversas lonas en todo el Estado de Aguascalientes con propaganda a su juicio, en contra de la C. Nora Ruvalcaba Gámez, candidata a la Gubernatura del estado de Aguascalientes por el partido político MORENA, en las que se señala lo siguiente: "EN ESTA COLONIA ODIAMOS A MORENA DENUNCIAREMOS AL 911 ". Por tal motivo adjunta la prueba técnica consistente en seis imágenes y seis direcciones electrónicas, que fueron valoradas previamente, de conformidad con lo siguiente:

NO. ¹⁵	IMAGEN	DIRECCIÓN ELECTRÓNICA	UBICACIÓN ¹⁶
LONA 1		https://www.google.com.mx/maps/@21.9096768,-102.3042818,3a,75y,148.42h,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1sQu_GAIBTP19YaKGWJqrWJw!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DQu_GAIBTP19YaKGWJqrWJw%26cb_cliente%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D150.30489%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i16384!8i8192	San Miguel el Alto 314 esquina con Rincón de Romos en el Fraccionamiento San Francisco del Arenal del distrito VI
LONA 2		https://www.google.com.mx/maps/@21.9421022,-102.3055729,3a,75y,214.58h,94.41t/data=!3m7!1e1!3m5!1smHHGTdH9IbLI9v5WjAVYGQ!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DmHHGTdH9IbLI9v5WjAVYGQ%26cb_cliente%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D265.92517%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i16384!8i8192	Av. Adolfo López Mateos a un costado de Family Garden en el Fraccionamiento Reserva San Cristóbal del distrito VI.

¹⁵ Identificador dado en el escrito de queja.

¹⁶ Ubicación señalada en el escrito de queja

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/159/2022/AGS

NO. ¹⁵	IMAGEN	DIRECCIÓN ELECTRÓNICA	UBICACIÓN ¹⁶
LONA 3		https://www.google.com.mx/maps/@21.9016238,-102.3091092,3a,75y,69.06h,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1s5BbFcy106wFAARio5CWqh8A!2e0!6shhttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbbnail%3Fpanoid%3D5BbFcy106wFAARio5CWqh8A%26cb_client%3Dmapsv_tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D67.58607%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i16384!8i8192	San Jorge 199 esquina con San Clemente en el Fraccionamiento San Cayetano del distrito VI. AGS. AGS.
Lona 4		https://www.google.com.mx/maps/@21.90051888,-102.3049533,3a,75y,216.19h,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1suBGWLj94bdzeKPx183vgIQ!2e0!6shhttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbbnail%3Fpanoid%3DuBGWLj94bdzeKPx183vgIQ!26cb_client%3Dmapsv_tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D214.17194%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i16384!8i8192	Piracanto 602 esquina con Abedul del Fraccionamiento Las Arboledas del distrito Vi.- AGS. AGS.
LONA 5		https://www.google.com.mx/maps/@21.8946959,-102.2860282,3a,75y,359.93h,90.83t/data=!3m6!1e1!3m4!1sEdZ7ujQJ6GLNQ7shwqCYzA!2e0!7i16384!8i8192	Av. Héroe de Nacozari norte 1292, frente al puente peatonal en la Colonia Gremial del distrito XI.- AGS. AGS
Lona 6		https://www.google.com.mx/maps/@21.93.11719,-102.2929237,3a,75y,171.19h,91.57t/data=!3m6!1e1!3m4!1sBgqv9jHNxldLi0vz6hqxiNw!2e0!7i16384!8i8192	Av. Luis Gil 120 frente a la puerta sur del Fraccionamiento Las Cavas.-

Es preciso mencionar que derivado del análisis a las imágenes presentadas es posible advertir que la imagen presentada en la lona 4 y 5 es la misma.

Por lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización realizó diversas diligencias con la finalidad de obtener mayores elementos de convicción a partir de los indicios aportados con la queja, entre la que destaca la solicitud de inspección ocular y levantamiento de cuestionarios por parte de la Dirección del Secretariado de este Instituto.

Es conveniente puntualizar que los cuestionarios aplicados a los vecinos de la ubicación de la lona o propios transeúntes contenían los cuestionamientos, en el tenor siguiente:

1. Que indicaran si en el periodo comprendido del 03 de abril de 2022 a la fecha del levantamiento, se había observado una lona con las siguientes características: en la parte superior de fondo color azul y en letras mayúsculas color blanco el texto “EN ESTA COLONIA ODIAMOS A MORENA”; mientras que, en la parte inferior de fondo color blanco, primero, en letras mayúsculas color negro el texto “DENUNCIAREMOS AL”, y segundo, en tres recuadros de color rojo los números “911”, y se procedía a mostrar la imagen de la lona correspondiente en cada una de las direcciones señaladas por la parte quejosa.

2. Si su respuesta era afirmativa al punto anterior, se les solicitó señalaran si habían observado a la persona o personas que colocaron la lona. En su caso, se les cuestionó sobre si se les identifica como vecinos, de ser el caso, o si dichas personas tenían algún símbolo o elemento gráfico que los identificara como parte de algún partido.

Por tal motivo, se obtuvo tres actas circunstanciadas, de conformidad con lo siguiente:

- INE/OE/JD/AGS/03/CIRC/005/2022
- INE/OE/JD/AGS/01/CIRC/004/2022
- OE/006/03-06-22

De este modo es posible advertir que en ninguna de las seis direcciones se encontraba colocada la lona denunciada y/o algún otro material propagandístico, de la misma forma es posible identificar las siguientes respuestas:

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/159/2022/AGS

NO.	ENTREVISTADO	RESPUESTAS DE LOS ENTREVISTADOS		
		PREGUNTA 1	PREGUNTA 2	OBSERVACIONES
Lona 1	Persona no identificada	Sí vio la lona	No vio quien la colocó	No hizo aclaraciones
	Persona no identificada	Sí vio la lona	No vio quien la colocó	No hizo aclaraciones
	Persona no identificada	Sí vio la lona	No vio quien la colocó	No hizo aclaraciones
	Persona no identificada	No vio la lona	No vio quien la colocó	No hizo aclaraciones
Lona 2	Las personas encontradas no quisieron responder			
Lona 3	Persona no identificada	No vio nada	No hizo aclaraciones	No hizo aclaraciones
	Persona no identificada	Sí vio la lona	Menciona que después la quitaron	No hizo aclaraciones
	Persona no identificada	No vio la lona	No hizo aclaraciones	No hizo aclaraciones
	Persona no identificada	No vio la lona	No hizo aclaraciones	No hizo aclaraciones
Lona 4	Persona no identificada	Sí vio la lona	No sabe quién la puso	No hizo aclaraciones
	Persona no identificada	Sí vio la lona	No hizo aclaraciones	No hizo aclaraciones
	Persona no identificada	Sí vio la lona	No vio quién la puso	No hizo aclaraciones
	Persona no identificada	Sí vio la lona	No vio quién la puso	No hizo aclaraciones
Lona 5	Persona no identificada	<i>"Para que le echo mentiras, yo realmente nunca la llegué a ver, soy muy distraído, no me fijé nunca si había alguna manta o lona fijada."</i>	<i>"Si no vi la lona, pues menos voy a saber quién la puso. No sé".</i>	<i>"No hago ninguna porque no me fijé si había alguna manta o lona y no vi a nadie ponerlas".</i>
	Persona no identificada	<i>"Sí la vi puesta, pero no puedo decir desde cuándo, porque no me acuerdo cuando la fijaron y tampoco sé cuándo la quitaron."</i>	<i>"No sé quién la puso, no me acuerdo cuando sucedió, sólo la vi puesta."</i>	<i>"No tengo aclaraciones que hacer porque no sé nada más allá de lo que acabo de decirle"</i>
Lona 6	Persona no identificada	Sí vio la lona	Menciona que después la quitaron	Dijo saber que la colocación fue en martes o jueves de esa semana.
	Persona no identificada	Sí vio la lona	No vio quien la colocó	No hizo aclaraciones
	Persona no identificada	No vio la lona	No vio personas colocando propaganda	No hizo aclaraciones
	Persona no identificada	No vio la lona	No vio personas colocando lonas	No hizo aclaraciones

Por tal motivo respecto de los cuestionarios levantados es posible advertir que:

- Respecto de las lonas 1, 3, 4, 5 y 6, la mayoría se percató de la existencia de la lona.
- Las personas que hicieron referencia a un periodo mencionaron que fue solamente por un día.
- De las personas que vieron puestas las lonas, ninguna pudo informar sobre la o las personas que las colocaron.
- Por lo que hace a la lona 2, las personas transeúntes se negaron a contestar el cuestionario.

Toda vez que de las inspecciones oculares realizadas se desprendió el domicilio de tres escuelas, el domicilio de un particular y de una persona moral, la Unidad Técnica de Fiscalización requirió en cada uno de los domicilios señalados, de conformidad con lo siguiente:

LONA	REQUERIDO
Lona 2	Representante Legal de Persona Moral Desarrollos y Construcciones del Centro, S.A. de C.V.
Lona 2	Escuela privada "Family Garden" en Aguascalientes.
Lona 3	Director o Directora de la Escuela Pública Preescolar "Fernando Montes de Oca"
Lona 4	Propietario del bien inmueble señalado por el quejoso.
Lona 5	Directora o Director de la Escuela Primaria "Rafael Arellano Valle"

Por lo que hace a las lonas 1 y 6, no se giró oficio de solicitud toda vez que, de conformidad con lo indicado en las actas circunstanciadas indicadas líneas arriba, se trata de terrenos sin casa habitación, local comercial u otros.

De este modo fue posible obtener lo siguiente:

i) Escuela Pública Preescolar "Fernando Montes de Oca"

La Unidad Técnica solicitó a la Directora o Director de la Escuela Preescolar "Fernando Montes de Oca", informará si había observado una lona como la que se denuncia (lona 3), dentro de las instalaciones de su escuela, de resultar afirmativo se le solicitó informará si había una autorización de por medio e indicará la finalidad de la colocación de dicha lona. Por tal motivo la Directora de la escuela en referencia, respondió:

- Que el día 17 de mayo se percató de la existencia de una lona como la señalada.
- Que no se pidió permiso, y que no brindó autorización para la colocación.
- Que desconoce la finalidad.
- Dentro de las aclaraciones, menciona que una persona arrancó la lona.

ii) Escuela Pública Primaria “Rafael Arellano Valle”

La Unidad Técnica solicitó a la Directora o Director de la Escuela Primaria “Rafael Arellano Valle”, informará si había observado una lona como la que se denuncia (lona 5), dentro de las instalaciones de su escuela, de resultar afirmativo se le solicitó informará si había una autorización de por medio e indicará la finalidad de la colocación de dicha lona. Por tal motivo la Directora de la escuela en referencia, respondió:

- Que no observó ninguna lona.
- Que no recibió notificación de incidencia de ninguno de sus trabajadores, de haberse percatado de la existencia de dicha lona.

iii) Escuela Privada “Family Garden” en Aguascalientes.

La Unidad Técnica solicitó a la Escuela Privada “Family Garden” en Aguascalientes, informará si había observado una lona como la que se denuncia (lona 2), dentro de las instalaciones de su escuela, de resultar afirmativo se le solicitó informará si había una autorización de por medio e indicará la finalidad de la colocación de dicha lona. Por tal motivo la Directora de la escuela en referencia, respondió:

- Que nadie del plantel que dirige, observó, ni dio autorización de colocar la lona que se indica.

iv) Persona Moral Desarrollos y Construcciones del Centro, S.A. de C.V.

La Unidad Técnica solicitó a la Persona Moral Desarrollos y Construcciones del Centro, S.A. de C.V., informará si había observado una lona como la que se

denuncia (lona 2), dentro de sus instalaciones, de resultar afirmativo se le solicitó informar si había una autorización de por medio e indicará la finalidad de la colocación de dicha lona. Por tal motivo el representante legal de Persona Moral Desarrollos y Construcciones del Centro, S.A. de C.V. respondió que no había observado una lona como la que se denuncia.

v) Propietaria o propietario del bien inmueble ubicado en Piracanto 602 esquina con Abedul del Fraccionamiento Las Arboleadas, Aguascalientes, Aguascalientes.

La Unidad Técnica solicitó a la Propietaria o propietario del bien inmueble ubicado en el Fraccionamiento Las Arboleadas, Aguascalientes, Aguascalientes, informar si había observado una lona como la que se denuncia (lona 4), dentro de las instalaciones de su propiedad, de resultar afirmativo se le solicitó informar si había una autorización de por medio e indicará la finalidad de la colocación de dicha lona. Por tal motivo el C. José de Jesús Avelar Márquez informó que:

“También le informo que en ningún momento y bajo ninguna circunstancia he tenido en mi propiedad ninguna lona ni a favor, ni en contra de ningún partido político y mucho menos con las características que se menciona en su oficio, recalando la falsedad de dicha afirmación. Así mismo le informo que en ningún momento vi ninguna lona en mi casa ni en las adjuntas y no se de alguna persona que las haya estado colocando ni para qué fin.”

En este sentido, respecto de los elementos mínimos a considerar para identificar las lonas como gasto de campaña, es posible advertir por lo que hace a la **temporalidad** que no fue posible establecer con suficiente claridad las fechas en las que fueron colocadas las lonas, toda vez que de las inspecciones y cuestionarios levantados no se tiene certeza sobre la existencia de las lonas y en todo caso no es posible establecer las fechas exactas en las que las fueron colocadas, por lo tanto dicho elemento no se actualiza

Por lo que hace a la **territorialidad**, no fue posible establecer con certeza el área geográfica donde se colocaron las lonas, toda vez que de las inspecciones oculares no se advirtió la existencia del material denunciado, mientras que por lo que hace a los cuestionarios levantados solo fue posible advertir el material en algunas ubicaciones, en este sentido, dicho elemento no se actualiza.

Respecto a la **finalidad**, no es posible establecer que la colocación de las seis lonas generase un beneficio a la Coalición “Va por Aguascalientes”, integrada por los

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/159/2022/AGS

partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional y su otrora candidata a la gubernatura de Aguascalientes, la C. María Teresa Jiménez Esquivel, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 en el estado de Aguascalientes, por lo tanto dicho elemento no se actualiza.

En ese contexto, analizando el contenido de los mensajes y de la posible colocación de las lonas que dieron origen al presente análisis y su necesaria elaboración, no se advierte ningún elemento del que se desprenda que dichas lonas puedan ser catalogadas como propaganda electoral en beneficio de las personas incoadas, toda vez que no se detecta que hayan sido realizadas o solicitadas por la Coalición “Va por Aguascalientes”, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional y su otrora candidata a la gubernatura de Aguascalientes, la C. María Teresa Jiménez Esquivel, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 en el estado de Aguascalientes.

En las relatadas condiciones, al concatenar el conjunto de medios de prueba existentes, esta autoridad electoral tiene únicamente elementos de convicción que le permiten determinar lo siguiente:

- Que se denunció la colocación de 6 lonas en distintos domicilios de Aguascalientes.
- Que las lonas no presentan propaganda electoral en favor de la Coalición “Va por Aguascalientes”, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional y su otrora candidata a la gubernatura de Aguascalientes, la C. María Teresa Jiménez Esquivel, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 en el estado de Aguascalientes.

Una vez que esta autoridad electoral ha valorado la totalidad de los elementos probatorios encontrados, se concluye que no existen mayores elementos que generen certeza del origen del dinero con el que fue pagada la elaboración y colocación de la seis lonas denunciadas; en consecuencia, no es posible sostener que los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, así como la C. María Teresa Jiménez Esquivel tienen responsabilidad alguna por el pago de la elaboración y colocación de lonas.

En las relatadas condiciones, y toda vez que no se desprende que la necesaria elaboración y colocación de seis lonas tuvieran que ser reportadas por la Coalición

“Va por Aguascalientes”, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional y su otrora candidata a la gubernatura de Aguascalientes, la C. María Teresa Jiménez Esquivel, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 en el estado de Aguascalientes, se considera que ante la duda razonable sobre el particular, debe aplicarse a favor de los denunciados el principio jurídico “*In dubio pro reo*”, reconocido por el Derecho Administrativo Sancionador en materia electoral.

A mayor abundamiento, resulta aplicable el criterio vertido en la siguiente Jurisprudencia:

DUDA ABSOLUTORIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. El aforismo “*in dubio pro reo*” no tiene más alcance que el consistente en que en ausencia de prueba plena debe absolverse al acusado. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Parte : 75, Marzo de 1994. Tesis: VII. P. J/37. Página: 63.

Asimismo, sirve como sustento de la aplicabilidad del principio de “*in dubio pro reo*”, dentro de los procedimientos administrativos, la tesis siguiente:

DUDA SOBRE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. APLICACIÓN DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. MULTAS. Al no ser razonable que una infracción se haya cometido, tratándose de multas por violación a las disposiciones administrativas legales, resulta aplicable el principio jurídico *in dubio pro reo*. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Parte: 33 Sexta. Parte Tesis: Página: 24.

También resultan aplicables las siguientes tesis relevantes identificadas con las claves LIX/2001 y XVII/2005, respectivamente, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son al tenor siguiente:

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.- De la interpretación de los artículos 14, apartado 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8o., apartado 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por nuestro país en términos del 133 de la Constitución federal, aplicados conforme al numeral 23, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que el principio de presunción de inocencia que informa al sistema normativo mexicano, se vulnera con la emisión de una Resolución condenatoria o sancionatoria, sin que se demuestren suficiente y

fehacientemente los hechos con los cuales se pretenda acreditar el supuesto incumplimiento a las disposiciones previstas en las legislaciones. Lo anterior en razón de que dicha presunción jurídica se traduce en un derecho subjetivo de los gobernados a ser considerados inocentes de cualquier delito o infracción jurídica, mientras no se presente prueba bastante que acredite lo contrario, en el entendido que, como principio de todo Estado constitucional y democrático de derecho, como el nuestro, extiende su ámbito de aplicación no sólo al ámbito del proceso penal sino también cualquier Resolución, tanto administrativa como jurisdiccional, con inclusión, por ende, de la electoral, y de cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio o limitativo de los derechos del gobernado.

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. - *La presunción de inocencia es una garantía del acusado de una infracción administrativa, de la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado como inocente mientras no se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que las autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder, involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios, con elementos simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre su autoría o participación en los hechos imputados. A través de esta garantía se exige, que las autoridades sancionadoras reciban o recaben pruebas idóneas, aptas y suficientes, con respeto irrestricto de todas las formalidades y requisitos del debido proceso legal, sin afectación no autorizada de los derechos fundamentales, y mediante investigaciones exhaustivas y serias, dirigidas a conocer la verdad objetiva de los hechos denunciados y de los relacionados con ellos, respecto al objeto de la investigación, mientras no se cuente con los elementos con grado suficiente de convicción sobre la autoría o participación en los mismos del indiciado, para lo cual deberán realizarse todas las diligencias previsibles ordinariamente a su alcance, con atención a las reglas de la lógica y a las máximas de experiencia, dentro de la situación cultural y de aptitud media requerida para ocupar el cargo desempeñado por la autoridad investigadora, y que esto se haga a través de medios adecuados, con los cuales se agoten las posibilidades racionales de la investigación, de modo que, mientras la autoridad sancionadora no realice todas las diligencias necesarias en las condiciones descritas, el acusado se mantiene protegido por la presunción de inocencia, la cual desenvuelve su protección de manera absoluta, sin verse el indiciado en la necesidad de desplegar actividades probatorias en favor de su inocencia, más allá de la estricta negación de los hechos imputados, sin perjuicio del derecho de hacerlo; pero cuando la autoridad responsable cumple adecuadamente con sus deberes y ejerce en forma apropiada sus poderes de investigación, resulta factible superar la presunción de inocencia con la apreciación cuidadosa y exhaustiva de los indicios encontrados y su enlace debido, y determinando, en su caso, la autoría o participación del inculpado, con el material obtenido que produzca el convencimiento suficiente, el cual debe impeler al procesado a*

aportar los elementos de descargo con que cuente o a contribuir con la formulación de inferencias divergentes, para contrarrestar esos fuertes indicios, sin que lo anterior indique desplazar el onus probandi, correspondiente a la autoridad, y si el indiciado no lo hace, le pueden resultar indicios adversos, derivados de su silencio o actitud pasiva, porque la reacción natural y ordinaria de una persona imputada cuya situación se pone en peligro con la acumulación de pruebas incriminatorias en el curso del proceso, consiste en la adopción de una conducta activa de colaboración con la autoridad, en pro de sus intereses, encaminada a desvanecer los indicios perniciosos, con explicaciones racionales encaminadas a destruirlos o debilitarlos, o con la aportación de medios probatorios para acreditar su inocencia.

Cabe destacar, que el principio *in dubio pro reo*, en sentido negativo, prohíbe a una autoridad o tribunal condenar al acusado si no obtiene la certeza sobre la verdad de la imputación. Ahora bien, la exigencia positiva de dicho principio obliga a absolver al acusado al no obtener la certeza que implique acreditar los hechos por los que se procesa a un individuo.

Asimismo, cabe advertir que el principio *in dubio pro reo* es un beneficio para el sujeto imputado en el caso de que exista la duda del juzgador frente a las pruebas que obran dentro del expediente, por lo que si en el estudio del presente asunto no se acredita de manera fehaciente la presunta infracción cometida por el sujeto denunciado, al no existir prueba plena que corrobore los hechos imputados, esta autoridad, siguiendo los principios que rigen el *ius puniendi* se encuentra imposibilitada para emitir una Resolución condenatoria.

En este sentido, en nuestro sistema jurídico prevalece el principio de presunción de inocencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 16, en relación con el 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo establecido en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado mexicano e integrados al orden jurídico mexicano en términos de lo dispuesto en el artículo 133 constitucional, a saber, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, vigente en la República desde el veintitrés de junio de mil novecientos ochenta y uno (artículo 14, apartado 2), y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, vigente en la República desde el veinticuatro de marzo de mil novecientos ochenta (artículo 8, apartado 2).

En los procedimientos sancionadores electorales, tal presunción de inocencia se traduce en el derecho subjetivo de los partidos políticos denunciados a ser considerados inocentes de cualquier infracción, mientras no se presente prueba bastante para derrotarla y de cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio.

En este sentido, la máxima *in dubio pro reo* (presunción de inocencia) obliga a absolver en caso de duda sobre la culpabilidad o responsabilidad del acusado.

Sirven de apoyo a lo anterior, la tesis relevante emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se transcribe a continuación:

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE RECONOCERSE ESTE DERECHO FUNDAMENTAL EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.—El artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, reconoce expresamente el derecho de presunción de inocencia, consagrada en el derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8°, apartado 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, en términos del artículo 133 de la Constitución federal, como derecho fundamental, que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento jurisdiccional o administrativo que se desarrolle en forma de juicio, consecuencias previstas para un delito o infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece una adecuada tutela de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el debido proceso. En atención a los fines que persigue el derecho sancionador electoral, consistentes en establecer un sistema punitivo para inhibir conductas que vulneren los principios rectores en la materia, como la legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y objetividad, es incuestionable que el derecho constitucional de presunción de inocencia ha de orientar su instrumentación, en la medida que los procedimientos que se instauran para tal efecto, pueden concluir con la imposición de sanciones que incidan en el ámbito de derechos de los gobernados.

Recurso de apelación. SUP-RAP-71/2008.—Actor: Partido Verde Ecologista de México.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—2 de julio de 2008.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretario: Fabricio Fabio Villegas Estudillo.”

En consecuencia, del análisis de las constancias que obran en el expediente de mérito y al adminicular los elementos de prueba obtenidos por la Unidad Técnica de Fiscalización, atendiendo tanto a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, como a los principios rectores de la función electoral, esta autoridad electoral Nacional concluye que no se cuenta con elementos de convicción de que la

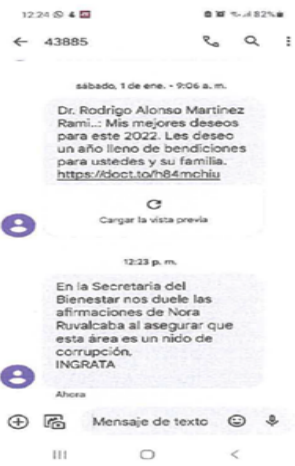
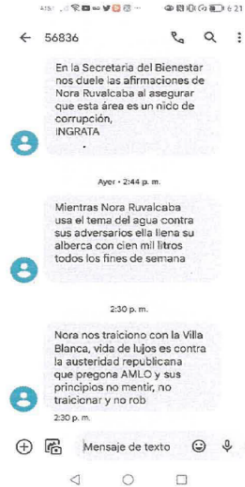
Coalición “Va por Aguascalientes”, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional y su otrora candidata a la gubernatura de Aguascalientes, la C. María Teresa Jiménez Esquivel hubiesen realizado los pagos para la elaboración y colocación de seis lonas materia del presente apartado, así como tampoco se cuenta con certeza de que el concepto por seis lonas haya beneficiado a dichos institutos políticos y su entonces candidata.

Por lo anteriormente expuesto, se considera que no existen elementos que configuren una conducta infractora de lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso i); 54, numeral 1, inciso f); y 79, numeral 1, inciso b), fracciones I y III de Ley General de Partidos Políticos; y 96, numeral 1; 121, numeral 1, incisos i) y j); y 127 del Reglamento de Fiscalización, por lo que, se concluye que la Coalición “Va por Aguascalientes”, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, así como a su otrora candidata a la gubernatura de Aguascalientes, la C. María Teresa Jiménez Esquivel, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 en el estado de Aguascalientes, no vulneraron la normatividad aplicable en materia de origen, destino y aplicación de recursos de los partidos políticos, por ello, el apartado en análisis debe declararse infundado.

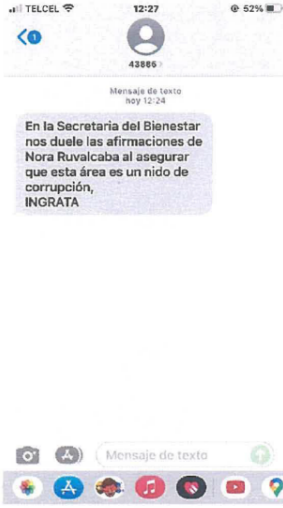
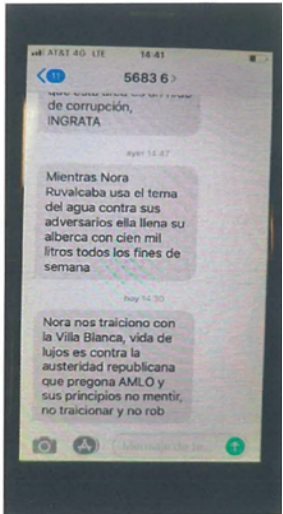
C. Difusión de mensajes SMS

Del escrito de queja se advierte que la parte quejosa denuncia que, desde el inicio de la campaña (sin indicar una temporalidad específica) del presente proceso electoral en el estado de Aguascalientes, se han difundido mensajes SMS provenientes de los números 43885, 56836 y 59895 en apoyo a la C. María Teresa Esquivel y contra de la C. Nora Ruvalcaba Gámez, candidata a la Gubernatura del estado de Aguascalientes por el partido político MORENA, ya que a su juicio conllevan un llamado implícito a no votar por Morena, por tal motivo adjunta 11 capturas de pantalla tal y como se muestra:

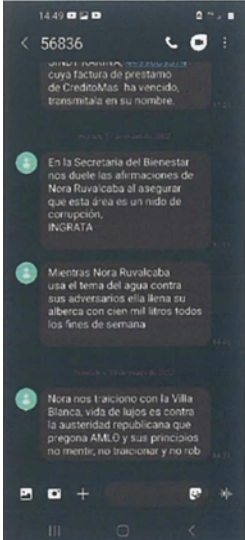
CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/159/2022/AGS

NO.	NÚMERO TELEFÓNICO	CAPTURA DE PANTALLA	TRANSCRIPCIÓN DEL MENSAJE
1	43885		<p><i>"Dr. Rodrigo Alonso Martínez Rami... Mis mejores deseos para este 2022. Les deseo un año lleno de bendiciones para ustedes y su familia. https://doc.to/h84mchlu"</i></p> <p><i>"En la Secretaría del Bienestar nos duelen las afirmaciones de Nora Ruvalcaba al asegurar que esta área es un nido de corrupción. INGRATA"</i></p>
2	56836		<p><i>"En la Secretaría del Bienestar nos duelen las afirmaciones de Nora Ruvalcaba al asegurar que esta área es un nido de corrupción. INGRATA"</i></p> <p><i>"Mientras Nora Ruvalcaba usa el tema del agua contra sus adversarios ella llena su alberca con cien mil litros todos los fines de semana".</i></p> <p><i>"Nora nos traicionó con la Villa Blanca, vida de lujos es contra la austeridad republicana que pregona AMLO y sus principios no mentir, nos traicionar y no rob"</i></p>

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/159/2022/AGS

NO.	NÚMERO TELEFÓNICO	CAPTURA DE PANTALLA	TRANSCRIPCIÓN DEL MENSAJE
3	43885		<p><i>"En la Secretaría del Bienestar nos duelen las afirmaciones de Nora Ruvalcaba al asegurar que esta área es un nido de corrupción. INGRATA"</i></p>
4	56836		<p><i>"de corrupción. INGRATA"</i></p> <p><i>"Mientras Nora Ruvalcaba usa el tema del agua contra sus adversarios ella llena su alberca con cien mil litros todos los fines de semana".</i></p> <p><i>"Nora nos traicionó con la Villa Blanca, vida de lujos es contra la austeridad republicana que pregona AMLO y sus principios no mentir, nos traicionar y no rob"</i></p>

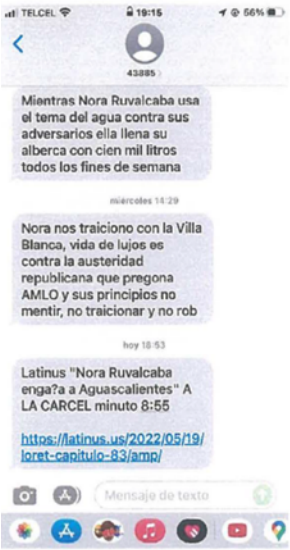
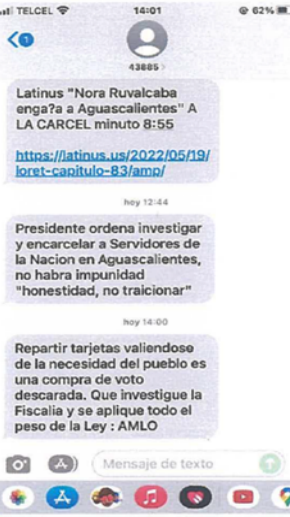
CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/159/2022/AGS

NO.	NÚMERO TELEFÓNICO	CAPTURA DE PANTALLA	TRANSCRIPCIÓN DEL MENSAJE
5	56836		<p><i>"alberca con cien mil litros todos los fines de semana".</i></p> <p><i>"Nora nos traicionó con la Villa Blanca, vida de lujos es contra la austeridad republicana que pregonó AMLO y sus principios no mentir, nos traicionar y no rob"</i></p> <p><i>"Latinus Nora Ruvalcaba engaña a Aguascalientes LA CÁRCEL minuto 8:55 https://latinus.us/2022/05/19/loret-capitulo-83/amp/"</i></p>
6	56836		<p><i>"En la Secretaría del Bienestar nos duelen las afirmaciones de Nora Ruvalcaba al asegurar que esta área es un nido de corrupción. INGRATA"</i></p> <p><i>"Mientras Nora Ruvalcaba usa el tema del agua contra sus adversarios ella llena su alberca con cien mil litros todos los fines de semana".</i></p> <p><i>"Nora nos traicionó con la Villa Blanca, vida de lujos es contra la austeridad republicana que pregonó AMLO y sus principios no mentir, nos traicionar y no rob"</i></p>

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/159/2022/AGS

NO.	NÚMERO TELEFÓNICO	CAPTURA DE PANTALLA	TRANSCRIPCIÓN DEL MENSAJE
7	NO SE VISUALIZA		<p><i>"En la Secretaría del Bienestar nos duelen las afirmaciones de Nora Ruvalcaba al asegurar que esta área es un nido de corrupción. INGRATA"</i></p> <p><i>"Mientras Nora Ruvalcaba usa el tema del agua contra sus adversarios ella llena su alberca con cien mil litros todos los fines de semana".</i></p>
8	56836		<p><i>"que esta área es un nido de corrupción. INGRATA"</i></p> <p><i>"Mientras Nora Ruvalcaba usa el tema del agua contra sus adversarios ella llena su alberca con cien mil litros todos los fines de semana".</i></p> <p><i>"Nora nos traicionó con la Villa Blanca, vida de lujos es contra la austeridad republicana que pregona AMLO y sus principios no mentir, nos traicionar y no rob"</i></p> <p><i>"Latinus Nora Ruvalcaba engaña a Aguascalientes LA CÁRCEL minuto 8:55 https://latinus.us/2022/05/19/loret-capitulo-83/amp/"</i></p>

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/159/2022/AGS

NO.	NÚMERO TELEFÓNICO	CAPTURA DE PANTALLA	TRANSCRIPCIÓN DEL MENSAJE
9	43885		<p><i>"Mientras Nora Ruvalcaba usa el tema del agua contra sus adversarios ella llena su alberca con cien mil litros todos los fines de semana".</i></p> <p><i>"Nora nos traicionó con la Villa Blanca, vida de lujos es contra la austeridad republicana que pregonaba AMLO y sus principios no mentir, no traicionar y no robar"</i></p> <p><i>"Latinus Nora Ruvalcaba engaña a Aguascalientes LA CÁRCEL minuto 8:55 https://latinus.us/2022/05/19/loret-capitulo-83/amp/"</i></p>
10	43885		<p><i>"Latinus Nora Ruvalcaba engaña a Aguascalientes LA CÁRCEL minuto 8:55 https://latinus.us/2022/05/19/loret-capitulo-83/amp/"</i></p> <p><i>"Presidente ordena investigar y encarcelar a Servidores de la Nación en Aguascalientes, no habrá impunidad honestidad, no traicionar"</i></p> <p><i>"Repartir tarjetas valiéndose de la necesidad del pueblo es una compra de voto descarada. Que investigue la Fiscalía y se aplique todo el peso de la Ley: AMLO"</i></p>

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/159/2022/AGS

NO.	NÚMERO TELEFÓNICO	CAPTURA DE PANTALLA	TRANSCRIPCIÓN DEL MENSAJE
11	56836		<p><i>"pregona AMLO y sus principios no mentir, nos traicionar y no rob"</i></p> <p><i>"Latinus Nora Ruvalcaba engaña a Aguascalientes LA CÁRCEL minuto 8:55 https://latinus.us/2022/05/19/loret-capitulo-83/amp/"</i></p> <p><i>"Presidente ordena investigar y encarcelar a Servidores de la Nación en Aguascalientes, no habrá impunidad honestidad, no traicionar"</i></p> <p><i>"Repartir tarjetas valiéndose de la necesidad del pueblo es una compra de voto descarada. Que investigue la Fiscalía y se aplique todo el peso de la Ley: AMLO"</i></p>

Es preciso mencionar que derivado del análisis a las imágenes presentadas es posible advertir:

- Que en la primera imagen es posible apreciar un mensaje y una dirección electrónica que no tiene relación con el fondo del presente asunto.
- Que se hace referencia a la difusión de mensajes SMS a través de los números 43885, 56836 y 59895, sin embargo de las capturas presentadas solo es posible verificar los números 43885 y 56836.
- Que de las imágenes presentadas no es posible visualizar con claridad la fecha en la que se recibieron los mensajes.
- Que no es posible apreciar el número telefónico que recibió dichos mensajes.

Por lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización llevó a cabo diversas diligencias con la finalidad de obtener mayores elementos de convicción a partir de los indicios aportados, entre los que destacan las solicitudes de información a las autoridades competentes en la materia, esto es a la Policía Cibernética de Aguascalientes, Guardia Nacional y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. En este sentido fue posible obtener lo siguiente:

i) Dirección de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública de Aguascalientes.

La Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Policía Cibernética de Aguascalientes, informará sobre la existencia de procedimientos de investigación relacionados con los mensajes adjuntados en las capturas de pantalla, así como un rastreo sobre el o los titulares de los números telefónicos. Por tal motivo la Dirección referida respondió:

- Que no había encontrado información que relacionara los números telefónicos mostrados en las capturas de pantalla.
- Que al ser números de cinco y no diez dígitos, no le fue posible determinar al titular de dichos números en relación con la página oficial del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

ii) Dirección General Científica de la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La autoridad fiscalizadora solicitó a la Guardia Nacional informará sobre la existencia de procedimientos de investigación relacionados con los mensajes adjuntados en las capturas de pantalla, así como un rastreo sobre el o los titulares de los números telefónicos. Por tal motivo la Dirección referida, a través de un informe refiere:

- Que la dirección electrónica <https://latinus.us/2022/05/19/loret-capitulo-83/amp/> que aparece en los mensajes de texto corresponde a una nota periodística y un video del portal web de LatinUs.¹⁷
- Que de la búsqueda en internet del número 43885 y 56836, se obtuvo páginas que reportan presuntas estafas y spam.
- Que dentro de sus archivos no había encontrado denuncias o investigaciones que relacionara los números telefónicos 43885 y 56836.

¹⁷ Cabe mencionar que el video referenciado, corresponde al mismo que se analiza en el apartado anterior.

- Que los SMS pueden ser enviados de manera anónima, desde alguna aplicación o plataforma web, sin que pueda ser rastreado por lo que no se puede precisar quien es el emisor y/o proveedor de servicio de este tipo de mensajes.

Por lo anterior, cobra relevancia puntualizar literalmente lo señalado de manera final por la Dirección en referencia:

*“Los SMS es un acrónimo de la palabra en inglés Short Message Service y en español “Servicio de Mensajes Cortos”, el cual se refiere a los mensajes de texto que se envían de un teléfono móvil a otro de entre 160 hasta 224 caracteres, siendo una forma rápida de enviar un recado corto a alguien, también **se pueden enviar de otras maneras como: De un teléfono digital a otro, desde aplicaciones dentro de un navegador web, desde aplicaciones de voz sobre IP como la herramienta de comunicación Skype, desde aplicaciones SMS como parte de una estrategia de marketing, desde clientes de mensajería instantánea.***

Hay SMS por remitente corto, largo o enmascarado, de acuerdo al tipo de remitente desde el cual llega el mensaje, en la actualidad se clasifica el SMS por caso de uso, como son los masivos, conocidos en inglés como “bulk SMS” y que se ocupan para campañas de cobranza o bien de SMS marketing. Los SMS transaccionales, que son aquellos que se envían cuando sucede un evento.

Cuando los SMS se utilizan para mantener una conversación con el usuario, se les conoce como SMS conversacionales, o chat SMS, el cual puede ser con un agente en un contactcenter, o bien con un bot (chat bot) o la combinación de ambos.

*Los mensajes **SMS masivos o Bulk SMS son mensajes de texto enviados a cualquier tipo de teléfono a través de una plataforma web a miles de celulares o clientes, estos envíos diferencian rubros, ya sea para campañas de fidelización, notificaciones, recordatorios, SMS marketing u otras estrategias de un solo canal.***

*Por tal motivo y debido a que los mensajes de texto **SMS pueden ser enviados de manera anónima**, desde alguna aplicación o plataforma web, sin que pueda ser rastreado por lo que no se puede precisar quien es el emisor y/o proveedor de servicio de este tipo de mensajes.”*

[Énfasis añadido]

iii) Instituto Federal de Telecomunicaciones.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/159/2022/AGS

La Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Instituto Federal de Telecomunicaciones, informará sobre el o los titulares de los números telefónicos, así como toda la información y documentación relacionada con los números telefónicos 43885, 56836 y 59895. Por tal motivo Instituto referido respondió:

- Que al ser números de cinco y no diez dígitos de conformidad con el Plan Técnico Fundamental de Numeración no le fue posible determinar al titular de dichos.
- Que el tipo de marcaciones cortas son administradas y asignadas de forma independiente por los titulares que cuentan con una concesión única o de red pública de telecomunicaciones que prestan el servicio telefonía celular móvil, números.

En este sentido, de conformidad con el artículo 7, párrafo segundo de la Ley Federal de Telecomunicaciones el Instituto Federal de Telecomunicaciones¹⁸ tiene a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, los recursos orbitales, los servicios satelitales, las redes públicas de telecomunicaciones y la prestación de los servicios de radiodifusión y de telecomunicaciones. Por ello, el artículo 54 de la ley en cita refiere que el espectro radioeléctrico y los recursos orbitales son bienes del dominio público de la Nación, cuya titularidad y administración corresponden al Estado, y que se ejercerá a través del Instituto Federal de Telecomunicaciones, por lo que, el artículo 63 menciona que dicho Instituto será la autoridad responsable de la supervisión y control técnico de las emisiones radioeléctricas.

Por su parte, el artículo 66 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, impone la obligación de tener una concesión única para prestar todo tipo de servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión, por lo que, en el artículo 75 de legislación citada establece que el Instituto Federal de Telecomunicaciones podrá otorgar concesiones para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico de uso determinado y para la ocupación y explotación de recursos orbitales. Es así como en el artículo 76, fracción I de la ley en cita se establece que la concesión podrá ser para uso comercial, confiriendo el derecho a personas físicas o morales para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico de uso determinado y para la ocupación y explotación de recursos orbitales, con fines de lucro.

¹⁸ Dicha Ley, disponible para su consulta en la dirección electrónica:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/346846/LEY_FEDERAL_DE_TELECOMUNICACIONES_Y_RADIODIFUSION.pdf

Por lo anterior, en observancia al principio de exhaustividad la Unidad Técnica, solicitó información a las empresas de telefonía móvil Radiomóvil DIPSA, S.A. de C.V., Pegaso PCS, S.A. de C.V. y Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V. y/o AT&T Comercialización Móvil, S. de R.L. de C.V., toda vez que, con la información presentada por las autoridades competentes en la materia, se visualizó la posible participación de personas morales que prestan el servicio de telefonía celular móvil.

En este sentido fue posible advertir lo siguiente:

iv) Radiomóvil DIPSA, S.A. de C.V. (Telcel).

La Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la persona moral Radiomóvil DIPSA, S.A. de C.V., informará: si había realizado la difusión de los mensajes de texto presentados a través de capturas de pantalla; el nombre de la persona que contrataría la difusión; monto del pago, periodo, modalidad y alcance de la difusión; y si la finalidad tenía algún interés político, afinidad o simpatía por la Coalición “Va por Aguascalientes”, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional y su otrora candidata a la gubernatura de Aguascalientes, la C. María Teresa Jiménez Esquivel, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 en el estado de Aguascalientes. Por tal motivo la persona moral referida respondió:

“...que existe un contrato de Prestación de Servicios de Transporte de Contenidos entre mi Representada Radiomovil Dipsa SA de CV y Terceros (Desarrollador de Contenidos), con el objeto de trasladar contenidos, no omitiendo que mi Mandante desconoce el contenido en su totalidad, ya que él mismo contrato se estipula que cualquier contenido trasladado o emitido por el desarrollador, será única responsabilidad del mismo y que para tal traslado se asigna e identifica con una numeración corta.

Por lo anterior mi mandante informa que existe un Contrato de Prestación de Servicios de Transporte de Contenidos entre mi mandante y Concepto Móvil SA de CV, con la asignación de numeración corta 43885 y 56836 numeración por la cual el Desarrollados de contenidos envía mensajes, sin embargo, mi mandante reitera desconocer el o los contenidos que son enviados por estos desarrolladores, lo que se hace de su conocimiento, para todos los efectos legales a que haya lugar.”

En este sentido se tiene que existe un contrato por la prestación de servicios de transporte de contenidos entre Radiomovil Dipsa S.A. de C.V. y Concepto Móvil S.A. de C.V.

v) Pegaso PCS, S.A. de C.V. (Movistar).

La Unidad Técnica solicitó a la persona moral Pegaso PCS, S.A. de C.V., informará: si había realizado la difusión de los mensajes de texto presentados a través de capturas de pantalla; el nombre de la persona que contrataría la difusión; monto del pago, periodo, modalidad y alcance de la difusión; y si la finalidad tenía algún interés político, afinidad o simpatía por la Coalición “Va por Aguascalientes”, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional y su otrora candidata a la gubernatura de Aguascalientes, la C. María Teresa Jiménez Esquivel, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 en el estado de Aguascalientes. Por tal motivo la persona moral referida respondió:

“(…)

1. Es menester infórmele que, únicamente el número 56836 pertenece a nuestra representada, sin embargo, se realizó una búsqueda en la base de datos de nuestra representada, y como resultado, no se encontró mensaje alguno como los descritos en la fecha indicada referente al anexo adjunto.

2. Asimismo, como observación se aprecia que, en las pantallas adjuntas, se cuenta con la leyenda de que pertenecen a distintas concesionarias a la nuestra, por tal motivo, le informo que por políticas internas no tenemos autorización de enviar mensajes de texto a otras operadoras.

(…)”

En este sentido se tiene que la persona moral Pegaso PCS, S.A. de C.V., reconoce la propiedad del número telefónico 56836, sin embargo, no encontró mensajes como los denunciados.

vi) Concepto Móvil, S.A. de C.V.

De la respuesta dada por la persona moral Radiomovil Dipsa S.A. de C.V. se advirtió la existencia de un contrato por la prestación de servicios de transporte de contenidos entre dicha persona moral y Concepto Móvil S.A. de C.V., la Unidad Técnica solicitó a la persona moral Concepto Móvil, S.A. de C.V., informará: si había

realizado la difusión de los mensajes de texto presentados a través de capturas de pantalla; el nombre de la persona que contrataría la difusión; monto del pago, periodo, modalidad y alcance de la difusión; y si la finalidad tenía algún interés político, afinidad o simpatía por la Coalición “Va por Aguascalientes”, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional y su otrora candidata a la gubernatura de Aguascalientes, la C. María Teresa Jiménez Esquivel, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 en el estado de Aguascalientes. Por tal motivo la persona moral referida respondió:

“... mi representada no maneja el desarrollo de contenido, Concepto Móvil maneja un contrato de Prestación de Servicios de Agregadores y Subagregadores para el transporte de contenido, donde Concepto Móvil, desconoce el contenido en su totalidad, ya que él mismo contrato se estipula que cualquier contenido trasladado o emitido por el Agregador o Subagregados, será su responsabilidad y que para tal traslado se asigna e identifica una numeración corta.

*2. Por lo anterior **Concepto Móvil informa que existen contratos de Prestación de Servicios para los Agregadores y Subagregadores con la asignación de numeración corta 43885, 56836 y 59895** numeración para el transporte de contenidos de mensajes, Concepto Móvil reitera desconocer los contenidos enviados”*

[Énfasis añadido]

Por lo anterior, se realizó una segunda solicitud de información a la persona moral Concepto Móvil, S.A. de C.V., para que informará los datos de identificación de las personas físicas y/o morales con las que hubiera celebrado un contrato de Prestación de Servicios de Agregadores y Subagregadores para el Transporte de Contenido con la asignación de numeración corta 43885, 56836 y 59895. Es por ello por lo que la persona moral respondió lo siguiente:

“(...

Para dicho efecto, de los registros tenemos identificamos, el contrato fue celebrado por nuestra empresa filial en Estados Unidos de América CONCEPTO MÓVIL LLC como prestadora del servicio y el subagregador que utiliza nuestra plataforma para transaccionar y tiene asignadas las marcaciones NO EXCLUSIVAS, lo que significa que varios clientes pueden utilizar la misma marcación para transaccionar mensajes SMS) en este orden de ideas, CONCEPTO MÓVIL, S.A. DE C.V., hizo del conocimiento de la empresa IDENTIDAD ADVERTISING DEVELOPMENT LLC, que se había enviado

*información de carácter político que no está autorizada conforme a los Términos y Condiciones del servicio, proporcionando dicha empresa una carta en donde señala que la **empresa responsable del envío de la información es LABS MOBILE.***

3. De lo anteriormente expuesto cabe mencionar y aclarar qué; ni Concepto Móvil S.A. de C.V., ni CONCEPTO MOVIL LLC, tienen acceso, ni administran ni mucho menos filtran contenido que se transporta en la mensajería SMS de los Subagregadores, debiendo conducir su investigación a cargo del Subagregador denominado IDENTIDAD ADVERTISING DEVELOPMENT LLC, por lo que se deberá de atender a los datos de identificación que el cliente IDENTIDAD ADVERTISING DEVELOPMENT LLC proporcione en el contrato de referencia (ratesms@identidadtelecom.net, rperez@identidadtech.com con domicilio en 848 BRICKELL AVE, STE 810. MIAMI FL 33131) que se adjunta a la presente para efectos de que la Autoridad emita el requerimiento directamente a IDENTIDAD ADVERTISING DEVELOPMENT LLC para que le proporcione la información del Cliente LABS MOBILE.

(...).

[Énfasis añadido]

De lo anterior, se observa que la persona moral responsable del envío de información es Labs Mobile.

vii) 001TECH SL, también conocida como Labs Mobile.

La Unidad Técnica de Fiscalización hizo constar: que la denominación social de Labs Mobile es 001TECH SL, que su domicilio es “C/ Mateu Ferran 6, 08030 BARCELONA”, España, y que su correo electrónico es info@labsmobile.com.

Derivado de lo anterior, se solicitó a la persona moral vía correo electrónico informar: si había realizado la difusión de los mensajes de texto presentados a través de capturas de pantalla; el nombre de la persona que contrataría la difusión; monto del pago, periodo, modalidad y alcance de la difusión; y si la finalidad tenía algún interés político, afinidad o simpatía por la Coalición “Va por Aguascalientes”, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional y su otrora candidata a la gubernatura de Aguascalientes, la C. María Teresa Jiménez Esquivel, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 en el estado de Aguascalientes. Es por lo que la persona moral respondió informando lo siguiente:

“(...)

A continuación, se contestan los puntos requeridos en el solicitud:

1. Confirmación del envío

En efecto, los mensajes SMS contenidos en el Anexo fueron enviados desde nuestra plataforma SMS que se conecta a los suscriptores de México a través del acuerdo realizado con la empresa INDENTIDAD ADVERTISING DEVELOPMET LLC. El cliente o usuario que los envió es una persona física a la que se describe a continuación.

2. Identificación del remitente y origen de los mensajes reportados:

Nombre de usuario de la cuenta (email de registro): aldo.ugarte@att-empresarial.com

Persona física: ALDO CUITLAHUAC UGARTE MERCADO

(...)

Web del cliente: <http://att.com.mx>

Sector del cliente: Telecomunicaciones

Caso de uso o como ha informado el cliente que iba a utilizar el SMS: Campañas de publicidad

Dirección IP de creación de la cuenta: 177.249.60.188

Creación de la cuenta en nuestro sistema: 2021-12-07 18:54:55

(...)"

En consecuencia, se tiene:

- Que los mensajes SMS denunciados, fueron enviados desde la plataforma de la persona moral (sociedad) 001TECH SL.
- Que el nombre de usuario de la cuenta (email registrado) en la plataforma de 001TECH SL y mediante el cual se accedió a la difusión de los mensajes SMS es aldo.ugarte@att-empresarial.com.
- Que la Web del cliente que realizó la difusión de los mensajes SMS es <http://att.com.mx>, correspondiente a la persona moral AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V. y AT&T Comercialización Móvil, S. de R.L. de C.V., ambas identificadas ya sea de manera conjunta o separadamente como AT&T México.

- Que la persona moral informa que la difusión de los mensajes denunciados fue durante el mes de mayo de la presente anualidad.

viii) Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V. y/o AT&T Comercialización Móvil, S. de R.L. de C.V., identificadas de manera conjunta o separada como AT&T.

La Unidad Técnica solicitó a la persona moral Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V. y/o AT&T Comercialización Móvil, S. de R.L. de C.V., informar: si había realizado la difusión de los mensajes de texto presentados a través de capturas de pantalla; el nombre de la persona que contrataría la difusión; monto del pago, periodo, modalidad y alcance de la difusión; y si la finalidad tenía algún interés político, afinidad o simpatía por la Coalición “Va por Aguascalientes”, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional y su otrora candidata a la gubernatura de Aguascalientes, la C. María Teresa Jiménez Esquivel, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 en el estado de Aguascalientes. Por tal motivo la persona moral referida respondió:

“1. En atención al numeral 1, se confirma que mis representadas no realizan, ni ha realizado, ni realizaron la difusión de los mensajes de texto de los números 43885 y 56863 que aparecen en el Anexo 1 del oficio.

2. En atención al numeral 2, se confirma que no fueron contratados con mis representadas, ni por personas físicas, ni por personas morales, servicios para difusión de los mensajes de texto que se visualizan en el Anexo 1 del oficio de referencia.

*Los mensajes de texto que se visualizan en el Anexo 1 del oficio de referencia identifican como números de origen (emisor) a los números 43885 y 56836. **Tal numeración es conocida como “códigos cortos” que son administrados por cada uno de los operadores de telecomunicaciones. Esto es muy importante, porque implica que son mensajes que sólo se mandan a usuarios de la misma red de dicho operador. Esto último en atención a los convenios de interconexión que en efecto han celebrado mis representadas y otros operadores de telecomunicaciones conforme a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión** y demás regulación aplicable en materia de interconexión, los cuales están registrados ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones y se encuentran visibles en la página del dicho Instituto en la liga de internet <https://rpc.ift.org.mx/vrpc>*

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/159/2022/AGS

*En este sentido, los contratos comerciales que tienen celebrados mis representadas con terceros relacionados con el envío de mensajes de texto, empleando “códigos cortos”, se limitan al envío autorizado a usuarios de AT&T México, no así a usuarios de otras redes de telecomunicaciones, y contienen cláusulas que prohíben el envío de mensajes de carácter inapropiado y ofensivo, entre los que se encuentra, el contenido político o electoral, religioso, sexual, pornográfico, racista, o de cualquier índole que sea ofensivo para los suscriptores de AT&T, como es el caso de los mensajes de texto visibles en el Anexo 1 del oficio.
(...)”*

[Énfasis añadido]

Sin embargo, de la información presentada por la persona moral 001TECH SL, fue posible advertir la aparente participación de la persona moral AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V. y AT&T Comercialización Móvil, S. de R.L. de C.V., ambas identificadas ya sea de manera conjunta o separadamente como AT&T México, como cliente de la plataforma de 001TECH SL para la difusión de los mensajes SMS denunciados, es por ello que se requirió tanto como al titular de la cuenta de correo electrónico aldo.ugarte@att-empresarial.com como a AT&T México, para que proporcionaran información respecto del pago y la finalidad de los mensajes difundidos. En este sentido la persona moral AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V. y/o AT&T Comercialización Móvil, S. de R.L. de C.V. informó lo siguiente:

“(...)”

*En atención al numeral 1, se informa que después de realizar una revisión en los archivos de AT&T, **se identificó que el señor Aldo Cuitláhuac Ugarte Mercado, tuvo una relación laboral con la empresa AT&T Administración y Servicios, S. de R.L. de C.V. (empresa de AT&T), y anteriormente, con la empresa AT&T Ventas y Servicios, S. de R.L. de C.V. (empresa recientemente fusionada con AT&T Comercialización Móvil, S. de R.L. de C.V.), reconociéndose mediante Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Indeterminado de fecha 15 de marzo de 2018, una antigüedad laboral al 8 de mayo de 2012 y causando baja dicha relación laboral el 22 de junio de 2020. Lo anterior se acredita con el Contrato Individual de Trabajo antes señalado y la baja ante el Instituto Mexicano del Seguro Social que se acompañan al presente como ANEXO CUATRO y ANEXO CINCO.***

*En atención al numeral 2, se confirma que **AT&T no solicitó al señor Aldo Cuitláhuac Ugarte Mercado, ni a cualquier otro tercero, la difusión de los mensajes de texto detallados** y que se visualizan en el Anexo 1 del oficio de*

referencia, ni durante el tiempo que el señor Aldo Cuitláhuac Ugarte Mercado trabajó para esta empresa, ni durante el periodo solicitado del mes de diciembre de 2021 al mes de mayo de 2022.

*Es importante hacer notar **que Aldo Cuitláhuac Ugarte Mercado dejó de ser empleado de AT&T el 22 de junio de 2020**, es decir, ya no era empleado de AT&T durante el periodo solicitado del mes de diciembre de 2021 al mes de mayo de 2022.*

En atención a los numerales 3 y 4, no corresponde dar respuesta alguna debido a que, mediante el numeral 2 del presente escrito de contestación, se confirmó que no se solicitó al señor Aldo Cuitláhuac Ugarte Mercado, ni a cualquier otro tercero, la difusión de los mensajes en cuestión.

*Ahora bien, en atención al numeral 5 del requerimiento de información, sirve de apoyo y sustento a lo antes señalado, **que AT&T no usa ni es titular del dominio de la cuenta de correo del señor Aldo Cuitláhuac Ugarte Mercado que se visualiza en el apartado “2. Identificación del remitente y origen de los mensajes reportados” detallado dentro del oficio de referencia.***

(...)”

Es por ello que se puede advertir lo siguiente:

- Que Aldo Cuitláhuac Ugarte Mercado dejó de ser empleado de AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V. y/o AT&T Comercialización Móvil, S. de R.L. de C.V. el 22 de junio de 2020.
- Que AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V. y/o AT&T Comercialización Móvil, S. de R.L. de C.V. no solicitó al señor Aldo Cuitláhuac Ugarte Mercado, ni a cualquier otro tercero, la difusión de los mensajes de texto detallados.
- Que AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V. y/o AT&T Comercialización Móvil, S. de R.L. de C.V. no usa ni es titular del dominio de la cuenta de correo aldo.ugarte@att-empresarial.com.

ix) C. Aldo Cuitláhuac Ugarte Mercado persona física remitente de los mensajes SMS y titular del correo electrónico aldo.ugarte@att-empresarial.com.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/159/2022/AGS

La Unidad Técnica solicitó a la persona física el C. Aldo Cuitláhuac Ugarte Mercado, informará o remitiera: aclarará su relación con la persona moral la persona moral AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V. y AT&T Comercialización Móvil, S. de R.L. de C.V., así como si había realizado a su nombre y/o de la persona moral referida la difusión de los mensajes de texto señalados por 001TECH SL; o bien, si dicha contratación fue realizada por los por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional y/o su otrora candidata a la gubernatura de Aguascalientes, la C. María Teresa Jiménez Esquivel, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 en el estado de Aguascalientes; asimismo, señalara si era militante o simpatizante de los partidos mencionados; Por tal motivo el ciudadano mencionado, el once de julio de la presente anualidad a las veintiún horas con treinta y un minutos respondió: en el tenor siguiente:

- Que no tiene relación ni contrató con la persona moral AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V. y AT&T Comercialización Móvil, S. de R.L. de C.V.
- Que no realizó a nombre de AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V. y AT&T Comercialización Móvil, S. de R.L. de C.V., los mensajes de texto señalados.
- Que los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional y su otrora candidata a la gubernatura de Aguascalientes, la C. María Teresa Jiménez Esquivel, no celebraron operaciones con él para el envío de los mensajes mencionados.
- Que no es militante ni simpatizante de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional.

De este modo, la Unidad Técnica de Fiscalización realizó la búsqueda en el Padrón de Afiliados a partidos políticos de este Instituto Nacional Electoral, con el propósito de verificar y validar si el C. Aldo Cuitláhuac Ugarte Mercado se encontraba afiliado a alguno de los partidos políticos integrantes de la coalición “Va por Aguascalientes”, Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional o Partido de la Revolución Democrática, de lo que se advirtió que dicho ciudadano no se encuentra registrado como militante de los partidos antes mencionados, lo cual se hizo constar mediante razón y constancia.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/159/2022/AGS

De igual forma, se hizo contar mediante razón y constancia que el C. Aldo Cuitláhuac Ugarte Mercado, no se encuentra registrado en el Registro Nacional de Proveedores de este Instituto.

Después de asentar la información de la que se allegó esta autoridad, es importante resaltar que de conformidad con el artículo 190, fracción II, inciso b) de la Ley Federal de Telecomunicaciones los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados deberán: Conservar un registro y control de comunicaciones que se realicen desde cualquier tipo de línea que utilice numeración propia o arrendada, bajo cualquier modalidad, que permitan identificar con precisión el tipo de comunicación (transmisión de voz, buzón vocal, conferencia, datos), servicios suplementarios (incluidos el reenvío o transferencia de llamada) o servicios de mensajería o multimedia empleados (**incluidos los servicios de mensajes cortos**, servicios multimedia y avanzados). Sin embargo, de las personas morales mejor conocidas como Movistar, Telcel, AT&T requeridas no fue posible advertir ningún tipo de registro, mientras que, por lo que hace a la persona moran 001TECH SL sí fue posible encontrar un registro.

En este sentido, respecto de los elementos mínimos a considerar para identificar los mensajes SMS como gasto de campaña, es posible advertir por lo que hace a la **temporalidad** que la persona moral 001TECH SL informa que los mensajes denunciados fueron difundidos durante el mes de mayo de dos mil veintidós, periodo que coincide con el Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 en el estado de Aguascalientes; mientras que por lo que hace a la **territorialidad**, no fue posible establecer el área geográfica donde se difundieron los mensajes; y por lo que hace a la **finalidad**, no es posible establecer que los mensajes difundidos generaran un beneficio a la Coalición “Va por Aguascalientes”, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional y su otrora candidata a la gubernatura de Aguascalientes, la C. María Teresa Jiménez Esquivel, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 en el estado de Aguascalientes.

En ese contexto, analizando el contenido de los mensajes que dieron origen al presente análisis, no se advierte ningún elemento del que se desprenda que los mismos puedan ser catalogados como propaganda electoral en beneficio de las personas incoadas, toda vez que no se detecta que su difusión haya sido realizada o solicitada por la Coalición “Va por Aguascalientes”, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional y su otrora candidata a la gubernatura de Aguascalientes, la C. María Teresa Jiménez

Esquivel, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 en el estado de Aguascalientes.

En las relatadas condiciones, al concatenar el conjunto de medios de prueba existentes, esta autoridad electoral tiene elementos de convicción que le permiten determinar lo siguiente:

- Que se denunció la difusión de mensajes SMS de los números telefónicos 43885, 56836 y 59895, sin embargo la parte quejosa solo aportó material probatorio de los números 43885 y 56836.
- Que las pruebas con las que el quejoso pretendió acreditar su dicho son catalogadas como pruebas técnicas, por lo que, al no concatenarse con ningún elemento probatorio recabado por esta autoridad, no se genera convicción sobre el beneficio para las personas denunciadas por la difusión de mensajes a través de los números telefónicos 43885, 56836 y 59895.
- Que Radiomóvil DIPSA, S.A. de C.V. menciona desconocer el o los contenidos que son enviados por los desarrolladores.
- Que existe contratos de prestación de servicios con la asignación de numeración corta 43885, 56836 y 59895 numeración para el transporte de contenidos de mensajes, entre Radiomóvil DIPSA, S.A. de C.V., y Concepto Móvil, S.A. de C.V.
- Que Concepto Móvil, S.A. de C.V. menciona que no tiene acceso, ni administración, ni mucho menos filtro del contenido que se transporta en la mensajería SMS de los Subagregadores.
- Que 001TECH SL informa que la difusión de los mensajes denunciados se realizó a través de su plataforma, y que la persona que los contrató es el C. Aldo Cuitláhuac Ugarte Mercado, quien, al dar respuesta al requerimiento formulado, señala no haber celebrado operaciones ni ser militante o simpatizante de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, ni de sus otrora candidata a la gubernatura de Aguascalientes, la C. María Teresa Jiménez Esquivel.
- Que de la verificación realizada por la autoridad se desprende que el C. Aldo Cuitláhuac Ugarte Mercado no es militante de los partidos políticos

mencionados, ni se encuentra inscrito en el Registro Nacional de Proveedores de este Instituto.

- Que los mensajes SMS no presentan propaganda electoral en favor de la Coalición “Va por Aguascalientes”, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional y su otrora candidata a la gubernatura de Aguascalientes, la C. María Teresa Jiménez Esquivel, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 en el estado de Aguascalientes.

En este sentido, una vez que esta autoridad electoral ha valorado la totalidad de los elementos probatorios encontrados, se concluye que no existen mayores elementos que generen certeza del origen del dinero con el que fue pagada la difusión de los mensajes SMS denunciados; en consecuencia, no es posible sostener que los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, así como la C. María Teresa Jiménez Esquivel tienen responsabilidad alguna por el pago de dicho concepto.

En las relatadas condiciones, y toda vez que no se desprende que la difusión de los mensajes SMS denunciados, tuvieran que ser reportadas por la Coalición “Va por Aguascalientes”, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional y su otrora candidata a la gubernatura de Aguascalientes, la C. María Teresa Jiménez Esquivel, y presentar documentación comprobatoria ante la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral dentro de la revisión de los informes de ingresos y gastos de la campaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 en el estado de Aguascalientes, se considera que ante la duda razonable sobre el particular, debe aplicarse a favor de la Coalición “Va por Aguascalientes”, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional y su otrora candidata a la gubernatura de Aguascalientes, la C. María Teresa Jiménez Esquivel el principio jurídico “*In dubio pro reo*”, reconocido por el Derecho Administrativo Sancionador en materia electoral.

A mayor abundamiento, resulta aplicable el criterio vertido en la siguiente Jurisprudencia:

DUDA ABSOLUTORIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. El aforismo “in dubio pro reo” no tiene más alcance que el consistente en que en ausencia de prueba plena debe absolverse al acusado. Instancia: Tribunales

Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Parte : 75, Marzo de 1994. Tesis: VII. P. J/37. Página: 63.

Asimismo, sirve como sustento de la aplicabilidad del principio de “in dubio pro reo”, dentro de los procedimientos administrativos, la tesis siguiente:

DUDA SOBRE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. APLICACIÓN DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. MULTAS. *Al no ser razonable que una infracción se haya cometido, tratándose de multas por violación a las disposiciones administrativas legales, resulta aplicable el principio jurídico in dubio pro reo. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Parte: 33 Sexta. Parte Tesis: Página: 24.*

También resultan aplicables las siguientes las tesis relevantes identificadas con las claves LIX/2001 y XVII/2005, respectivamente, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo y rubro y texto son al tenor siguiente:

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.- *De la interpretación de los artículos 14, apartado 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8o., apartado 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por nuestro país en términos del 133 de la Constitución federal, aplicados conforme al numeral 23, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que el principio de presunción de inocencia que informa al sistema normativo mexicano, se vulnera con la emisión de una Resolución condenatoria o sancionatoria, sin que se demuestren suficiente y fehacientemente los hechos con los cuales se pretenda acreditar el supuesto incumplimiento a las disposiciones previstas en las legislaciones. Lo anterior en razón de que dicha presunción jurídica se traduce en un derecho subjetivo de los gobernados a ser considerados inocentes de cualquier delito o infracción jurídica, mientras no se presente prueba bastante que acredite lo contrario, en el entendido que, como principio de todo Estado constitucional y democrático de derecho, como el nuestro, extiende su ámbito de aplicación no sólo al ámbito del proceso penal sino también cualquier Resolución, tanto administrativa como jurisdiccional, con inclusión, por ende, de la electoral, y de cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio o limitativo de los derechos del gobernado.*

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.- *La presunción de inocencia es una garantía del acusado de una infracción administrativa, de la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado como inocente mientras no*

se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que las autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder, involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios, con elementos simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre su autoría o participación en los hechos imputados. A través de esta garantía se exige, que las autoridades sancionadoras reciban o recaben pruebas idóneas, aptas y suficientes, con respeto irrestricto de todas las formalidades y requisitos del debido proceso legal, sin afectación no autorizada de los derechos fundamentales, y mediante investigaciones exhaustivas y serias, dirigidas a conocer la verdad objetiva de los hechos denunciados y de los relacionados con ellos, respecto al objeto de la investigación, mientras no se cuente con los elementos con grado suficiente de convicción sobre la autoría o participación en los mismos del indiciado, para lo cual deberán realizarse todas las diligencias previsibles ordinariamente a su alcance, con atención a las reglas de la lógica y a las máximas de experiencia, dentro de la situación cultural y de aptitud media requerida para ocupar el cargo desempeñado por la autoridad investigadora, y que esto se haga a través de medios adecuados, con los cuales se agoten las posibilidades racionales de la investigación, de modo que, mientras la autoridad sancionadora no realice todas las diligencias necesarias en las condiciones descritas, el acusado se mantiene protegido por la presunción de inocencia, la cual desenvuelve su protección de manera absoluta, sin verse el indiciado en la necesidad de desplegar actividades probatorias en favor de su inocencia, más allá de la estricta negación de los hechos imputados, sin perjuicio del derecho de hacerlo; pero cuando la autoridad responsable cumple adecuadamente con sus deberes y ejerce en forma apropiada sus poderes de investigación, resulta factible superar la presunción de inocencia con la apreciación cuidadosa y exhaustiva de los indicios encontrados y su enlace debido, y determinando, en su caso, la autoría o participación del inculpado, con el material obtenido que produzca el convencimiento suficiente, el cual debe impeler al procesado a aportar los elementos de descargo con que cuente o a contribuir con la formulación de inferencias divergentes, para contrarrestar esos fuertes indicios, sin que lo anterior indique desplazar el onus probandi, correspondiente a la autoridad, y si el indiciado no lo hace, le pueden resultar indicios adversos, derivados de su silencio o actitud pasiva, porque la reacción natural y ordinaria de una persona imputada cuya situación se pone en peligro con la acumulación de pruebas incriminatorias en el curso del proceso, consiste en la adopción de una conducta activa de colaboración con la autoridad, en pro de sus intereses, encaminada a desvanecer los indicios perniciosos, con explicaciones racionales encaminadas a destruirlos o debilitarlos, o con la aportación de medios probatorios para acreditar su inocencia.

Cabe destacar, que el principio *in dubio pro reo*, en sentido negativo, prohíbe a una autoridad o tribunal condenar al acusado si no obtiene la certeza sobre la verdad de la imputación. Ahora bien, la exigencia positiva de dicho principio obliga a absolver al acusado al no obtener la certeza que implique acreditar los hechos por los que se procesa a un individuo.

Asimismo, cabe advertir que el principio *in dubio pro reo* es un beneficio para el sujeto imputado en el caso de que exista la duda del juzgador frente a las pruebas que obran dentro del expediente, por lo que si en el estudio del presente asunto no se acredita de manera fehaciente la presunta infracción cometida por el sujeto denunciado, al no existir prueba plena que corrobore los hechos imputados, esta autoridad, siguiendo los principios que rigen el *ius puniendi* se encuentra imposibilitada para emitir una Resolución condenatoria.

En este sentido, en nuestro sistema jurídico prevalece el principio de presunción de inocencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 16, en relación con el 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo establecido en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado mexicano e integrados al orden jurídico mexicano en términos de lo dispuesto en el artículo 133 constitucional, a saber, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, vigente en la República desde el veintitrés de junio de mil novecientos ochenta y uno (artículo 14, apartado 2), y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, vigente en la República desde el veinticuatro de marzo de mil novecientos ochenta (artículo 8, apartado 2).

En los procedimientos sancionadores electorales, tal presunción de inocencia se traduce en el derecho subjetivo de los partidos políticos denunciados a ser considerados inocentes de cualquier infracción, mientras no se presente prueba bastante para derrotarla y de cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio. En este sentido, la máxima *in dubio pro reo* (presunción de inocencia) obliga a absolver en caso de duda sobre la culpabilidad o responsabilidad del acusado.

Sirven de apoyo a lo anterior, la tesis relevante emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se transcribe a continuación:

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE RECONOCERSE ESTE DERECHO FUNDAMENTAL EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.—El artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, reconoce expresamente el derecho de presunción de inocencia, consagrada en el derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8°, apartado 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, en términos del artículo 133 de la Constitución federal, como derecho fundamental, que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento jurisdiccional o administrativo que se desarrolle en forma de juicio, consecuencias previstas para un delito o infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece una adecuada tutela de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el debido proceso. En atención a los fines que persigue el derecho sancionador electoral, consistentes en establecer un sistema punitivo para inhibir conductas que vulneren los principios rectores en la materia, como la legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y objetividad, es incuestionable que el derecho constitucional de presunción de inocencia ha de orientar su instrumentación, en la medida que los procedimientos que se instauran para tal efecto, pueden concluir con la imposición de sanciones que incidan en el ámbito de derechos de los gobernados.

Recurso de apelación. SUP-RAP-71/2008.—Actor: Partido Verde Ecologista de México.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—2 de julio de 2008.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretario: Fabricio Fabio Villegas Estudillo.”

En consecuencia, del análisis de las constancias que obran en el expediente de mérito y al adminicular los elementos de prueba obtenidos por la Unidad Técnica de Fiscalización, atendiendo tanto a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, como a los principios rectores de la función electoral, esta autoridad electoral Nacional concluye que no se cuenta con certeza de que la Coalición “Va por Aguascalientes”, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional y su otrora candidata a la gubernatura

de Aguascalientes, la C. María Teresa Jiménez Esquivel hubiesen realizado los pagos para la difusión de los mensajes SMS materia del presente apartado, así como tampoco se cuenta con certeza de que el concepto por la difusión de los mensajes SMS haya beneficiado a dichos institutos políticos y su entonces candidata.

Por lo anteriormente expuesto, se considera que no existen elementos que configuren una conducta infractora de lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso i); 54, numeral 1, inciso f); y 79, numeral 1, inciso b), fracciones I y III de Ley General de Partidos Políticos; y 96, numeral 1; 121, numeral 1, incisos i) y j); y 127 del Reglamento de Fiscalización, por lo que, se concluye que la Coalición “Va por Aguascalientes”, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, así como a su otrora candidata a la gubernatura de Aguascalientes, la C. María Teresa Jiménez Esquivel, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 en el estado de Aguascalientes, no vulneraron la normatividad aplicable en materia de origen, destino y aplicación de recursos de los partidos políticos, por ello, el apartado en análisis debe declararse infundado.

4. Vista al Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes.

Tal y como se indicó en el apartado anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización para la sustanciación del presente procedimiento realizó diversas diligencias, entre ellas, una solicitud de información a la empresa 001TECH SL respecto de los números materia de investigación.

En este sentido, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la persona moral 001TECH SL informará: si había realizado la difusión de los mensajes de texto presentados a través de capturas de pantalla; el nombre de la persona que contrataría la difusión; monto del pago, periodo, modalidad y alcance de la difusión; y si la finalidad tenía algún interés político, afinidad o simpatía por la Coalición “Va por Aguascalientes”, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional y su otrora candidata a la gubernatura de Aguascalientes, la C. María Teresa Jiménez Esquivel, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 en el estado de Aguascalientes.

En este sentido, la persona moral requerida informó entre otras cuestiones:

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/159/2022/AGS

- Que los mensajes SMS denunciados, fueron enviados desde su plataforma, y que la persona que los contrató fue el C. Aldo Cuitláhuac Ugarte Mercado.
- Que la difusión de los mensajes denunciados fue durante el mes de mayo de la presente anualidad.
- Que existieron mensajes difundidos en el mes de diciembre de dos mil veintiuno.

El total de mensajes enviados se puede observar en el anexo 1¹⁹ de la presente resolución, mismos que se engloban en los siguientes mensajes:

No.	MENSAJE
1	#Urgente, el CEN del PAN confirma: Tere Jiménez dijo la verdad, ganó dos de las tres encuestas. https://fb.watch/9M_Y3PoVF6/
2	#Urgente, el CEN del PAN confirma: Tere Jimenez dijo la verdad, gana dos de las tres encuestas. https://fb.watch/9M_Y3PoVF6/
3	CEN del PAN confirma: TERE JIMENEZ dijo la verdad, gana las encuestas, toda la verdad en el siguiente link https://n9.cl/p8djk
4	CEN del PAN confirma: TERE JIMENEZ dijo la verdad, gana las encuestas, toda la verdad en el siguiente link https://n9.cl/p8djk
5	Urgente, el CEN del PAN confirma: Tere Jimenez dijo la verdad, gana dos de las tres encuestas.
6	Urgente, el CEN del PAN confirma: Tere Jimenez dijo la verdad, gana dos de las tres encuestas. https://fb.watch/9M_Y3PoVF6/

Por tal motivo, esta autoridad tuvo conocimiento de la difusión de mensajes SMS con posible propaganda electoral dentro del periodo que abarca el mes de diciembre de dos mil veintiuno.

¹⁹ Es importante mencionar que los datos contenidos en el anexo son copia fiel y exacta de los remitidos por la persona moral 001TECH SL, también conocida como Labs Mobile, por lo que cualquier signo o símbolo distinto, es posible que se genere por una incorrecta codificación de caracteres por parte de la persona moral antes indicada.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/159/2022/AGS

De este modo, en términos del artículo 5, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, este Consejo General considera procedente dar vista al Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes con copia certificada de las constancias que integraron el expediente de mérito, para que en el ámbito de sus atribuciones proceda conforme a derecho, respecto de la difusión de mensajes SMS en el mes de diciembre de dos mil veintiuno, por posibles actos anticipados de precampaña.

Por último, se considera procedente requerir al Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes para que informe la determinación que su caso haya recaído a la causa que se hace de su conocimiento.

5. Notificación electrónica. Que con fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, en sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto **aprobó el Acuerdo INE/CG302/2020**, por el que determinó la **notificación electrónica** de las actuaciones relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización.

En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente:

1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado.

Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por de la pandemia del COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas, rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo electrónico.

2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de notificación la realizada “vía electrónica”.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/159/2022/AGS

3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del conocimiento de los entes y personas obligadas la determinación de la autoridad electoral.

En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo General aprueba que las notificaciones a los entes y personas obligadas en materia de fiscalización sean realizadas de manera electrónica.

En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones se realicen a los entes y personas obligadas de forma electrónica a través del SIF, respecto de aquellos entes y personas obligadas que cuenten con acceso al módulo de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017, para que en su caso, y por su conducto realice la notificación a los interesados.

En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se

R E S U E L V E

PRIMERO. Se **desecha parcialmente** la queja interpuesta por la Representación del Partido Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por lo que hace a la denuncia de propaganda negativa en contra de su candidata a la gubernatura de Aguascalientes, la C. Nora Ruvalcaba Gámez, en los términos de lo expuesto en el **Considerando 2** de la presente Resolución.

SEGUNDO. Se **declara infundado** el presente procedimiento administrativo sancionador electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de la Coalición “Va por Aguascalientes”, integrada por los partidos Acción Nacional, de la

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/159/2022/AGS

Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, así como de su otrora candidata a la gubernatura de Aguascalientes, la C. María Teresa Jiménez Esquivel, en los términos del **Considerando 3, apartados A, B y C** de la presente Resolución.

TERCERO. En términos del considerando 2, apartado **A. Vista al Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes**, se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que, por su conducto, se remita la presente Resolución a la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes.

Dentro de los tres días siguientes a que se haya realizado la notificación indicada en el párrafo precedente, la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales deberá remitir las constancias de notificación a la Dirección de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización con la finalidad de que las mismas se integren al expediente INE/Q-COF-UTF/159/2022/AGS.

CUARTO. En términos del considerando 4 de la presente resolución, se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización dar vista al Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, remitiéndole copia certificada de las constancias que integran el expediente INE/Q-COF-UTF/159/2022/AGS.

QUINTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización notifique electrónicamente la presente resolución a los partidos políticos Morena, Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, así como a la C. María Teresa Jiménez Esquivel, a través del Sistema Integral de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el Considerando 5 de la presente Resolución.

SEXTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el recurso que procede en contra de la presente determinación es el denominado "recurso de apelación", el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

SÉPTIMO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/159/2022/AGS

La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 20 de julio de 2022, por votación unánime de las y los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.

Se aprobó en lo particular por lo que hace al criterio de depender de un pronunciamiento previo del contencioso, respecto de diversos hechos denunciados en materia de fiscalización, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por diez votos a favor de las y los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y un voto en contra del Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.

**EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL**

**EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL**

**DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO**

**LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA**